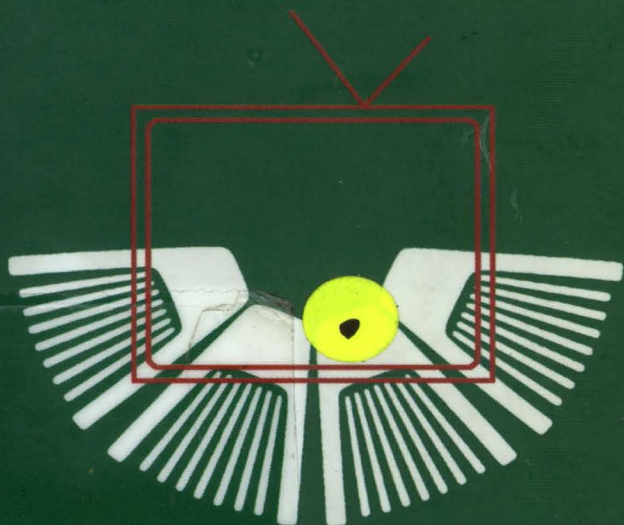


BERNARDO MABIRE

**Políticas culturales
y educativas
del Estado mexicano
de 1970 a 1997**



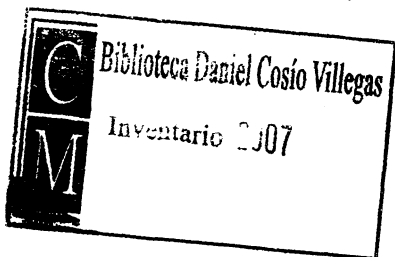
308
J88
no. 139
ej. 2

jornadas
139

COLEGIO DE MÉXICO



3 9 0 5 0 7 4 5 1 9 6 1



Fecha de vencimiento

DEVUELTO

DEVUELTO

19 AGO 2009

DEVUELTO

19 AGO 2009

DEVUELTO

DEVUELTO

18 AGO 2009

DEVUELTO

11 FNE. 2010

JORNADAS 139

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

POLÍTICAS CULTURALES
Y EDUCATIVAS DEL ESTADO
MEXICANO DE 1970 A 1997

Bernardo Mabire



Jornadas 139

EL COLEGIO DE MÉXICO

Biblioteca Daniel Cosío Villegas

EL COLEGIO DE MÉXICO A. C.

354.072

M1127p

Mabire, Bernardo.

Políticas culturales y educativas del Estado mexicano de 1970 a 1997 / Bernardo Mabire. -- México : El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, 2003.

163 p. ; 16 cm. -- (Jornadas ; 139)

ISBN 968-12-1094-8

1. Política cultural -- México -- Siglo XX. 2. Educación y estado -- México -- Siglo XX. 3. México -- Política y gobierno -- Siglo XX.

Open access edition funded by the National Endowment for the Humanities/Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program.



The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License: <https://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/>

Portada de Irma Eugenia Alva Valencia

Primera edición, 2003

D.R. © El Colegio de México, A.C.

Camino al Ajusco 20

Pedregal de Santa Teresa

10740 México, D.F.

www.colmex.mx

ISBN 968-12-1094-8

Impreso en México / *Printed in Mexico*

ÍNDICE

Definiciones elementales	11
Importancia de las políticas culturales del gobierno	14
El Estado revolucionario, constructor y educador	22
Un balance de la etapa anterior a 1970	25
Echeverría y el nacionalismo tercermundista	35
López Portillo y su país respetable	45
De la Madrid y la austeridad como expiación	51
Salinas y la tensión detrás del triunfalismo	56
Zedillo y la debacle del antiguo régimen	70
Una evaluación preliminar	79
Breve reseña de historia de la educación	85
Los primeros libros de texto para la educación primaria	90
El debate “educativo” de 1961	94
Los libros de texto “subversivos” de 1975	98
El debate “educativo” de 1975	116
Los libros de texto “restauradores” de 1992	128
El debate “educativo” de 1992	149
Epílogo con más nostalgia que esperanza	160

Agradezco a mis colegas de El Colegio de México sus observaciones en un seminario que organizó Lorenzo Meyer, quien está editando para Océano, junto con Ilán Bizberg, una colección de historia contemporánea en la que se incluirá una versión abreviada de este trabajo. Los comentarios de Lorenzo Meyer y Eduardo Guerrero fueron particularmente valiosos, así como los de Martha Elena Venier, Eduardo Martínez y Javier Villanueva. Muchas gracias también a Gabriela Carranza por su ayuda documental, a mi madre por una lectura escrupulosa del borrador y a Ámbar y Bernie por sus cálidos consejos.

DEFINICIONES ELEMENTALES

Son políticas culturales las que exaltan y dan a conocer, entre su propia población y en el exterior, el patrimonio de creaciones y sensibilidades de una comunidad, básicamente por conducto de los medios de difusión, no sin antes patrocinar su estudio o incluso contribuir directamente a reproducir el legado para asegurar su permanencia; como éste suele ser una de las bases del orgullo de pertenecer a la nación, divulgarlo es una manera de avivar el patriotismo.¹

¹ A pesar de la antigüedad de algunos de ellos, siguen siendo de interés estudios históricos sobre la evolución del nacionalismo como los de Carlton J. Hayes, *The Historical Evolution of Modern Nationalism*, New York, R. Smith Inc., 1931; Frederick Hertz, *Nationality in History and Politics*, London, Routledge and Kegan Paul Ltd., 1944; Rupert Emerson, *From Empire to Nation. The Rise to Self Assertion of Asian and African Peoples*, Cambridge, Harvard University Press, 1962; Hans Kohn, *Nationalism: Its Meaning and History*, Princeton, D. Van Nostrand Company, 1965; Hugh Seton Watson, *Nations and States*, Boulder, Westview Press, 1977; Ernest Gellner, *Nations and Nationalism*, Ithaca, Cornell University Press, 1983. Uno con influencia de la psicología es el de Leonard W. Doob, *Patriotism and*

La riqueza cultural (que abarca, en rigor, todas las artes y el grueso de las formas de conocimiento y expresión estética e intelectual que distinguen a un país y le merecen el reconocimiento de otros) no es, sin embargo, equivalente a la conciencia nacional ni basta por sí misma para apuntalarla; lo anterior es más obvio en países con historias problemáticas, donde profundos conflictos internos, derivados de grandes diferencias sociales y culturales, frenaron durante siglos la consolidación de un ente público, y por eso el Estado, que precedió a la nación, tomó en sus manos la tarea de moldearla.² Empero, el objetivo a largo plazo de utilizar instrumentos de difusión para influir en la psique colectiva ciertamente es el de reforzar,

Nationalism. Their Psychological Foundations, New Haven, Yale University Press, 1964. Otro más, que se concentra en las teorías del nacionalismo, se debe a Anthony D. Smith, *Theories of Nationalism*, London, Duckworth, 1983.

² Entre los estudios clásicos del nacionalismo mexicano, que paradójicamente son obra de investigadores estadounidenses, se recomiendan los de Frederick C. Turner, *The Dynamic of Mexican Nationalism*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1968, y David A. Brading, *Los orígenes del nacionalismo mexicano*, México, SEP, 1973 (Sepsetentas, núm. 82). La compilación de Samuel L. Baily (ed.), *Nationalism in Latin America*, New York, Knopf, 1971, permite comparar el nacionalismo mexicano con los de otros países latinoamericanos. Se recomiendan también Gerhard Masur, *Nationalism in Latin America*, New York, The Macmillan Company, 1966, y David Schers, *Nationalism and Development in Latin America*, Tel Aviv, The David Horowitz Institute, 1977.

cuando no crear, dos ingredientes indispensables para la vida de una sociedad: la imagen del país³ (en la mente de sus habitantes y frente al resto del mundo) y el sentimiento de identidad nacional al que sirve la primera como marco de referencia. Inventarlos no ha sido empresa fácil en México, al que fragmentó su propia historia, por lo cual el avance en ese camino es medida de progreso en la integración nacional.⁴

Sin menoscabo de la importancia inherente a las políticas culturales, un riesgo de escribir sobre las que desplegó el Estado mexicano —quizá no tan numerosas como las que escatimó— en el periodo de 1970 a mediados de los años noventa es el de producir un trabajo demasiado ligero por el rápido agotamiento de su tema de estudio, que a duras penas sobrevivió en ese lapso, aunque el mito que edificó la práctica oficial en la materia subsanara las flaquezas tangibles; sin embargo, la pobreza del objeto analizado encierra interés en sí misma, y no faltan substitutos

³ Ha estudiado el papel de la imaginación en el fortalecimiento de la conciencia nacional un teórico reciente del nacionalismo, Benedict Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London, Verso, 1983.

⁴ El mejor examen teórico de los elementos materiales e ideológicos que nutren el nacionalismo sigue siendo el de Karl Deutsch en tres libros clásicos, de los cuales el último es una compilación: *Nationalism and Social Communication*, Cambridge, The Technology Press of the MIT, 1953; *Nationalism and its Alternatives*, New York, Knopf, 1969; *Nation Building*, New York, Atherton Press, 1966.

ni paliativos dignos de atención. Es probable que, por considerarse el tema secundario (y lo ha sido en realidad, porque la acción de los gobiernos quedó siempre por debajo de las intenciones declaradas en el terreno cultural), el análisis *respectivo* atraiga a pocos lectores. Finalmente, el carácter un tanto nebuloso de las políticas que me ocupan (atribuible a la diversidad de sus herramientas y de sus ámbitos de acción), aunado a la imposibilidad de medir con exactitud sus efectos (pues no se dispone de indicadores comparables con la tasa de crecimiento del producto *per capita*, por ejemplo, que permite juzgar la eficacia de las estrategias económicas), hará inevitables las generalizaciones, anécdotas y reseñas de impresiones completamente subjetivas, por las que ofrezco, de antemano, una disculpa entrelazada con la esperanza de que no sean inútiles para el intento de explicación.

IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS CULTURALES DEL GOBIERNO

En una vena más optimista, valga proponer, por analogía con las ciencias naturales, que cualquier acción de un sistema de gobierno revela su temperamento y expone sus relaciones simbióticas con la sociedad en la que está arraigado. Las políticas culturales públicas, pese a que no tienen límites bien definidos por

las razones mencionadas, deberían entonces ilustrar cambios en las instituciones del país en el curso de treinta años. Más aún, a la luz del precedente histórico, en México esas políticas del Estado, supuestamente abortadas durante decenios en consolidar la nación, pese a que fueron esporádicas se convirtieron en fuente de legitimidad. Pero como ésta nunca fue absoluta, en parte porque la acción de los mandatarios del siglo XX tuvo graves deficiencias, y porque persistió la oposición de grupos que por principio rechazaban la tesis misma de un Estado constructor y propugnaban la idea de una nación capaz de consolidarse con su hipotética energía propia, es útil estudiar las políticas culturales de los gobiernos en cuanto han sido “prueba de fuego” de los linderos fluctuantes de la intervención estatal en varias esferas de la vida mexicana.

Sigue abierta la polémica sobre cuáles son las fronteras óptimas entre el espacio público y el privado, y no se extinguirá pronto el debate, ya que hay verdad tanto en señalar que la injerencia del Estado en el plano económico, el cultural y otros estuvo asociada con la perpetuación de algunos rasgos opresivos del sistema político, cuanto en advertir que la acción estatal combatió otras opresiones incrustadas en arcaicas relaciones sociales, que habrían tenido consecuencias destructivas si la autoridad gubernamental las hubiera dejado seguir libremente su curso. Puesto que la paradoja medular del país se resume en

que la organización política que lo salvó de desintegrarse era la misma que inhibía su pleno florecimiento, el dilema concomitante del Estado fue el de optar entre dos vías: proseguir labores constructivas (que desempeñó por largo tiempo, pero con vaivenes, y en general sin alcanzar propósitos más ambiciosos que las acciones desplegadas) o limitar su papel para reconocer el de otras fuerzas sociales y el de legados históricos aparentemente fuera de control. En la segunda mitad del siglo XX fue más común que los gobiernos eligieran lo primero, no sin dificultad para establecer la diferencia entre guiar y controlar, porque, a la vez que era necesario inducir la uniformidad indispensable⁵ para el desarrollo económico, parecía justo el intento de reconciliar impulsos de homogeneización cultural con el respeto por la diversidad de los grupos constitutivos del país.

⁵ Se podría discutir respecto a si la uniformidad es una condición preliminar para el desarrollo económico o una de sus consecuencias, pero ciertamente van juntos en la práctica, quizá porque toda industrialización exitosa ha requerido mejoras en la educación (que implican homogeneizarla), acuerdo respecto a objetivos básicos (con la subsecuente difusión de premisas ideológicas compartidas) y movilidad de los factores productivos (que también exige su igualación para hacerlos intercambiables en una economía articulada). Por otra parte, no se encontrará por el planeta un país que se haya “modernizado” de raíz (según los criterios occidentales) en tanto lo desgarran condiciones de desigualdad extrema, diferencias de mentalidad marcadas o graves conflictos sociales, étnicos o religiosos.

En todo caso, la definición de México que formularon sus gobernantes fue el corazón de los proyectos nacionales que concibieron, y moldear una imagen de nación acorde con ellos permitió a las élites dirigentes anticipar giros de su actuación o, las más de las veces, justificar los ya ocurridos por causas que las rebasaron. De ahí que las políticas culturales sean maquinaria privilegiada para discernir una voluntad de cambio selectiva de la clase gobernante en los últimos treinta años, que insistió en mantener inalterados algunos rasgos de la organización política y social para facilitar la transformación de otros. Además, el estudio de la forma en que se adoptaron esas políticas y se llevaron a la práctica equivale a trazar un bosquejo del funcionamiento de las instituciones públicas y de las relaciones de poder que entablaron éstas entre sí y con varios grupos fuera del sistema. El último punto, el de los vínculos entre Estado y sociedad, es un buen indicador de evolución política —o de inmovilidad— al paso del tiempo. Más aún, dado que la opulencia o la miseria de las políticas culturales depende, en parte, de los recursos disponibles para financiarlas, es razonable inferir de su estudio algún recuento esquemático de historia de la economía. Finalmente, como los intentos por trazar un retrato del país y una identidad nacional conllevan una toma de posición frente a la comunidad internacional, el examen de las políticas relativas a la cultura puede servir, de paso, para delinear el contex-

to mundial en el que ha vivido México y para medir el alcance de sus acciones, que ha dependido tanto del cúmulo de recursos locales cuanto de la ayuda externa, pero también de las barreras que impusieron otros países.

Entre las políticas culturales del Estado mexicano o sus remedos, podrían citarse el uso tímido, cuando ha sido directo, de los medios de difusión (radio, televisión, periódicos y, en mucho menor medida, libros); algunos programas especiales con efectos no deleznales, por ejemplo, los de patrocinio a ciertas formas de creación artística (siempre tachados de arbitrarios e interesados) y los de subvenciones a grupos indígenas; las principales medidas de apoyo a la educación superior y a la investigación científica, por momentos apenas discernibles en un ambiente de crisis económica que dura ya un cuarto de siglo; y, con cierta piedad, la diplomacia, en reconocimiento de algunas declaraciones llamativas que por instantes parecieron alterar el rostro del país. En cualquiera de estos rubros, se distinguen decisiones de gobierno (plasmadas en la publicación de materiales didácticos, las asignaciones de presupuesto, la suscripción de acuerdos y otros actos de los cuales ha quedado testimonio) que denotan una combinación paradójica de innovación y continuidad.

Por otra parte, cada elemento de estudio es adecuado para analizar aspectos particulares de la política y la sociedad en México. Sobraría recalcar la tras-

endencia de los medios de comunicación, que propagan visiones destinadas al consumo de la mayoría de los mexicanos, ya sea para completar el papel de la educación formal o para sustituirla. En lo que se refiere a la televisión, cuando los gobiernos han tenido el ánimo de utilizarla directamente (pero ha sido más usual la complicidad con los inexpugnables grupos empresariales que controlan las difusoras privadas), frecuentemente han vacilado ante la disyuntiva de “crear alternativas culturales” o hacer concesiones a los gustos del público forjados por intereses comerciales, tras lo cual se perfila el dilema entre estatismo y libre mercado, así como la contradicción entre resabios de un ideario antiyanqui y la disposición en aumento del Estado a rendirse ante la influencia que ejerce la cultura de masas estadounidense entre la población mexicana. Además, si fuera posible apreciar variaciones en el control del gobierno sobre los medios de difusión y la prensa, se tendrían bases para una medición aproximativa del autoritarismo oficial, equiparable al de la sociedad por la necesaria correspondencia entre gobierno y pueblo.

El análisis de subsidios a la creación artística y literaria arrojaría algunas conclusiones adicionales respecto a la política, en vista de que las inclinaciones estéticas no son ideológicamente neutras. Más significativa aún podría ser la actitud de los gobiernos frente a los grupos indígenas, que ocupan el lugar central en la mala conciencia de los mexicanos, por-

que encarnan la marginación y evocan el dilema entre homogeneidad o diversidad cultural. A su vez, el respaldo a la educación superior y a la investigación científica tal vez pudiera revelar preferencias cambiantes de los gobiernos por áreas particulares del saber, en función de necesidades de algún proyecto económico al que estarían aparejadas creencias ideológicas. En este campo se observan, además, fluctuaciones en el vínculo entre el Estado y las comunidades de estudiantes e investigadores, por tradición contestatarias ruidosas del orden establecido. Finalmente, el interés por la política exterior reside en que ésta fue el último reducto de supuestas nostalgias revolucionarias del sistema político, lo que dio lugar a interesantes conflictos entre secretarías, aparte de que las “alianzas internacionales” en materia cultural de gobiernos sucesivos (a menudo sólo implícitas, no siempre reales) han proclamado afinidades y compromisos ideológicos, pero sus logros escuálidos son un recordatorio del verdadero peso del país en el ámbito mundial, a la larga insuficiente para insistir en la afirmación de una identidad singular, contrapuesta a la del pudiente vecino del norte.

Si la curiosidad por los temas anteriores se disipa al descubrir limitaciones de la acción gubernamental, quedaría en pie el mejor de los indicadores, es decir las políticas para la educación primaria, cuyos programas son instrumento privilegiado para diseminar normas y valores que el Estado desea repro-

ducir entre las generaciones jóvenes.⁶ El contenido de los libros de texto gratuitos, en particular, es el resumen perfecto de la ideología oficial con los matices que le imprimieron los dos presidentes más proclives a pregonar el cambio, haya sido esto profundo o no en intención y efectos. El catecismo cívico de los manuales refleja, en particular, las contradicciones de un reformismo parcial, mucho más dispuesto a transformar la política económica y la política exterior que a modificar las relaciones entre clases sociales o aquellos mecanismos de control político interno que no sucumbieron sino a fines del siglo XX (sin perjuicio de que su fantasma siga perturbando la política en el futuro próximo), quizá más por el anhelo de un presidente de pasar a la historia como padre de la democracia que por efecto de presiones sociales incapaces de articularse genuinamente por el conducto institucional de un partido de oposición. Por eso merecen interés las dos grandes reformas de los libros de texto “únicos” y gratuitos, en 1974 y 1992, detonadoras de dos encarnizados debates que ayudan a evaluar mutaciones en las alianzas del Estado con grupos opositores, así como a detectar innovaciones o permanencia de las estrategias de aquél para negociar con éstos, según el postulado de que cada refor-

⁶ Véase la encuesta sobre actitudes políticas entre los escolares mexicanos que llevó a cabo a principios de los años setenta Rafael Segovia, *La politización del niño mexicano*, México, El Colegio de México, 1975.

ma educativa condensó la convicción personal de los presidentes respectivos y puso a prueba el poder del sistema político en conjunto. Pero antes de entrar en materia, se impone un repaso histórico.

EL ESTADO REVOLUCIONARIO, CONSTRUCTOR Y EDUCADOR

Gracias a que en 1929 se formó el partido de gobierno, cuyo primer nombre fue el de Partido Nacional Revolucionario, magistral creación de Plutarco Elías Calles para poner fin a las sangrientas pugnas entre caudillos y asegurar la institucionalización de la política, fue posible a partir de los años treinta que en el México surgido de la Revolución el Estado asumiera la empresa de construcción nacional, en la que tendría prioridad estimular un sentimiento nacionalista con las connotaciones que le imprimiera el Estado mismo, a manera de esculpir un país al que rigieran normas nuevas para sanar sus desgarramientos; más allá de posturas ideológicas, sería difícil negar la idoneidad de esa tarea en un territorio aquejado de carencias centenarias, a las que se añadían padecimientos por la destrucción que provocó la fase más violenta de la lucha revolucionaria. El nacionalismo iba a cultivarse con la difusión de conocimientos básicos del patrimonio común y una interpretación del pasado compartido que pudiera encender consenso, sobre la

base del cual se buscarían objetivos comunes para erradicar los antagonismos devastadores de otros tiempos. No era simple la misión, porque tenía un adversario en la indigencia del pueblo, sometido a sistemas de dominación política y social que, por siglos, lo desmovilizaron hasta el punto de infundirle una pasividad tan arraigada que parecía inmanente. Otro factor adverso era la coerción del exterior, en particular la de Estados Unidos, que durante la Revolución tuvo presencia militar en México e intervino para alterar el curso de la pugna entre facciones. Ni qué decir de la influencia cultural de este vecino peligroso para nuestro país recién nacido del levantamiento armado, llamada a crecer en el siglo XX —sobre todo en la segunda mitad, cuando aquella nación se consagró como superpotencia luego de triunfar en la Segunda Guerra Mundial— hasta convertirse en obstáculo para los empeños nacionalistas de los gobiernos innovadores de México.

Al igual que otras revoluciones, la mexicana se propuso entonces, cuando pasó de su etapa de lucha a la de consolidación institucional, el objetivo de dar forma al alma colectiva que todavía no cuajaba (y exhibía las lesiones que le infligió la experiencia de opresión), para modelar así un nuevo tipo de hombre en armonía con los impulsos transformadores del Estado constructor, afán que en los años treinta no era, por cierto, una singularidad mexicana. El ideal tal vez pecara de ambicioso, mas no parecía imposible

conseguirlo cuando cristalizó con el esfuerzo de figuras tan carismáticas como José Vasconcelos, secretario de Instrucción Pública de Álvaro Obregón,⁷ quien reforzó el mito del mestizaje como fundamento de la mexicanidad —crisol de una raza nueva en la que se fundían todas las razas— y distribuyó las obras clásicas universales en ediciones baratas. La esperanza iluminó la época de movilización social intensiva bajo la dirección del Estado, con su apogeo en el gobierno de Lázaro Cárdenas, creador por igual de organizaciones obreras y empresariales en su papel de artífice de un país que empezaba a soñar con la industrialización. Se había apagado ya la guerra cristera, cuyo legado fue un acuerdo informal pero inequívoco para que la Iglesia católica aceptara reglas de convivencia con el sistema político, en el entendido de que el Estado sería laico. Esto quitó un freno a la labor educativa pública, que se consolidó en 1960 con la edición de los primeros libros de texto gratui-

⁷ Aquél no fue, ciertamente, un objetivo preliminar que se hubiera definido de antemano con precisión, pero sí declararon adoptarlo gobiernos surgidos de la lucha armada, en parte para justificar la Revolución *a posteriori*. Fue precisamente Vasconcelos quien plasmó la idea con tonos tan seductores que la hicieron creíble, confirieron legitimidad al Estado y encauzaron su labor educativa durante las etapas de más genuino impulso innovador. Esta idealización de la realidad, legado de una época de esperanza, contrasta vivamente con la pobreza material y moral en el México de nuestros días.

tos y obligatorios. Seguiría latente, sin embargo, una rivalidad entre el Estado y la Iglesia, porque el impulso formativo que tuvo el primero a lo largo de varios decenios entraba en conflicto inevitable con una añeja vocación de la segunda por una labor análoga. En otras palabras, era ineludible la tensión entre dos agentes que competían por forjar la conciencia nacional, y el conflicto saldría a flote a medida que se erosionara la preponderancia del sistema político.

UN BALANCE DE LA ETAPA ANTERIOR A 1970

¿Pero cuáles eran los logros del Estado a finales de los años sesenta en materia cultural, definida con amplitud? Cabe proponer que eran escasos, comparados con el fervor para establecer, tiempo atrás, los objetivos iniciales. Sería injusto negar avances indiscutibles, porque sin duda hubo en México un renacimiento cultural que coincidió con las primeras fases de la institucionalización post-revolucionaria. Entre los signos evidentes de ese auge, que contribuyó a cuajar una sensibilidad mexicana característica, destaca la consolidación de una escuela de pintura tan llamativa dentro y fuera del país que se volvió atributo de su personalidad: el muralismo, epítome de un arte popular accesible a las masas, en cadencia con el realismo socialista, pero renuente a sacrificar por eso una fantasía poética encarnizadamente localista. El

amparo del Estado fue vital, sin discusión, para que los muros de los edificios públicos se tapizaran de monumentos pictóricos que siguen siendo un orgullo nacional, y poco importa que Diego Rivera cultivara también la pinfura de caballete, que según las malas lenguas cobraba en dólares a las nuevas élites sociales capaces de costearla.⁸

Es menos obvio el respaldo a otra manifestación del repunte cultural en el México “nuevo”: la literatura nacida de la Revolución, a la que pertenecen novelas de autores tan afamados como Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. Los premios del Estado —muy postergados en ciertos casos— para algunos de estos escritores seguramente no fueron tan espléndidos a mediados del siglo XX como las becas oficiales en el último cuarto, y queda abierto el debate respecto a si en ambas épocas sirvieron mejor que los simples homenajes gubernamentales (u otros reconocimientos más simbólicos que tangibles) para estimular la creación literaria; probablemente la mayoría de nuestros literatos sean golosos de los galardones que en cualquier ocasión les ofrezcan las autoridades para condecorar su talento vivo o extinto. En todo caso, las secuelas del estallido revolucionario alimentaron una corriente literaria que por su origen, temas y sensibi-

⁸ Valga añadir que Rivera pintó murales también en Estados Unidos, por encargos públicos y privados. En una ocasión, cuando menos, los patrocinadores se sintieron defraudados y cubrieron una de sus obras en la que se exaltaba el marxismo.

lidad entró a veces en consonancia con el ideario político y social de la clase gobernante (no desprovisto de auténtica generosidad en sus mejores versiones), pero en otros momentos, acaso los de máxima lucidez, adoptó la postura crítica que cabe esperar de la mejor literatura, naturalmente contrapuesta a las ficciones calculadas del discurso político.

Un tercer ejemplo digno de mención es la cinematografía que mostró al mundo los paisajes de México según los novedosos cánones de una estética singular, cuya magia (que cautivó de nuevo a los espectadores locales y foráneos) explica por qué un personaje de moralidad controvertible como Emilio "El Indio" Fernández volvió de su exilio para hacer en México películas sobre la Revolución en las que, frente a la cámara de Gabriel Figueroa, María Félix se puso la máscara de mujer dura que no querría quitarse nunca más. A fines de los años sesenta se notaba muy decaído este género de cine basado en la receta campirano-revolucionaria, cuyo atractivo fue desvaneciéndose a medida que proseguía el desarrollo económico y la población emigraba del campo a las ciudades, si bien las mejores películas de la "época de oro" se mantendrían como eternas favoritas, y actualmente las transmite la televisión. Pero al igual que en los dos casos previos, o quizá en mayor grado, es difícil determinar hasta qué punto los logros del cine "revolucionario" emanaron directamente de políticas del Estado o fueron producto de inspiraciones indivi-

duales en un clima de efervescencia. Si los dineros públicos no fueron decisivos para alentar la producción de las obras aludidas, que al fin y al cabo era un negocio en sí mismo, en todo caso hubo coincidencia, más frecuente que en el gremio anterior, de algunos cineastas con el imaginario de la Revolución y los mitos que engendró, desbordantes de una ambigüedad condensada en el paradójico nombre —el tercero y definitivo— del partido en el poder, “revolucionario” e “institucional” (PRI), como si no hubiera contradicción entre los dos impulsos; y en vista de que otros directores idealizaron en sus películas la vida rural y la charrería con instintivo rechazo a la exposición de problemas sociales, fue doble el motivo para que cintas obstinadamente reaccionarias (a veces por debajo de su apariencia) alternasen con las que presentaban epopeyas de la lucha por la justicia (no menos idealizadas, aunque de otro signo ideológico). Caso aparte es el de Luis Buñuel, quien debido a la Guerra Civil española llegó a México, donde asimiló sensibilidades locales a su inmensa creatividad para filmar algunas de las obras supremas de la cinematografía universal, resultado tan feliz como inusitado de la política de asilo cardenista que, entre otros fines indirectos, llenó lagunas de nuestro ámbito cultural con talentos formados en España bajo la influencia de otros países europeos.

Parecerá arbitrario mencionar apenas que en el segundo tercio del siglo XX se afianzó también en

México una escuela nacional de compositores, cuya producción fue de una calidad altísima que ha librado la prueba del tiempo, pero es un hecho que a pesar de sus méritos intrínsecos las partituras de Carlos Chávez o Silvestre Revueltas rara vez han sido productos de consumo general; a sabiendas de que el efecto de la buena música sobre el pueblo siempre sería débil, las burocracias prestaron oídos sordos a la penuria material de más de un artista distinguido.

Lo realmente extraño es que la radio, por su naturaleza destinada a la diseminación masiva de sonidos e ideas, rara vez haya ocupado sitio de honor en el arsenal de las políticas culturales. No faltó ocasión para utilizarla con fines de propaganda (durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo), y en el segundo tercio del siglo XX las autoridades patrocinaron decorosos programas educativos, ya fuese para instruir a los campesinos sobre cómo elevar la producción de sus tierras o para ofrecer consejos de salud e higiene. Sin embargo, en comparación con lo que habría podido ser, se antoja limitado el uso que dio a este medio el Estado mexicano, por tradición generoso para otorgarlo en concesión a empresarios que en los años sesenta lo utilizaban ya, antes que nada, para divulgar canciones de belleza discutible, pero populares entre las masas y redituables para los fabricantes de discos; no se perfilaba aún el éxito que iban a tener los programas de comentaristas políticos, especie que no habría podido evolucionar

frente a la censura mal disimulada del autoritarismo priista en su apogeo.

Por efecto, presuntamente, de una resignación comparable, los gobiernos se abstuvieron de explotar las posibilidades aún mayores de la televisión, que desde sus inicios y a lo largo de los años sesenta fue coto de la beneficiaria de la concesión: una empresa destinada a convertirse en monopolio, que en todo ese lapso —y apenas fluctuaría la situación posteriormente— entendió su faena como la de una industria privada que para ser lucrativa debía dar prioridad al esparcimiento sobre la difusión de la cultura. El empuje de Televisión, después Televisa, creció hasta el punto de alarmar al Estado, que haría el experimento de contrarrestarlo en los años setenta, luego descubriría las virtudes de la connivencia con quienes se ostentaron como posibles rivales de la autoridad pública en la operación de moldear las conciencias, si bien es dudoso que entre las élites políticas y económicas alguna vez existieran diferencias insuperables respecto a los objetivos últimos de socializar a las masas.

En cuanto a las labores educativas que sí eran responsabilidad inmediata del Estado, el balance no se antojaba positivo cuando Echeverría llegó a la presidencia. No obstante algunas etapas de admirables estímulos a la educación básica, por ejemplo, los que le brindó el presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) en probable homenaje a Vasconcelos, el país

tenía un promedio de menos de tres años de instrucción elemental. Esta carencia era análoga a las del terreno económico, porque el “milagro” mexicano basado en la substitución de importaciones, que a mediados de los años sesenta daba ya señales de fatiga visibles para los especialistas, sentó las bases de una primera etapa de industrialización acelerada, pero ni siquiera las tasas de crecimiento de 6% anual lograron satisfacer las necesidades primarias de una población que aumentaba en forma explosiva. Y es que la estrategia de desarrollo volvió a concentrar marcadamente la riqueza con la intención verosímil de propiciar inversiones productivas, sin que por esto surgiera una clase empresarial dinámica, como las que en otras latitudes aseguraron la consolidación de un capitalismo bastante robusto para responder a exigencias de la sociedad entera.⁹

⁹ Sin duda es controvertible la propuesta de que el dinamismo de los empresarios explica el éxito del capitalismo en los países desarrollados, manifiesto en una elevación general de las condiciones de vida, pero no deja de ser llamativo el fracaso, en México, de las mismas estrategias públicas que en Europa y Estados Unidos dieron buenos resultados (el proteccionismo en su momento, seguido de una etapa de apertura y auge del comercio exterior), lo cual lleva a pensar que una causa primaria del persistente subdesarrollo mexicano podría radicar en mentalidades peculiares de las clases ricas locales —materia de investigación para sociólogos y antropólogos— que las desalientan para responder a políticas del gobierno tal como lo prevé la teoría económica basada en la experiencia de naciones prósperas. Pero, aunque

En vista de que el subdesarrollo económico va de la mano con el educativo, se entiende el paralelismo entre la ineptitud para rescatar a la población mexicana de sus condiciones materiales precarias y el fracaso de la iniciativa cultural para forjar un hombre nuevo, impregnado de los valores revolucionarios, tal como lo imaginaron las autoridades públicas en su periodo de mayor ímpetu creativo. Al cabo de más de treinta años de institucionalidad revolucionaria, ni las deficiencias de conocimiento formal ni las conductas del pueblo indicaban éxito en la confección de ciudadanos. A falta de estudios propios sobre el temperamento nacional, valga citar la investigación comparativa de Gabriel Almond y Sidney Verba sobre cultura política,¹⁰ que a principios de los años sesenta dibujó a los mexicanos como una población desconfiada, localista, poco devota del orden legal, nada solidaria y menos participativa, es decir incompatible con el ideal democrático tal como se entiende en la tradición anglosajona. Ningún indicio sugiere que esto hubiera cambiado hacia 1970.

fuera cierto lo anterior, no eximiría al Estado de su responsabilidad básica de redistribuir la riqueza mediante la política fiscal y la de gasto público.

¹⁰ Gabriel A. Almond & Sidney Verba, *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, New Jersey, Princeton University Press, 1963. La secuela de este libro al día es Gabriel A. Almond & Sidney Verba, *The Civic Culture Revisited*, Boston, Little, Brown and Company, 1980.

Por lo que hace a la educación superior, resalta el prestigio que consiguió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en los años cincuenta y sesenta, inalcanzable si no hubiera recibido el apoyo financiero del Estado. No igualó esa fama —si bien formó un ejército de ingenieros que desempeñaron funciones vitales para la política y la economía— el Instituto Politécnico Nacional, tal vez porque sus carreras más cortas atraían a estudiantes relativamente pobres, comparados con los que aspiraban al prestigio social superior de la formación en la UNAM. Es por ende paradójico —más aún en contraste con la aptitud conservadora de la Universidad Nacional en sus orígenes— que en el ambiente universitario se gestara malestar por el autoritarismo del sistema político, que culminó en las protestas de 1968, decisivas para el curso que tomaría la relación entre la clase política y las comunidades universitarias. En otro sentido es natural que jóvenes algo cultos resintieran en mayor grado el carácter poco democrático de la vida política, que no podía enmascararse ni siquiera con la relativa prosperidad económica, mal distribuida desde entonces, pero eso iba a empeorar en los años ochenta.

A la luz de los antecedentes presentados analizaré las políticas culturales —o sus remedos— en los sexenios de Luis Echeverría (1970-1976), José López Portillo (1976-1982), Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)

y Ernesto Zedillo (1994-2000). Bajo el manto de un sistema abrumadoramente presidencialista, cada uno tuvo una manera peculiar de concebirlas y suficiente autoridad personal para imprimirles el sello inconfundible de su retórica, pero todos tendieron a suplirlas con paliativos, porque otro rasgo compartido es que probablemente no hayan dado a esas políticas la prioridad que merecían: cuando no faltaron recursos materiales (por ejemplo, durante la bonanza petrolera, breve interludio en la crisis económica que estalló en 1976 y no se ha erradicado), los gobiernos no supieron cómo utilizarlos por carecer de un proyecto cultural digno de ese nombre.

La enorme disparidad entre la supuesta profesión nacionalista de los cinco presidentes (que la invistieron de connotaciones muy variadas, incluso antitéticas al sentido habitual del patriotismo, sin atreverse nunca a renegar de ella) y su modesta labor, en el terreno donde por excelencia se cultiva el sentido de nacionalidad, es un misterio que empieza a disiparse solamente a condición de apreciar —quizá por inferencia— el sortilegio de los esfuerzos rutinarios en la educación básica, continuos aunque jamás a la altura de las necesidades, que fueron el “instrumento compensatorio” para subsanar la pobreza de las políticas culturales, cuando las hubo en grado detectable.

ECHEVERRÍA Y EL NACIONALISMO
TERCERMUNDISTA

Es un lugar común, entre quienes juzgan a Echeverría con benevolencia, caracterizarlo como el último presidente que intenta revivir la identificación del sistema político mexicano con los ideales de la Revolución, o al menos con su caricatura. En un momento en que coincide el agotamiento de la substitución de importaciones con un clima de malestar político, producto de la represión en Tlatelolco que hizo daño irreparable a la imagen del Estado, las respuestas de Echeverría son una prédica igualitaria que se regodea en el contacto con las masas, la campaña de reconquista dirigida a las comunidades universitaria e intelectual para cooptarlas en la mejor tradición priista, algún afán de cambio económico según lineamientos imprecisos que provoca traumas irreversibles en el alma delicada del sector privado, y el impulso de innovar la política exterior con presuntas banderas tercermundistas que resumen desafíos a Estados Unidos, más aparentes que reales, pero suficientes para irritar a la potencia y provocar reacciones de grupos de presión, no así del gobierno yanqui, porque la contigüidad geográfica y el peso no deleznable de la inversión estadounidense en México hacían improbable una reacción oficial punitiva y en la práctica la impidieron.

Con base en el deseo manifiesto de retornar a las fuentes legitimadoras de la Revolución, el gobierno

también revitaliza el indigenismo, que fue estandar- te de esa lucha en las etapas radicales, antes de que tomara su sitio la idea conciliadora del mestizaje como fundamento de la nacionalidad mexicana. Aquella ideología recuperada, que confiere al mandato de Echeverría sus colores folklóricos distintivos, dicta que en las recepciones se vista de oaxaqueña o china poblana su difusora más visible, la primera dama, quien adopta el adecuado sobrenombre de “la compañera María Ester”, cuyo ejemplo siguen las adula- doras de la corte y algunas de las más aguerridas esposas de secretarios de Estado. Otra muestra de indigenismo es la decisión de convidar mole poblano —platillo con antecedentes previos a la conquista, no diluidos en la receta consagrada de monjas en la muy católica Nueva España— a la reina Isabel II de Inglaterra durante su visita a Los Pinos. Estas actitu- des se mencionan por el propósito simbólico al que respondían, pero es preciso destacar que la exalta- ción de las raíces prehispánicas de México —útil para montar al gobierno sobre la causa de los más des- favorecidos, en su mayoría morenos— no renegaba de la tesis de la fusión racial como base de nuestra sociedad, ni mucho menos abogaba por reconocer a los indígenas una identidad singular ni derechos par- ticulares. Se presenció, más bien, el resurgir de una tendencia histórica de las élites nacionales a identifi- carse con una visión idealizada del mundo anterior a la conquista, equiparado a las otras grandes culturas

antiguas,¹¹ sin que eso implicara afinidades reales ni solidaridad eficaz con los indios vivos, quizá vistos con desprecio inconfesable por la degradación que les han impuesto sus paupérrimas condiciones de vida.

Si existió populismo en esos años, entendido como impulso de dispensar a la población recompensas materiales superiores a las posibilidades objetivas de la economía, su huella más reconocible habrían sido las monumentales sesiones de trabajo,¹² muy típicas de la primera mitad del sexenio, en las que Echeverría escuchaba quejas interminables de las multitudes congregadas, a las que respondía con peroratas no menos extensas y un reparto fastuoso de dulces augurios, para cumplir con su ofrecimiento de “restablecer el diálogo”¹³ y fincar su gobierno en un diag-

¹¹ Véanse Samuel L. Baily (ed.), *Nationalism in Latin America*, New York, Knopf, 1971, y David A. Brading, *op. cit.*, pp. 42-55; este último destaca las obras de Francisco Clavijero, quien propuso analogías entre el pasado prehispánico de México y la antigüedad europea, en virtud de las cuales equiparó a los aztecas a los nobles romanos y la religión de aquéllos al paganismo anterior al cristianismo.

¹² Enrique Galván Ochoa, *El estilo de Echeverría*, México, Costa-Amic, 1975, pp. 85-95.

¹³ La promesa de Echeverría de un “diálogo con la nación” se cumplió mediante la institucionalización de las consultas con organizaciones sindicales y empresariales selectas. Véase Daniel Cosío Villegas, *El estilo personal de gobernar*, México, Mortiz, 1974, pp. 63-68.

nóstico meticuloso de los problemas urgentes. Pero las copiosas ofertas de ayuda a los marginados con las que solían concluir los rituales no se cumplían indiscriminadamente. Lejos de eso, las erogaciones del presupuesto, abundantes por la facilidad con que aumentó la deuda externa y se imprimieron billetes para compensar la miseria de la recaudación fiscal, fueron harto selectivas y premiaron a los grupos mejor articulados, capaces de vociferar sus demandas y comprometer la estabilidad política que deseaba el mandatario. Éstos no eran, obviamente, los más pobres, aunque sí los más politizados.

Por eso repunta, por ejemplo, el presupuesto de la UNAM, a pesar del recibimiento poco amable del que es objeto Echeverría cuando la visita, y hay presión gubernamental, o en todo caso anuencia del poder público a las intenciones de rectores y otros funcionarios preocupados por sus propias carreras políticas, para facilitar el acceso a la educación superior a un mayor número de estudiantes en nombre del igualitarismo. Esto origina un deterioro gradual pero incontenible en el nivel de la enseñanza que imparte la máxima escuela superior del país, en vista de la contradicción natural e insalvable entre los imperativos de calidad y cantidad. Por otra parte, al aumentar la población universitaria y la matrícula de preparatorias que se hacen depender directamente de la UNAM con el argumento de elevar su calidad, pretexto que disfraza el objetivo político de apaciguar a jóvenes

de clase media ansiosos de ascender gracias a un título universitario, se consolida la masa estudiantil como tenaz grupo de presión en territorio propio, dado que la interpretación muy amplia del principio de autonomía universitaria convierte el campus en una especie de microcosmos de la política mexicana; donde hay laxitud inusitada que sirve para “compensar” a sus felices moradores por la exigua democracia en las demás esferas de la vida nacional. Una meta más de este acuerdo, muy parecido a otros en México, mediante los cuales el Estado anima gremios y les otorga beneficios con miras a controlarlos o encauzar su disidencia, es la de poner a prueba, en el laboratorio social de las aulas, la fuerza de los grupos de presión “universitarios” (no siempre dignos de ese nombre) que muy a menudo se transforman de opositores leales en disidentes agresivos, más aún porque el activismo estudiantil pronto se convierte en manera aceptable de iniciar una carrera política.

Sin embargo, la estrategia relativa a la educación superior no se limitó a las negociaciones con la UNAM, sino que el régimen también creó la Universidad Metropolitana, a la que dotaría de varios campus en la ciudad de México y su zona de influencia, para contrarrestar la concentración de estudiantes en un solo terreno y disponer de una institución alternativa que fuera pieza de refacción, válvula de escape o vivero de experimentos pedagógicos; esto se ha conseguido en buena medida, a juzgar por el prestigio de esa uni-

versidad. Por otra parte, fue Echeverría quien obsequió a El Colegio de México su flamante edificio en Camino al Ajusco, lugar que en 1976 era silvestre y silencioso, por ende adecuado a la reflexión profunda.

Este mandatario se recuerda, a la vez, por apuntalar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y encargarlo de conceder una cantidad de becas sin precedente para realizar estudios de postgrado en el extranjero, que fue otro modo de procurar la reconciliación con los universitarios. Una lógica adicional guiaba esa política de becas, la de formar especialistas de quienes se esperaban inmenso genio y patriotismo para salvar la economía en aprietos. Hasta la fecha no es claro el resultado del plan, pero varias señales apuntan al fracaso, ya que muchos de quienes recibieron financiamiento eligieron campos de estudio de poca utilidad para las necesidades mexicanas, al volver aquí se emplearon en cargos donde no aplicaban los conocimientos ganados en el extranjero, o bien optaron (sobre todo quienes estudiaban realmente y llegaron a dominar áreas tan avanzadas que tampoco correspondían a la infraestructura científica de México) por quedarse a vivir en los prósperos países donde cursaron su postgrado, usualmente en el medio académico o en empresas privadas. Ni qué decir de aquellos que se especializaron en duplicar becas y dilapidar dineros públicos —que habrían podido destinarse a objetivos más claramente

prioritarios— para pasar vacaciones de varios años en las más hermosas ciudades europeas.

El fallido proyecto de engendrar una casta de especialistas que contribuyeran al desarrollo autónomo del país para garantizar su independencia —en la práctica algunos de los nuevos científicos sí ascenderían en el sistema político, mas no para preconizar el nacionalismo revolucionario desde sus altos puestos— armonizaba con la decisión de nombrar embajadores a economistas, que encontraron empleo en las embajadas que abrió México al establecer relaciones diplomáticas con numerosos países, principalmente naciones “jóvenes” de África y Asia, en exhibición de solidaridad con los estados indigentes, víctimas del colonialismo y exportadores de materias primas, si bien combativos por el aliento que les infundió la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cuando consiguió aumentar el precio del energético. Identificarse, en principio, con los “pobres” del mundo fue uno de los rasgos de la política exterior de Echeverría. Otro más era el gusto por declaraciones atrevidas, síntoma de una propensión a los escándalos, algunos accidentales o atribuibles a ignorancia (tales como el que resultó de una opinión presidencial gratuita que parecía indicar cambios en la postura mexicana frente a Belice), otros producto de acciones deliberadas para acreditar la imaginaria independencia de México respecto a Estados Unidos. Por su naturaleza llamativa que fascinaba a los perio-

distas, el voto en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se volvió instrumento favorito de Echeverría para disentir del imperialismo yanqui, por ejemplo, cuando secundó una moción que equiparaba el sionismo al racismo, después de lo cual la comunidad judía estadounidense organizó un boicot contra el turismo hacia nuestro país, por cuyos drásticos efectos el canciller mexicano tuvo que viajar de urgencia a Israel para presentar una disculpa.

Debido a la prioridad que mereció en la agenda del gobierno, así como por su “activismo” y su repercusión internacional, por encima de sus logros discutibles que incitaron críticas de los conservadores locales, la política exterior de Echeverría se volvió mecanismo importante para forjar una estampa de nación, dirigida al consumo interno y al internacional, que asentaba sus pretensiones de novedad en renegar de la vieja diplomacia del país, considerablemente más discreta; al propugnar ese objetivo, la política exterior suplió funciones que normalmente habrían tenido que desempeñar las políticas culturales, si hubieran existido más allá de simbolismos y ceremoniales, con un vigor propio que las distinguiera claramente de las estrategias para la educación elemental y superior. En tanto los universitarios fueron objeto de los cortejos descritos, los alumnos de primaria recibieron el regalo de nuevos libros de texto gratuitos, tan merecedores de atención por su contenido (resu-

men de los preceptos y sueños del sexenio) y por las reacciones que produjeron en la opinión pública (barómetro del clima político y de los regateos entre Estado y sociedad), que los examinaré con detalle en otro apartado.

El vacío cultural no fue absoluto ni mucho menos, porque se renovaron apoyos financieros a ciertos grupos de artistas e intelectuales, pero con objetivos primordialmente políticos, ya que este patrocinio se brindaba como manifestación de tolerancia y conciliación, encaminada a propiciar —como en el caso de la UNAM— el amasijo de artistas e intelectuales selectos con el Estado para legitimarlo y recuperar la “normalidad” perdida. El erario subsidió, por ejemplo, lo que a partir de esa época se llamaría “nuevo cine mexicano”, en alusión probable a los primeros desnudos en películas nativas; la expresión sigue empleándose hoy sin que se adviertan innovaciones verdaderas en una cinematografía aferrada a fórmulas melodramáticas de los años cincuenta e incapaz de producir siquiera guiones decorosos. Más digno de interés, por la audacia que implicó y la falta de precedentes, fue que el gobierno comprara el Canal 13 —en su origen la primera estación privada que intentó rivalizar con las ya establecidas— para competir con el gran consorcio de televisión, al que las autoridades acusaban de poner en peligro los valores mexicanos por transmitir demasiadas series de Estados Unidos, que en realidad alternaban con telenovelas y come-

días nacionales de una vulgaridad irremisible. Eso era lo que deseaba ver el espectador ordinario, al que nunca sedujo el Canal 13, cuyos esfuerzos iniciales por ofrecer programas con aspiraciones de alta calidad intelectual y artística ganaron la aprobación de un público culto tan minoritario que pronto se perdió el impulso innovador, y para justificar su existencia la estación no tuvo más remedio que copiar el aborrecido estilo comercial, con lo que perdió su razón de ser y firmó su sentencia de muerte.¹⁴

Si las labores del gobierno en materia cultural dan cosechas magras, ni la diplomacia activa ni los intentos por modificar algunas reglas de la economía —una fallida reforma fiscal, por ejemplo— obtienen resultados favorables. Lejos de eso, el desgaste del modelo económico, sumado a las consecuencias del endeudamiento externo y del financiamiento inflacionario, crea un clima tenso en el que se desata la especulación, se devalúa el peso después de casi veinte años de estabilidad cambiaria, y el régimen de Echeverría termina en caos. El legado de su caleidoscopio de promesas reformistas, sinceras o no, generalmente incumplidas, será el odio confirmado de la derecha mexicana contra cualquier sospecha de izquierdismo en el lenguaje político.

¹⁴ Éste es el análisis de Jorge Alberto Lozoya, “La televisión estatal en México: notas sobre un intento”, *Foro Internacional*, XIV (3), enero-marzo de 1974, pp. 402-420.

LÓPEZ PORTILLO Y SU PAÍS RESPETABLE

A lo largo de la era priista, en México era obligado, como en el teatro griego, que cada gobierno renegara del anterior, al cual debía su existencia, e implantara medidas para distanciarse de él y aseverar un contraste, con el doble objetivo de adquirir la autonomía indispensable para entrar en funciones y aplacar las furias de las masas, porque revitalizar los vestigios de fe en el sistema le confería posibilidades de recuperar eficacia. Rara vez fue más cierto este principio que en el caso de López Portillo, cuyos ánimos de repudiar a su predecesor repercutieron en las políticas culturales o sus fantasmas. Siguió sin haber un proyecto que las hilvanara, pero se desplegaron acciones oficiales destinadas a reinventar el temperamento mexicano según lineamientos corregidos, para proseguir la consolidación de la identidad nacional perfeccionada con el impulso del poder público ilustrado.

En tiempos de Echeverría, su esposa encarnó la exaltación de la cultura popular, por antonomasia indígena. Bajo López Portillo, quien no perdía ocasión de ufanarse de cercanos antepasados españoles, las tareas culturales recayeron de nuevo en las mujeres más próximas al Ejecutivo, como para reiterar —en un país profundamente misógino— que estos quehaceres eran un adorno de la vida patria, prescindibles en sentido estricto, aunque valiosos por motivos sentimentales, de modo que convenía confiarlos a ma-

nos femeninas que hicieran florecer en ellos la ambigüedad de ese doble carácter, frívolo y sensible. Pero en tanto la compañera María Ester alegraba las fiestas con sus colores provincianos, dice la leyenda que la señora Carmen Romano de López Portillo, cuando viajaba con su marido por Europa, llevaba siempre su piano predilecto, que había de caber en los hoteles aun a costa de derribar partes de muros, y llegó a utilizarlo para deleitar con sonatas de Beethoven a funcionarios alemanes en reuniones diplomáticas. El piano, emblema de la prosperidad burguesa desde el siglo XIX, proclamaba la identificación con la cultura occidental y el anhelo de fabricar la imagen de México como país respetable, liberado ya de pobrezas tercermundistas. La esposa de López Portillo desgranó la opulencia en otras formas, por ejemplo, al equipar a la ciudad capital con una orquesta sinfónica digna de su estirpe, mediante un subsidio generoso que pagaba los sueldos de músicos extranjeros competentes para asegurar una calidad excepcional. Si por acaso esta hazaña no hubiera grabado en la memoria popular su defensa de la buena música, la primera dama auspició una puesta en escena de la gastronomía vocal que es *El baile de las ingratas* de Monteverdi¹⁵

¹⁵ *El baile de las ingratas* de Monteverdi, compositor de principios del siglo XVII a quien suele darse el crédito de inventar la ópera (sobrevivieron tres de las que compuso), es una partitura de cuarenta minutos, sección del octavo libro de madrigales, con una trama que le confiere el carácter de pequeña escena ope-

para situar a México a la vanguardia del redescubrimiento de los compositores antiguos, último grito de la musicología alemana y francesa en la segunda mitad de los años setenta.

La otra sacerdotisa de la causa cultural mexicana, preocupada por recobrar la decencia en el sexenio de los nuevos ricos, era Margarita, la hermana del mandatario, a quien se recuerda por dos hechos fundamentales. Uno fue el incendio de la Cineteca Nacional, de la que estaba encargada, en el que se quemaron tesoros irremplazables de la cinematografía mundial; figuradamente, se consumió también la industria fílmica del periodo, por el férreo control de su mentora sobre los fondos oficiales para subsidiar toda propuesta meritoria según su criterio personal, que se distribuyeron de maneras muy cuestionables y produjeron frutos más controvertibles. El otro fenómeno llamativo fue el culto de Sor Juana Inés de la Cruz que instauró doña Margarita, tal vez por identificarse con ella, menos con el propósito de reconocerla como la mente más profunda jamás gestada en

rística, en cuya representación conviene incluir coreografía, porque la danza fue parte del género cantado desde sus comienzos. Narra cómo las almas de mujeres que no correspondieron al amor que les ofrecían salen de los infiernos, por un momento, para advertir a las vivas de no cometer el mismo error. Se recomiendan las grabaciones de William Christie (Harmonia Mundi France, núm. 7901108), Rinaldo Alessandrini (Opus 111, núm. 30-196) y Philip Pickett (L'Oiseau Lyre, núm. 440 637).

el país que para afirmar, de nueva cuenta, la asimilación del México próspero a las corrientes más lúcidas del pensamiento europeo, del que Sor Juana era partícipe y anticipó descubrimientos. Con todo, hubo interés en popularizar más a la precursora del feminismo y a la poetisa de sonetos amorosos que a la filósofa; su efigie pasó a decorar billetes de alta denominación, y poco faltó —en ese homenaje de país necrófilo¹⁶— para que alguien descubriera su esqueleto, así

¹⁶ La caracterización de México como país “necrófilo” y “misógino” (en el párrafo anterior) podría criticarse por estereotipada. Sin embargo, tal vez sea éste un caso en el que los prejuicios corresponden a realidades tan concretas que dispensan al investigador de citar datos empíricos para sustentarlas. La sugencia de necrofilia sería axiomática, en vista de la influencia perdurable de sensibilidades prehispánicas marcadas por un culto de la muerte que prevalece hasta la fecha con transformaciones producto del tiempo y de la síntesis con otros elementos de la cultura nacional. En cuanto a las actitudes misóginas, menos difundidas hoy entre las clases sociales medias y altas, podrían inferirse de la violencia que en los estratos pobres (es decir los más numerosos) siguen sufriendo las mujeres dentro de su familia; es verdad que cada vez son más las que asumen la responsabilidad de educar a sus hijos, porque abundan las madres solteras o abandonadas, pero la discriminación que padecen igualmente en los empleos, a juzgar por sus salarios deprimidos (para no hablar de prácticas humillantes más difíciles de analizar), es en México un problema obviamente más grave que en Estados Unidos y los países europeos, nuestros modelos implícitos. Se podría citar, contra la idea de un México misógino, la aparente devoción de la que son objeto las madres (la Virgen de Guadalupe para empezar), pero ellas son también el objeto del peor insulto nacional, en

como el climá de otro momento exigió que la antropóloga Eulalia Guzmán se pusiera de pie sobre una silla y anunciara solemnemente su hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, cuyo examen científico posterior determinó que eran un combinado de huesos de mujeres, niños y animales. Valga equilibrar los destellos de petulancia criolla de López Portillo con la observación de que en su sexenio comenzaron los trabajos para exponer los remanentes del templo mayor “recién descubiertos” en el zócalo bajo las construcciones visibles: por siglos se supo que ahí estaban, de modo que la valentía de exhibirlos merece elogios en cuanto indica disposición para encarar con cierta madurez los rasgos de la religión prehispánica más contrapuestos a la sensibilidad del catolicismo.

La clave de la aparente ebullición cultural reside en que, gracias a los recursos obtenidos al vender el petróleo “recién descubierto” —tampoco lo era— en nuestro territorio y costas, durante el corto periodo en el que se revaluó el precio de esta materia prima México disfrutó de un repunte económico artificioso que hizo posible lucir su nuevo rostro de nación pujante, colmada de tesoros envidiables y ansiosa por vengar las humillaciones sufridas en el pasado lejano e inmediato, tal como la concibió López Portillo cual reacción contra el folklorismo poco glamoroso de su

testimonio de nuestra gran ambivalencia frente a la condición femenina.

antecesor. Con el inesperado flujo de dinero, aumentó vertiginosamente el gasto público y se registró una tendencia a dilapidarlo en todos los ámbitos que dependían de fondos estatales: correspondería a los gobiernos posteriores el triste papel de pagar la cuenta y efectuar “recortes” del presupuesto. Pero, en el sexenio embriagador, es de justicia señalar que la bonanza pasajera llegó a las universidades y, por breve lapso, elevó los salarios reales hasta niveles nunca vistos y nunca repetidos, si bien es debatible que esto haya mejorado la calidad de la producción académica, pues el dinero es indispensable, aunque no suficiente, para estimular el espíritu crítico. En retrospectiva la prodigalidad oficial resalta más, ya que López Portillo, en contraste con la actitud humilde de Echeverría frente a los gremios pensantes, no solía tener buenas relaciones con los intelectuales por estar convencido de ser él mismo un escritor destacado, cuyas pretensiones literarias afloraban en discursos políticos salpicados de metáforas refinadas, como “el espejo negro de Tezcatlipoca” o “los enanos del tapanco”. La vanidad del mandatario lo alentó a interpelar con desprecio rencoroso a su colega estadounidense, James Carter, durante una visita de Estado, lo que demostró, una vez más, la utilidad de la política exterior para confeccionar el semblante de la nación con eficacia muy por encima de la que deberían tener las políticas culturales, si fuesen permanentes y cumplieran con sus propósitos creativos naturales.

En resumidas cuentas, la tónica del periodo de López Portillo fue de conservadurismo respecto a la cultura en dos sentidos: por el rechazo del presunto radicalismo del sexenio anterior y por la ineptitud para idear medidas fértiles. Más bien, el gobierno encargado de repartir una fortuna que soñó eterna —y en esto lo secundaron por igual las clases medias incultas y los profesores universitarios enamorados de espejismos— prefirió que los desbordantes recursos públicos subsidiaran con derroche una que otra operación cultural espectacular y, sobre todo, que mantuvieran en curso actividades básicas con rutinas bien establecidas, principalmente las labores docentes cotidianas. Tampoco éstas reflejaron, por cierto, la prosperidad fugaz, porque la corrupción se tragó ríos de dinero en vez de permitirles fecundar campos promisorios. Desgraciadamente, la riqueza efímera no avivó la imaginación que construye proyectos durables. Por eso no le quedó siquiera a México el consuelo de haberes espirituales cuando las duras leyes del mercado derribaron los precios del petróleo, así como en el cuento se esfuma la carroza de Cenicienta.

DE LA MADRID Y LA AUSTERIDAD COMO EXPIACIÓN

Herederos de la crisis en que terminó el sexenio de López Portillo, tan grave como la que selló el de Eche-

verría o aun peor, debido al sentimiento de ilusiones traicionadas y oportunidades perdidas, De la Madrid asumió la tarea cada vez más difícil de reconstruir el prestigio del presidente; para llevarla a buen término, profesó una vocación moralizadora. En materia cultural, durante su gobierno empeoró la desolación del paisaje, porque a la escasez de ideas se sumó la de dinero. Por cumplir con las condiciones que le impuso la comunidad internacional cuando intervino, con Estados Unidos a la cabeza, para rescatar a México de su crisis financiera, el apóstol de la rectitud fue el primero en ordenar reducciones presupuestales de una extensión que no se recordaba. Las instituciones educativas y culturales, lejos de estar a salvo, las resintieron más que otras. No era exclusivo de México este mal, pues en el ambiente de conservadurismo que inauguraron los años ochenta se generalizó la inclinación de los gobiernos por decretar austeridad que sacrificaba, antes que otras, las subvenciones a las artes y demás expresiones de creatividad no prioritarias, según la filosofía liberal en boga que dictaba a los estados replegarse y abrir paso a las fuerzas más sabias del mercado.

Para expiar los excesos del régimen previo, predominó en el país un clima de frugalidad y corrección ética, alimentado por la virtud personal de la señora Paloma Cordero de De la Madrid, piadosa desde el nombre, que aspiraba a la más estricta discreción para borrar de la conciencia colectiva las extrava-

gancias de sus dos predecesoras, y aun así ejercía influencia de gran magnitud —en vista de sus repercusiones simbólicas— cuando intentaba, por ejemplo, favorecer reconciliaciones matrimoniales de los secretarios de Estado. Esta primera dama no adoptó más empresa cultural que la defensa de rancios valores, en armonía con las pudorosas políticas de su marido. Con todo, hubo conatos de recuperación económica, útiles para financiar, más allá de la controversia respecto a si el dinero es la única fórmula para explayar el talento, soluciones de emergencia en provecho de grupos sensibles al afecto del poder público, que mucho padecían las frecuentes devaluaciones de la moneda seguidas de inflación. Un ejemplo es el Sistema Nacional de Investigadores, mecanismo de becas ideado para compensar la caída de los salarios en el medio académico, cuya buena intención no evitó que a mediano plazo se pervirtieran sus efectos, porque al amparo de criterios en apariencia objetivos terminó por premiar el volumen de las investigaciones a costa de la calidad, imposible de evaluar entre la masa de expedientes. En cambio, se otorgaron cada vez menos becas para costear estudios de postgrado en el extranjero, y a menudo se suspendieron los pagos de las ya concedidas, con la subsecuente proliferación de jóvenes que cantaban canciones mexicanas en las estaciones del metro de París.

De la Madrid, sembrador de la estrategia económica llamada a florecer en los sexenios posteriores,

fue un gobernante con poco dinero, quien agobiado por la estrechez de recursos no habría pensado en justificar su frialdad ante las políticas culturales, así fueran la mejor vía para reforzar la identidad nacional, que en las circunstancias se veían como lujo impensable, porque estaban insatisfechas necesidades materiales primarias. El signo emblemático del descuido de la cultura tomó forma de regalo navideño, pocos meses después de dos terremotos que devastaron la ciudad de México, cuando en la noche del 24 de diciembre de 1985 un par de inspirados ladrones ingresaron al Museo Nacional de Antropología en Chapultepec y aprovecharon el animado brindis de los policías de guardia para llenar su costal con las cuarenta piezas más valiosas de la herencia prehispánica, gracias a que en el recinto prácticamente no existían sistemas de seguridad. Este episodio traumático reveló la torpeza de los funcionarios para custodiar el patrimonio mexicano, no se diga para multiplicarlo.

Al igual que López Portillo, aunque sin recursos para patrocinar extravagancias esporádicas que encubrieran el déficit de esfuerzos continuos, De la Madrid se conforma con mantener en funcionamiento el aparato de la educación básica y asegurar la estricta subsistencia de la educación superior, donde se acentúa cierta discriminación en pro de las ciencias "duras" a costa de las sociales. Por otra parte, en la UNAM fracasa un plan del rector Jorge Carpizo, entre

1986 y 1987, para reglamentar el “pase automático” que beneficia a los estudiantes de preparatorias afiliadas a la Universidad y es responsable del declive en la calidad de la enseñanza que ésta imparte, porque solapa deficiencias formativas de estudiantes medianos conglomerados en grupos de presión. El episodio afianza una pauta desafortunada: que en las crisis subsecuentes a iniciativas para reformar la vida universitaria el arbitraje del Estado falle contra el rector, quien tampoco recibe el apoyo de sus colegas.¹⁷ Abs-tracción hecha de la posibilidad de que Carpizo diera marcha atrás para proteger su carrera política, la derrota de la campaña saneadora a manos de líderes “estudiantiles” pareció confirmar una carencia de normas en la sociedad mexicana, donde a falta de democracia seguía siendo atávico, a fines de los años ochenta, el ejercicio de presiones para beneficiar a élites —a menudo encubiertas— con privilegios injustos que se defendían en nombre de la justicia.

Como era ya tradicional, en buena medida De la Madrid siguió confiando a la política exterior la proyección de la imagen del país, dibujada con menos nitidez que de costumbre, como si la hubiera contagiado la opacidad del sexenio. El afán moralista del régimen se comunicó, desde luego, a su diplomacia, cuya prioridad era Centroamérica. En sus labores pa-

¹⁷ Jorge Bravo Puga, “El pase automático en la UNAM y la lógica del movimiento estudiantil de 1986-87”, tesis de licenciatura en administración pública, El Colegio de México, 1997.

ra contribuir a la paz en esta zona, misión que además de responder a objetivos éticos obedecía a preocupaciones políticas por aplacar la violencia en la región y evitar migraciones masivas, entre varios peligros, México dejó escuchar ecos de su conocida afición “activista”, pero ya sin desplantes espectaculares. Si la visión del país que transmitía la diplomacia no era tan definida como en otras épocas, pudo deberse a que le faltaba precisión en la mente del Ejecutivo mismo, quien estaba sentando las bases de un cambio radical sin superar del todo inercias ni desprenderse por completo de legados entrañables. Peor aún, la austeridad no bastó para apuntalar una economía basada en frágiles acuerdos entre las autoridades y empresarios que a menudo abandonaban la industria por el comercio o la bolsa de valores. Al no haber una planta productiva sólida, la especulación con la moneda, que se confirmó como método de la minoría próspera para agrandar sus fortunas sin esfuerzo cada fin de sexenio, fue un elemento decisivo para que también el gobierno de De la Madrid terminara en desastre financiero.

SALINAS Y LA TENSIÓN DETRÁS DEL TRIUNFALISMO

La tensión entre el afán innovador y el apego a viejas prácticas es más obvia en el periodo de Salinas de

Gortari,¹⁸ quien al principio de su mandato probablemente haya dudado de cuál era el curso de acción recomendable para superar los problemas nacionales; tanto la inseguridad inicial como la crisis heredada del soberano anterior eran ya costumbres arraigadas. Pero cuando Salinas se decidió, al cabo de no pocas vacilaciones en su retórica, por jugar la carta del acercamiento expreso a Estados Unidos, su gobierno entero se supeditó a ese objetivo, pese a lo cual el discurso político no pudo o no quiso erradicar obstinados remanentes de la vieja ideología oficial.¹⁹ Esa contradicción, que intentó resolverse otorgando connotaciones novedosas a vocablos gastados, delataba la mezcla poco apetecible de reformismo económico y propensión a resguardar el autoritarismo político, que seguía siendo indispensable para imponer nuevas reglas en la economía, cuyo alto costo se transfirió al conjunto de la población empobrecida.

Por ser un régimen monotemático a partir de que emprende su cruzada por la cooperación en el norte de América, el de Salinas sigue relegando las políti-

¹⁸ Véase Lorenzo Meyer, "Las crisis de la élite mexicana y su relación con Estados Unidos. Raíces históricas del TLC", en Gustavo Vega (comp.), *México-Estados Unidos. 1990*, México, El Colegio de México, 1992.

¹⁹ Examino con algún detalle este fenómeno en otro artículo: Bernardo Mabire, "El fantasma de la antigua ideología y su resistencia al cambio de la política exterior en el sexenio de Salinas de Gortari", *Foro Internacional*, XXXIV (4), octubre-diciembre de 1994, pp. 545-571.

cas culturales. Podría parecer infundado este juicio sobre el gobernante que en los primeros días de su gestión, por un decreto presidencial publicado el 7 de diciembre de 1988 en el *Diario Oficial*, creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes —cuyas siglas originales, CNCA, al cabo de diez años se substituyeron por el acrónimo de Conaculta, no para reflejar movimiento, que no lo hubo, sino por comodidad de pronunciación— como “órgano administrativo desconcentrado” de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que ejercería las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes “aun por medios de comunicación audiovisuales”. La estipulación, en el decreto, de que el nuevo organismo contaría “con el presupuesto que se le autorice dentro del de la SEP” contrasta con el perfil monumental de las funciones, que incluirían establecer criterios en la producción de cine, radio y televisión y en la industria editorial; planear, dirigir y coordinar las tareas relativas a las lenguas y culturas indígenas; organizar bibliotecas, museos y exposiciones; y auspiciar intercambios culturales con otros países, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al parecer, el Consejo tomaba el sitio de la Subsecretaría de Cultura de la SEP, que desapareció, pero la duda inmediata se refería a la suerte que iban a correr el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el obvio traslape de funciones. En forma elegantísima, el

CNCA —cuya situación jurídica algo nebulosa se legitimó con el argumento de que legislar detalladamente respecto a su naturaleza y su misión habría menoscabado la flexibilidad deseable en el ámbito cultural— insistió en que no estaba destinado a substituirlos, sino a “coordinar” sus actividades, junto con las de otras instituciones federales ocupadas en fomentar la cultura.

Subsiste la impresión de que Salinas creó un instrumento bajo su control directo para superar las barreras burocráticas y sindicales que se ostentaban en su máximo esplendor dentro del INBA. Esta maniobra, análoga a la que estableció controles directos sobre la política exterior desde la presidencia de la república, acusa el estilo de mando de un hombre orgulloso, interesado en concentrar facultades en sus manos para restituir potencia a la maquinaria presidencial. Correspondería al Ejecutivo designar y destituir con absoluta libertad al titular del Consejo. Víctor Flores Olea fue el primero y ocupó el cargo hasta 1992, cuando a raíz de presiones de un escritor afamado, si ha de creerse una conjetura reiterada, lo substituyó el presidente por Rafael Tovar y de Teresa, quien se mantendría en el puesto más allá del sexenio. Una carta del CNCA recién establecido, con firmas recabadas en los medios pensantes para ofrendar apoyo a Salinas después de que, como afirmación adicional de autoridad, hizo arrestar a Joaquín Hernández Galicia, líder sindical en Petróleos Mexicanos de moralidad

discutible, consolidó la creencia de que el nuevo y majestuoso aparato para velar por la cultura sería un vínculo privilegiado entre la comunidad de artistas e intelectuales y el presidente.

Transcurrida la euforia inicial, se vislumbró que el Consejo no conseguiría grandes innovaciones por carecer de un proyecto visionario, aunque tuviese programas coherentes —no muy distintos de los usuales— que se volvieron blanco de críticas de la izquierda por su elitismo, pues apoyaban gremios escogidos, concentrados en la ciudad de México, cuyas obras no solían estar al alcance del pueblo. Se confirmaba así la personalidad de un ente que nació, como producto de cálculos políticos, para reorganizar la infraestructura que ya existía e imprimirle, a lo sumo, alguna eficiencia. Empero, el Consejo sí dispuso de una burocracia propia, que por instinto aumentó rápidamente. El dato esencial es que el gasto asignado a la cultura siguió equivaliendo a una proporción ínfima del producto interno bruto. Un mal augurio adicional fue que Salinas, con su impulso privatizador, decidiera vender el Canal 13 a hombres de negocios, sus parientes lejanos, a cambio de ofrecer que el 11 y el 22 cumplirían, sin censura, las funciones de la televisión pública moderna. El Canal 13 pasó entonces a manos de empresarios excepcionalmente dinámicos que lo rebautizaron TV Azteca y lo revitalizaron hasta el punto de desafiar la preeminencia de Televi-

sa. Si esto hubiera sido previsión del Estado, habría que felicitarlo por su maquiavelismo.

En las condiciones descritas, no sería descabellado proponer que, a falta de políticas culturales dignas del nombre, el gobierno siguió dando prioridad a la educación básica como instrumento primordial para proveer al país de un sentido de unidad e identidad. Bajo Salinas aumenta la matrícula en las escuelas primarias, y se eleva también la escolaridad promedio. Aun así es discutible una mejoría concomitante en la calidad de la instrucción, entre otras razones porque ya no se reprueba a los alumnos deficientes, y es endémico el “ausentismo” de los maestros.²⁰ El nuevo modelo económico inspira a su autor tanto orgullo que se procede a inmortalizarlo en una nueva versión de libros de texto gratuitos, de los cuales hablaré más adelante. Cabe destacar que desde 1992 el gobierno federal transfiere a los estatales la responsabilidad de los servicios educativos, de acuerdo con un programa de “federalización”, concepto ambiguo que designa dos fines opuestos de un antiguo plan,

²⁰ No conseguí algún estudio serio que precisara con datos la dimensión de este problema, pero creo detectar un consenso —lo mismo en trabajos académicos que en artículos periodísticos y en declaraciones de líderes educativos— respecto a que sí es muy usual que falten a clase los maestros, bajo el amparo de un sindicato poderoso que los justifica con el argumento de que requieren ocupaciones adicionales para resarcirse de los magros salarios recibidos por su labor docente.

con una etapa centralizadora de 1920 a finales de los años setenta (propicia a la unificación de los sindicatos magisteriales), seguida de otra descentralizadora.²¹ En pro de la segunda se levantaron voces desde los años cincuenta, pues la maquinaria burocrática de la SEP, necesaria para centralizar la educación (que fue la primera manera de “federalizarla”), creció desmedidamente y tuvo fricciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sobre todo cuando en los años setenta el gobierno trató de intervenir, para elevar la calidad de la enseñanza, en la formación y el control administrativo de los maestros, dos áreas donde predominaba el sindicato.

Las condiciones para el cambio no maduraron sino en tiempos de Salinas, quien retomó iniciativas de su predecesor, De la Madrid, para descentralizar la educación y la aseguró en mayo de 1992, luego de que la SEP, el SNTE y los gobernadores de los estados firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Éste prescribió delegar la dirección de los establecimientos educativos a los estados, que heredaron la relación jurídica con

²¹ Véase el libro de María del Carmen Pardo (coord.), *Federalización e innovación educativa en México*, México, El Colegio de México, 1999, 560 pp., que contiene las primeras evaluaciones académicas de esa política de Salinas. Los artículos de Alberto Arnaut y Engracia Loyo examinan con detalle la ambigüedad del concepto de “federalización educativa”, cuyo sentido cambia según la época y el contexto en México.

700 000 trabajadores, pero el poder federal se mantuvo a cargo de asegurar el carácter nacional de la instrucción básica y normal. El viraje se consolidó con retoques al artículo 3° de la Constitución y una nueva Ley General de Educación, que confió a la SEP, obligada a conciliar la unidad con la diversidad, la tarea de subsanar deficiencias en los estados menos desarrollados con programas compensatorios que preveían aportarles fondos adicionales.

A reserva de que es muy pronto para evaluar los frutos de esta reforma, se ha hecho notar que no están en sintonía con ella la persistencia de una estructura sindical centralizada ni la tendencia a la diversificación de la enseñanza normal, que debería combatirse fusionando numerosos sistemas de formación de maestros.²² Si bien hay esperanza de que algunos estados superen sus rezagos con el uso apropiado de los recursos concedidos, y parece haber indicios de que va mejorando la enseñanza,²³ persisten graves inconvenientes, entre ellos el de que no siempre correspondan las responsabilidades a los dineros asignados. Tampoco se ha logrado realmente la integración del

²² Véase el análisis de Arnaut en Pardo, *op. cit.*, pp. 79-92.

²³ Pardo, *op. cit.*, pp. 552 y 570, expone que, si bien es prematuro evaluar los resultados de la descentralización, más allá de variaciones marcadas hay indicios de mayor calidad en la instrucción pública, entre otras razones porque la nueva gestión de los servicios educativos ha favorecido "aprendizajes locales" que no habrían ocurrido en otras condiciones.

sistema educativo federal con los estatales, y el designio de que los segundos se plieguen a normas nacionales ofende a los estados con viejas tradiciones normalistas que se consideran superiores a la federal. La descentralización ha coincidido con mudanzas de partidos en varias gubernaturas, lo cual no significa que todo gobernador no priista sea competente para implantar la reforma educativa. Los logros en Guanajuato de un gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) contrastan con el fracaso, en Chihuahua, de otro gobierno también panista, menos pragmático y más ideológico.²⁴ Por otra parte, la derrota del PRI no ha sido requisito para renovar las condiciones de la educación, como lo sugiere el panorama de Aguascalientes y Oaxaca.

²⁴ En todo México, la descentralización educativa de Zedillo dejó ambigüedades respecto a los espacios de maniobra de los estados y los de la federación, pero el problema ha sido más grave en Chihuahua, donde esta reforma coincidió con un cambio del partido en el gobierno, toda vez que en 1992 accedió al poder el panista Francisco Barrio Terrazas. Entre 1992 y 1995 fue más virulento el conflicto entre este gobernador y el SNTE, antigua máquina electoral del PRI. Esto minó la capacidad de las autoridades para practicar la supervisión y el control básicos, por cuyo motivo la “eficiencia terminal” en la educación primaria y secundaria cayó más que en cualquier otro lugar, pese a que en ese estado se multiplicaron los recursos financieros destinados a la instrucción pública. Para apreciar el contraste entre Chihuahua y Guanajuato, véanse Armando Loera y Fernando Sandoval, “Chihuahua”, y María Cecilia Fierro y Guillermo Tapia, “Guanajuato”, en Pardo, *op. cit.*, pp. 400-481 y 155-229.

Los ejemplos de “éxito”, si los hubiera realmente, más que ser atribuibles a la descentralización que ordenó Salinas prolongan aciertos anteriores.²⁵ A este respecto, la experiencia acumulada de los sistemas estatales se adivina como el antecedente con más peso para explicar la suerte de las nuevas disposiciones en cada territorio. Por otra parte, aunque el grado de desarrollo económico incida en los niveles educativos, la correlación no es mecánica, a juzgar por la degradación de la enseñanza pública en un estado relativamente próspero como Chihuahua. Los mejores resultados se han visto donde hubo esfuerzos sistemáticos de planeación —para trazar esquemas adecuados a las singularidades locales— combinados con negociación política forjadora de consenso. Debido a que la transformación no se ha llevado hasta sus últimas consecuencias, quizá por efecto de inercias difíciles de vencer, el paisaje en el año 2000 en realidad no se distingue mucho de lo que era hacia 1990. Con algo de cinismo, cabría discurrir que el poder federal decidió la descentralización con la finalidad de aligerar su carga financiera sin renunciar a controles en áreas estratégicas, por ejemplo, la edición de los libros de texto gratuitos; otro objetivo, político más que pedagógico, habría sido el de contener la fuerza del gremio magisterial, que por cierto no ha

²⁵ Pardo, *op. cit.*, hace un resumen de los posibles efectos de la descentralización en el último capítulo de su libro.

obstaculizado la innovación como se temía. Es obvio, sin embargo, el empuje de varios sistemas educativos estatales, síntoma probable de regionalismos y resistencias culturales a la homogeneización que el gobierno central propugnaba hasta hace poco para integrar la nación. Queda en el aire la pregunta de si esta fórmula, a pesar de sus defectos, no habrá sido el mejor mecanismo unificador que haya conocido México.

Otra decisión de Salinas con graves implicaciones para el futuro de las políticas culturales fue la de restablecer relaciones con el Vaticano, al “normalizar” la situación legal de todas las iglesias, iniciativa a primera vista gratuita que podría interpretarse como ofrenda a la derecha católica (pues la que simpatiza con Estados Unidos estaba ya complacida) o como gesto de “modernidad”, pero que sin duda ha propiciado la injerencia en la política del clero ansioso por acrecentar un dominio más que espiritual. Eso augura fricciones en el terreno donde se moldea la identidad mexicana, porque a lo largo de la historia el único rival considerable del Estado ha sido precisamente la Iglesia católica, cuya militancia redoblada se aferra hoy al deseo —así fuera nada más declarativo— de una reforma del artículo 3º que suprima el laicismo obligatorio en la escuela primaria, capricho al que se suma la exigencia de utilizar medios electrónicos para fines “evangelizadores”.

Salvo por estas innovaciones preñadas de riesgos, la impresión de que bajo Salinas el Estado siguió ca-

reciendo de políticas culturales fuertes se verifica en la comparación con Canadá, país que salió del limbo donde lo mantenía nuestra imaginación en cuanto se volvió socio comercial de México mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC), instrumento capital y símbolo de la nueva estrategia económica mexicana, construido por razones prácticas y legales como extensión del acuerdo bilateral previo entre canadienses y estadounidenses. Fue al negociar el TLC cuando México desnudó, en contraste con el mito grandioso de su nacionalismo, la flaqueza de sus políticas respecto a la cultura, porque se puso de manifiesto que no contaba, en esa materia, con un proyecto articulado que defender o conciliar con las disposiciones del futuro tratado. En este punto es notoria la diferencia con Canadá, el cual comparte, igual que México, una extensa frontera con Estados Unidos y lo ha visto, en ciertas etapas de su historia, como amenaza para la consolidación de la cultura nacional todavía frágil; los canadienses sí edificaron, en la segunda mitad del siglo XX, un formidable aparato de leyes e instituciones —cuyo mantenimiento supieron asegurar cuando suscribieron su propio acuerdo de comercio con Estados Unidos— para filtrar las influencias extranjeras (léase estadounidenses) en la prensa y los medios de comunicación.²⁶

²⁶ Al margen de los efectos contrastados de los colonialismos español e inglés, México y Canadá se han refugiado en la idea de una síntesis de legados heterogéneos, para consolidar mi-

En cambio, durante la negociación trilateral los funcionarios mexicanos no exhibieron inquietudes

tos de unidad contra riesgos de ruptura. Pero a diferencia de México, que a lo largo de casi todo el siglo XX entendió la integración cultural como homogeneización, en Canadá, que fue objeto de dos conquistas sucesivas (la de Francia y la de Inglaterra), se da por hecho la pluralidad cultural. Los canadienses de habla francesa son depositarios del nacionalismo contra la dominación inglesa surgido en Quebec, antecedente e inspiración del recelo frente a Estados Unidos que mucho tiempo después invadió a la comunidad angloparlanté, cuando en los años cincuenta se publicó el Informe Massey. Este reporte oficial, que exponía los riesgos de reproducir las conductas estadounidenses, sirvió de base para organizar la radio y la televisión e imponer restricciones a la importación de revistas que incluyeran cierto tipo de publicidad. Con el mismo impulso, en los años setenta se crearon sistemas de financiamiento para apoyar a los editores canadienses frente a sus competidores extranjeros, y se estableció el principio de que en Canadá los textos escolares deberían reflejar la experiencia nacional. Al negociar su acuerdo de comercio con Estados Unidos, los canadienses se reservaron el derecho a mantener tarifas postales diferenciadas para revistas nacionales y extranjeras, las reglas para controlar el contenido de los programas de radio y televisión y favorecer la producción local, así como la prerrogativa de supervisar todas las adquisiciones de empresas en el área de las industrias culturales. Muy pocas concesiones tuvo que hacer Canadá, entre ellas las de comprometerse a eliminar aranceles sobre la importación de instrumentos musicales, discos, *cassettes*, cámaras y cintas para grabación de imagen y sonido; a suprimir la regla según la cual era obligatorio imprimir en Canadá revistas y periódicos para que las empresas anunciadas en sus páginas gozaran de facilidades fiscales; y a garantizar la protección de derechos de autor a los dueños de programas de te-

por la cultura en su país, seguramente porque no había magnos planes en la materia ni legislación que resguardar. Por principio de cuentas, nuestro mercado para productos culturales importados siempre ha sido pequeño, en vista de la bajísima capacidad de compra de la población. En México no era previsible que un tratado de libre comercio aumentara el interés por leer literatura en inglés o francés, ni que alterase el gusto de la sociedad por la música y los programas de televisión estadounidenses, que difundían los medios de comunicación con absoluta libertad. Los tecnócratas en la era de Salinas, poco afectos al viejo discurso oficial que con su fantasía igualitaria volvía más tolerable la desigualdad, tampoco parecían temer, como posibles repercusiones en el plano cultural, que la cooperación institucionalizada con Estados Unidos ahondara en México divisiones entre pobres y ricos, “arcaicos” y “modernos”, sur y norte, nacionalistas y extranjerizantes.

No es que careciera de ventajas el TLC, aprobado en el Congreso de Estados Unidos²⁷ gracias al cabil-

levisión transmitidos por cable, todo esto con reciprocidad. Escribí un artículo sobre este tema: Bernardo Mabire, “Cultura, política y comercio exterior: los casos de México y Canadá”, en Gustavo Vega (ed.), *Liberación económica y libre comercio en América del Norte*, México, El Colegio de México, 1993, pp. 419-444.

²⁷ Todd Eisenstadt, “El auge del cabildeo mexicano en Washington”, en Bernardo Mabire (ed.), *Anuario México-Estados*

deo inmejorable del presidente William Clinton: al cabo de algunos años, además de atraer inversión extranjera hacia México para suplir la nacional, ofreció al comercio exterior del país estímulos enérgicos, aunque insuficientes para sanear una economía incapaz de crecer tanto como la población y sus demandas. El problema es que, en sus albores, el TLC no habría podido enmendar los vicios de la especulación que usurpó el papel de las actividades productivas y contribuyó a otra crisis financiera,²⁸ no a fines del mandato de Salinas sino a comienzos del de Zedillo, pero la opinión pública no vaciló respecto a quién era el villano que la sedujo con ilusiones de las que, gustosa, se hizo cómplice mientras duró el espejismo.

ZEDILLO Y LA DEBACLE DEL ANTIGUO RÉGIMEN

No se remedió la insuficiencia de las políticas culturales en tiempos de Zedillo, quien subió al poder por

Unidos-Canadá. 1997-1998, México, El Colegio de México, 2000, pp. 61-118.

²⁸ En pequeñas reuniones, un alto funcionario de la época ha citado repetidamente (pero siempre con la petición de guardar el secreto) el factor responsable de precipitar la crisis, según él: que no consiguió cita con el nuevo secretario del Tesoro estadounidense para pedirle un préstamo, luego de un bloqueo inesperado de los flujos de capital que mantenían el “dinamismo” económico mexicano.

accidente y sin desearlo después del misterioso asesinato del candidato original del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. El nuevo gobernante, depositario del empeño modernizador de Salinas y heredero también de la crisis acostumbrada, mantuvo como objetivo elemental —porque rara vez lució ideas originales— el de vender al exterior la quimera de un país confiable y comprometido con políticas económicas ortodoxas, pensadas para recapturar flujos de inversión foránea. Debido a la perenne estrechez de recursos y, en mayor grado, a su proclama personal de austeridad, tampoco Zedillo juzgó prioritaria la cultura ni desplegó algún proyecto formal en la materia.

En el sexenio, la única decisión que presagiaba repercusiones importantes —no necesariamente favorables— en el estilo de educar a la población fue la de firmar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, cuya exigencia de derechos especiales para los pueblos indígenas contraviene la doctrina de plena igualdad legal de todos los mexicanos, que por decenios rigió la actuación del sistema priista. El gobierno tal vez haya suscrito el documento con un propósito exclusivamente simbólico, el de indicar una actitud receptiva a las demandas de los sublevados en Chiapas, en el entendido de que los Acuerdos mismos tenían un valor estrictamente alegórico, dada la muy cuestionable representatividad de los comandantes Tacho o Ramona. Las autoridades no han cumplido el pacto hasta hoy, en parte por escasez de recursos que pu-

dieran satisfacer solicitudes extravagantes, tales como realizar “peritajes antropológicos” en todos los juicios contra indígenas y dotar a cada pueblo indio de medios de comunicación propios. Empero, la razón primaria para no aplicar los Acuerdos ha de ser que lesionarían el orden legal vigente.

Si en la práctica se garantizara a las comunidades étnicas el ejercicio real de autonomía, el país se fraccionaría en incontables demarcaciones político-administrativas, donde quedaría encerrada parte de la población en condiciones próximas a las de reservas de nativos, a costa de la plena movilidad que requiere la modernización económica. Por debajo de su bondad aparente para grupos minoritarios, este arreglo conlleva un peligro de perpetuación de diferencias culturales, aunadas a disparidades sociales que se volverían insuperables al solidificarse con la naturaleza racial que se les atribuyera. En los Acuerdos hay en el fondo una tensión insuperable entre dos demandas al Estado, la de respetar la autonomía y los hábitos de los indios, y la de organizarlos y movilizarlos, así como es contradictoria la petición de que la autoridad fortalezca políticas que sean incluyentes pero a la vez prescindan de sus antiguos propósitos de homogeneización y asimilación de las etnias a las corrientes dominantes del mestizaje.²⁹

²⁹ Me burlo de la filosofía de los Acuerdos de San Andrés en un artículo reaccionario: Bernardo Mabire, “La falsa genero-

La falsa generosidad de esa propuesta demagógica no disculpa insuficiencias del gobierno. Continúa el vacío en materia cultural, que sin embargo se ha vuelto “lógico” en los últimos dos sexenios, ya que los fines de modelar una identidad colectiva e imprimir vitalidad en la cultura nacional eran congruentes con la oferta del Estado intervencionista e impulsor del desarrollo económico, descartada en los últimos decenios del siglo XX para dejar libre curso a las fuerzas del mercado, aunque sólo en principio, pues la clase política siguió tomando todas las iniciativas trascendentes para contrarrestar lo endeble de una sociedad todavía mal organizada, donde no existían partidos políticos firmes ni empresarios dispuestos a construir un sólido aparato productivo.

A manera de paliar la pobreza de las políticas culturales y la discreción de la política exterior, cuya timidez fue mermando la eficacia que tuvo en otra época para dar forma a la imagen del país, en el periodo de Zedillo sobrevivió el artefacto de la educación básica sin más penas ni glorias que las habituales, con avances de la descentralización y un declive probable en la calidad de la enseñanza, oculto tras recatadas estadísticas de mayor escolaridad. En cambio, pareció aumentar el desdén del sistema político

sidad en la defensa de los derechos culturales de los indígenas mexicanos”, en Fernando Serrano Migallón (comp.), *Homenaje a Rafael Segovia*, México, El Colegio de México-FCE-Conacyt, 1998, pp. 55-76.

ante la educación pública superior.³⁰ Animado por la sorprendente facilidad con que pudo “reglamentar” en la UNAM el pase automático, empresa en la que fracasó su antecesor Carpizo, el rector Francisco Barnés quiso ir más lejos y presentó un plan para cobrar cuotas moderadas a quienes desearan pagarlas. Con este pretexto se desencadenaron disgustos reprimidos, que desataron a su vez fuerzas políticas nacionales en el contexto de la competencia por la sucesión presidencial. Durante una huelga injustificable que duró meses, la UNAM sufrió descomunales pérdidas económicas y una incalculable merma adicional en su prestigio. Las autoridades federal y ciudadana se lavaron las manos, y Barnés renunció a su cargo. Podría deberse a la irracional exaltación de la empresa privada el marcado desprecio del gobierno por las universidades públicas, que ha mandado la hipócrita so-

³⁰ El gasto público en educación de México como porcentaje de su producto interno bruto (PIB) aumentó en dos puntos entre 1980 y 1996, al pasar de 3.1 a 5.1, con una recaída en 1990 (3.7) respecto a 1985 (4.2) y un clímax en 1994 (5.2). Este nivel no es el más bajo en América Latina y el Caribe, donde la gama en 1996 iba de 1.6 (Guatemala) a 10 (Cuba, que mantuvo ese porcentaje con admirable constancia a lo largo de la primera mitad del decenio de los noventa), pero no deja de ser llamativo que en ese año México estuviera por debajo de un país tan frágil como Bolivia (5.8) o de uno tan preocupado por la educación como Jamaica (7.5). Porcentajes tomados de varias ediciones de United Nations, *Statistics Yearbook for Latin America and the Caribbean*.

lución compensatoria de multiplicar las becas oficiales para costear estudios superiores en universidades privadas a estudiantes con aptitudes excepcionales.

Cualquier intento por evaluar la suerte de la vida cultural en los años de Zedillo ha de centrarse en el Conaculta, que rindió frutos visibles en ese periodo y a fines de 1998 contaba ya con cerca de 3 700 empleados, un tercio de ellos en la Dirección General de Bibliotecas. Sería injusto subestimar la importancia del organismo que “coordina” el trabajo de prácticamente todas las instituciones federales encargadas de la infraestructura cultural del país (incluidos museos, centros de “educación especial”, medios de comunicación y programas de “apoyo a la creación”), aparte de colaborar con gobiernos de estados y municipios, organizaciones privadas, grupos sociales e individuos destacados. El imperio del Conaculta abarca hoy el Canal 22, Radio Educación, la Cineteca Nacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Dirección General de Culturas Populares, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Festival Internacional Cervantino y mucho más. Esta amplitud corresponde a una gran variedad de faenas, que van desde la edición masiva de libros (con prioridad para títulos destinados a los niños) y las presentaciones de teatro (muchas de ellas también dedicadas al público infantil) hasta la protección y la restauración de sitios arqueológicos (coronada con frecuentes negociaciones ante la Unesco, instrumento cultural de la ONU,

para que los declare patrimonio de la humanidad), pasando por los endémicos homenajes a figuras consagradas de nuestro medio cultural, vivas, muertas y semivivas.

La profusión de tareas, objeto de publicidad intensa para que se noten más, va de la mano con el gusto por cifras espectaculares. Según los informes del Conaculta,³¹ las consultas en todas las bibliotecas públicas de México aumentaron de 77 millones y medio en 1996 a 79 270 000 en 1998, de las cuales 78% corresponden a niños y jóvenes en edad escolar. A lo largo de 1996, prestigiados actores realizaron 500 lecturas en voz alta por plazas y parques de todo el país, y en 1997 ascendieron a 1 932 los espectáculos infantiles que deleitaron a 504 000 niños. La filmación de películas con patrocinio del Instituto Mexicano de Cinematografía pasó de siete en 1996 a 16 en 1998, alguna cinta recibió un premio en el Festival de Amiens, especializado en celebrar el cine marginal, y sobró ánimo para producir 219 anuncios comerciales en los Estudios Churubusco. Por si fuera poco, se logró incorporar al catálogo de bienes patrimoniales 888 inmuebles de valor artístico tan sólo en 1997.

¿Qué motivo habría entonces para renegar del Conaculta? Los críticos persuadidos le reprochan su

³¹ Agradezco mucho a la señora María Cristina García Zepeda, de la Secretaría Técnica del Conaculta, la gentileza de proporcionarme los informes de actividades de 1995 a 1999.

origen mismo y la yuxtaposición a organizaciones previas; es plausible que se dupliquen funciones, y a no dudar persisten rivalidades entre burocracias. Se dice que la nueva maquinaria no ha descentralizado bastante sus servicios, a pesar del auge de las bibliotecas en los municipios, porque varias de sus acciones benefician principalmente a la ciudad de México; es verdad, pero en descargo del Conaculta cabe citar un obstáculo enorme para mejorar la difusión cultural en la provincia: que esta misión es prerrogativa de los gobernadores, a menudo faltos de luces. Un motivo más de agravio, seguramente el peor, porque lo nutre la envidia, ha resultado del Sistema Nacional de Creadores, cuyas generosas becas para poco más de 300 ilustres miembros (la sexta parte "eméritos", es decir vitalicios), otorgadas con base en criterios necesariamente subjetivos (porque juzgar la calidad de un "creador" es por definición controvertible), le han valido acusaciones de "amiguismo" y coopción de intelectuales en las redes del Estado; por respuesta, el Conaculta exhibe 453 libros y 500 exposiciones individuales de los elegidos y aduce que las becas aportan independencia a sus beneficiarios, lejos de someterlos, dado que reconocen su genio sin reparar en atuendos ideológicos. Otro reproche, emparentado con el precedente, es el de sesgos que favorecen, por ejemplo, la pintura abstracta sobre los vestigios de la escuela muralista. Condensa todas las críticas la relativa al elitismo de un órgano que satisface en

alto grado las necesidades de educación y esparcimiento de grupos cultos de suyo en las ciudades más prósperas.

No podría ser distinto, porque se ha vuelto tradición que los medios culturales del Estado mexicano, reacios a competir con las ofertas populares de la televisión, opten por concentrarse en públicos selectos. Así pues, el Conaculta convence a la *prima donna* del mundo de venir a cantar en Bellas Artes, donde un buen boleto cuesta el doble de lo que se pagaría en Nueva York, y edita primorosos libros de cuentos infantiles a precios subsidiados muy accesibles para las clases medias, mas no para las bajas, mayoritarias en el país. Con todo y que 60 000 actividades artísticas y culturales beneficiaron a 36 millones de mexicanos en 1999, éstos son un porcentaje bajo de la población total, opinaría un pesimista; la réplica obligada sostendrá que es preferible cubrir esa fracción de habitantes en lugar de descuidarlos.

Por otra parte, el Conaculta sí muestra esporádicamente la huella de inclinaciones populares que solían ser distintivas del sistema político, por ejemplo, al organizar “talleres de expresión artística” para 6 500 niños con padecimientos crónicos o enfermedades terminales, así como otros “de narración y actividades lúdicas” en los que 300 víctimas del huracán Mitch pudieron “expresar y reelaborar las experiencias vividas”. Además, el programa “Por la calle de la aventura” hace participar en labores artísticas a niños y jó-

venes de la ciudad de México que sobreviven en la vía pública. De nueva cuenta, ¿sería razonable preferir que no existiera un apoyo como éste, mientras haya pobreza?

UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR

La pregunta anterior encauza mi apreciación tentativa de los logros y fracasos, en materia cultural, de cinco gobiernos durante el lapso considerado, de cuyo examen se desprende una paradójica impresión de carencias y éxitos entrelazados. A pesar de que la inconstancia y la mala articulación de las políticas culturales ponen en duda su vida misma, algunos empeños parecen substanciales por momentos, aunque no sea más que en virtud de la escala del país y de su población, o a la luz de comparaciones con otros estados o con el México de tiempos lejanos, pero la magnitud de estos esfuerzos —como el otorgamiento de miles de becas del Conacyt o la distribución de 50 000 paquetes de pinceles en un torneo gigantesco de dibujo infantil— es proporcional a la enormidad de las penurias, porque no se han satisfecho necesidades colosales que proliferan sin cesar, tanto por el crecimiento demográfico cuanto por el de las exigencias. Como el desarrollo de facultades de observación se apoya en una mentalidad crítica que resalta los aspectos negativos de los fenómenos, valga repasar las

limitaciones de la acción cultural del Estado mexicano desde 1970, que parecen confirmadas al hacer un corte analítico no ya por sexenio, sino por actividad.

En pintura y música, nada reciente se compara con la originalidad y abundancia de lo producido en el segundo tercio del siglo XX. No obstante las heroicas iniciativas del Conaculta para desarrollar entre niños y jóvenes un hábito de lectura, se diría que en el periodo examinado la edición de libros y otros materiales impresos no ha recibido en México el impulso necesario, quizá en tácito reconocimiento de que predomina el analfabetismo funcional. Siguió sin explotarse a fondo un medio de comunicación favorito del pueblo, que es la radio: muy pocos escuchan "La hora nacional" cada domingo, unos cuantos más las series educativas con subvención oficial que les instruyen en el uso de anticonceptivos o les explican los derechos de los trabajadores ilegales en Estados Unidos. Radio Educación ha descollado entre la mediocridad por su loable gesta para rescatar al público de las vulgaridades cantadas y habladas con que lo seducen fácilmente las estaciones comerciales. Hubo ímpetus de crear una televisión dirigida a seres pensantes: el fracaso del Canal 13, que nació para combatir el estilo de las difusoras privadas y sucumbió a la tentación de imitarlo, probablemente haya servido de lección a dos herederos, el 11 y el 22, más hábiles en la segunda mitad de los años noventa para equilibrar la divulgación cultural con el esparcimiento, en

beneficio de espectadores todavía minoritarios pero más numerosos —en cifras relativas y absolutas— que los de hace veinte o treinta años.

El cine no ha superado aún su infancia, abstracción hecha de las obras de Buñuel a mediados del siglo pasado. En los últimos cinco sexenios se otorgaron financiamientos esporádicos a cineastas prometedores, cuyo trabajo no podía tener una influencia comparable con la de ciertos programas de la televisión privada. Por más que se hable de un “nuevo cine mexicano” desde hace, justamente, tres decenios, la industria tal vez logre parir una película honrosa cada diez años en promedio. El problema no es de financiamiento, pues hay joyas de la cinematografía mundial que no costaron casi nada, sino de falta de directores extraordinarios, que delata el atraso educativo general, manifiesto también en la ramplonería de los aficionados al cine. En otras palabras, no sería razonable esperar una cinematografía magnífica de un país inculto. Esto trae a colación la pregunta de cuáles son los límites razonables de la participación del Estado, que ciertamente no podría hacerlo todo en el terreno cultural ni en ningún otro. Por lo que hace a los espectáculos artísticos de alta calidad, se disputan su control clanes burocráticos, cuyos conflictos permanentes terminan por restringir lo que se ofrece a espectadores educados pero escasos.

De vuelta a la idea de un círculo vicioso, el principio paradigmático de que el subdesarrollo de Mé-

xico determina el de sus políticas culturales, si bien refleja realidades visibles no debería degenerar en explicaciones tautológicas ni en fatalismos, porque siguen en pie la posibilidad de romper el círculo y la pregunta de cómo. Los últimos treinta años demostraron que la acción del gobierno, con todas sus miserias, es la que más ha hecho por reproducir el conocimiento y estimular sensibilidades compartidas en las que se apoye el sentido de identidad nacional. Esta apreciación no contradice las pobreza ya señaladas. Se les podría añadir la observación de que los máximos triunfos de las ciencias “duras” mexicanas en el último tercio del siglo XX incluyen la crianza de la vaca enana y el descubrimiento de una terapia (contra la enfermedad de Parkinson) que mata a todos los pacientes; las disciplinas sociales a duras penas saldrían mejor libradas de un escrutinio riguroso. Por exiguos que parezcan los avances en el terreno de la educación y la cultura, son mejor que nada y se deben casi todos al apoyo público.

Por otra parte, ni la literatura distinguida, ni los frutos ostentables de la investigación científica, ni las buenas películas, ni los más decorosos programas de radio y televisión, que hay unos cuantos ejemplos de cada variedad en México, son fórmulas realmente idóneas para moldear la conciencia nacional. Las políticas que atañen a la educación básica sí lo son, por su envergadura, y entre nosotros han cumplido sobradamente sus labores naturales (la de socialización

muy por encima de la académica), hasta el grado de suplir la debilidad y la inconstancia de las políticas culturales que normalmente deberían completar la acción de la educativa. En el campo de la instrucción pública, la experiencia de México no es aislada, sino que tiene parecido con varias otras, copiadas todas de la francesa, que fue la primera. Lo singular en nuestro país ha sido un catecismo nacionalista estatal que, por haberse construido con aportaciones de filosofías antitéticas, trascendió la dicotomía entre izquierda y derecha y fue capaz, en sus mejores momentos, de atenuar divisiones dentro de la élite gobernante e inducir consenso en la sociedad respecto a objetivos fundamentales. Ese impulso conciliador sería una de las claves de la estabilidad que algunos gobiernos hicieron compatible con innovaciones en áreas bien circunscritas.

Echeverría y Salinas reformaron, cada uno, el contenido de los libros de texto, lo cual fue, en ambos casos, signo de firmeza del aparato político. Sin embargo, los cambios verídicos en las versiones sucesivas se ciñeron a descripciones de la economía y la política exterior, que fueron precisamente las áreas donde los dos mandatarios aludidos propugnaron mutación. Siempre conservadores, los manuales tendieron a exagerar el alcance de las reformas concretas, es decir las idealizaron, y por ese motivo son testimonio de lo que los presidentes responsables deseaban consolidar en la memoria colectiva.

No conviene sobreestimar la influencia de los libros de texto oficiales como medio de socialización, porque tal vez no sean en realidad tan obligatorios como manda la ley, compiten con rivales temibles (sobre todo la televisión) y su efecto principal depende de la forma en que los utilicen los maestros. Por otra parte, a falta de más elementos explicativos, cabe postular que estos materiales, que dan cuenta de la mayor parte de los setenta centímetros de libros disponibles en el hogar mexicano típico, han contribuido a la quietud de México al comunicarle una esperanza en el nacionalismo que alienta el Estado (aun en la versión de Salinas), cuyo único rival es la oferta semipatriótica³² de inspiración católica. No insinúo que los libros sean plenamente eficaces para tejer acuerdos. Lejos de eso, las versiones renovadas provocaron agrias controversias lo mismo en 1975 que en 1992, pero incluso estos debates habrían sido funcionales como válvula de escape para desahogar tensiones. Además, las tácticas autoritarias que desplegó la oposición en ambos casos tenían una curiosa afinidad con el autoritarismo del gobierno, en lo que

³² Comparto la antigua apreciación de que los miembros de la Iglesia católica no pueden ser plenamente patrióticos en su país respectivo, principalmente porque deben obediencia al Papa, jefe de un Estado extranjero, y en menor grado por efectos de un impulso universalista inherente al catolicismo que puede entrar en conflicto con lógicas nacionales.

reside una prueba de simbiosis entre Estado y sociedad. Por eso las reformas educativas de 1974 y 1992, el contenido de los manuales modificados y los pleitos a los que sirvieron de pretexto, se antojan como radiografía de la política nacional. Antes de examinarlos, conviene un rápido repaso histórico para recalcar la trascendencia del libro de texto gratuito.

BREVE RESEÑA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

La voluntad de valerse de la educación para estimular el patriotismo existió en México desde los albores de la vida independiente, pero a pesar de que todas las facciones abrigaran ese anhelo pronto surgieron entre ellas diferencias irreconciliables.³³ Por eso en el siglo XIX la instrucción básica estuvo a cargo de organismos privados, no todos religiosos, sin que hubiera una política gubernamental. Las constituciones de 1824 y 1857 no dispusieron controles del Estado sobre la enseñanza primaria, debido a la fe irrestricta en la libertad de educación que profesaban los liberales,³⁴ a

³³ El resumen que propongo en este apartado se basa en el estudio de Josefina Zoraida Vázquez, *Nacionalismo y educación en México*, México, El Colegio de México, 1975.

³⁴ Véase un análisis del liberalismo mexicano en el siglo XIX en Charles A. Hale, *The Transformation of Liberalism in*

quienes solamente los estragos de la guerra civil convencieron de promulgar, en 1861, una legislación que contenía un germen de vigilancia estatal de las escuelas privadas. En 1888, otra ley hizo obligatoria la educación para todos los niños de entre seis y doce años y vedó a los ministros religiosos la dirección de aulas. Una ley de 1891 marcó el inicio de la homogeneización de objetivos y métodos pedagógicos, que culminó en el establecimiento, en 1901, del Consejo Superior de Educación Nacional. Lo substituyó cuatro años más tarde una Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes de mayor rango, encomendada a Justo Sierra, el primer filósofo en concebir una versión conciliatoria del pasado de México,³⁵ que caracterizaba a los mexicanos como fruto de “dos pueblos y dos razas” y prescribía una religión de la patria compatible con otras religiones.

El trabajo educativo resintió la fase más violenta de la Revolución, a cuyo término, en el Congreso de 1916 para redactar la nueva Constitución, prevaleció una corriente neoliberal sobre la del liberalismo ortodoxo que no se había desprendido completamente de su apego a la libertad de enseñanza. Por eso la redacción original del artículo 3º estableció que la educa-

Late Nineteenth-Century Mexico, New Jersey, Princeton University Press, 1989.

³⁵ Esta tesis figura en los libros de Sierra destinados a la escuela primaria, *Catecismo de historia patria* y *Elementos de historia patria*.

ción primaria sería laica en las escuelas privadas (sujetas a la supervisión del poder público) al igual que en las oficiales y gratuita en las segundas. Ni Venustiano Carranza ni Obregón aplicaron esa norma al pie de la letra. Más confiado en su habilidad, Calles impuso, en 1926 y 1927, leyes reglamentarias del artículo 3º para aplicarlo con eficacia. Estalló entonces un conflicto entre el gobierno y la Iglesia católica, agravado a raíz de la reforma constitucional de 1934 para asentar que únicamente el Estado impartiría educación, la cual sería “socialista” con el objeto de garantizar que el ideario de la Revolución moldeara en los alumnos —que pertenecían a la patria antes que a su familia— una nueva conciencia nacional. Como nunca se definió el contenido de la “educación socialista”, su nombre quimérico propició demagogia y dio lugar a que la oposición conservadora publicara manuales propios que avivaron antagonismos furiosos.

Las reformas de Cárdenas no contribuyeron a relajar la controversia educativa, pero fue restableciéndose un ambiente de conciliación bajo Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Éste adoptó una ley que reiteraba el espíritu “socialista” de la educación pública, pero hacía hincapié en el bien común, la cohesión social y la solidaridad continental. Tres años más tarde hubo condiciones para reformar el artículo 3º, de lo que resultó una redacción cordial y durable. Contribuyó a eso un acuerdo callado, el de mantener la

prohibición legal de que los religiosos practicaran la docencia, en tanto el Estado toleraba escuelas con programas que incluían la enseñanza de la doctrina católica. Gracias a este arreglo y a que las partes en pugna evitaron criticarse, perduró una atmósfera pacífica durante las presidencias de Miguel Alemán (1946-1952) y Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), quienes prefirieron textos escolares cuya interpretación de la historia nacional destacaba la unidad del pueblo, lejos de incitar a la lucha de clases. Empero, dentro de la élite gobernante misma había tensión entre cardenistas y alemanistas,³⁶ que fue aumentando hasta amenazar la estabilidad del régimen.

Por eso López Mateos decidió explotar la energía unificadora del nacionalismo, entendido como precepto conciliador por su vocación centrista, para restaurar la coherencia del sistema político (al pregonar su ascendiente sobre facciones antagónicas) y, en forma paralela, reafirmar la concordia social. En su discurso de toma de posesión, el presidente pidió a los empresarios apoyo para el esfuerzo educativo; al no haber respuesta, la responsabilidad en la materia siguió recayendo en el Estado. Aumentó el presupuesto para la educación, se construyeron miles de escuelas y, para dar substancia al artículo 3º, el Ejecutivo decidió distribuir por primera vez libros gra-

³⁶ Soledad Loaeza, *Clases medias y política en México*, México, El Colegio de México, 1988, pp. 192-194.

tuitos, únicos y obligatorios. El decreto presidencial del 12 de febrero de 1959 creó la Dirección General de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, encargada de unificar la enseñanza primaria, que publicó guías para orientar a los participantes en un concurso de selección de manuales. Éste fracasó por la baja calidad de los manuscritos sometidos, en razón de lo cual las autoridades encargaron los textos a personas de su confianza. Aunque existiera una poderosa razón económica para distribuir libros gratuitos, ya que por carecer de materiales pedagógicos muchos alumnos pobres abandonaban la escuela, la reforma de López Mateos aspiraba esencialmente al antiguo objetivo de infundir un mismo credo patriótico en todos los escolares mexicanos. Tan importante era este fin que, según las guías, la creación de una identidad nacional debería tener primacía incluso sobre la transmisión de conocimientos estrictamente académicos.³⁷ Se aconsejaba cultivar el sentido de responsabilidad para con la patria, del que habría de derivar respeto por el gobierno, o al menos éste esperaba que así fuera. En consonancia con esos propósitos, el presidente recomendó a su secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, que los manuales exaltaran a los héroes que enumeró Sierra y aludieran al mestizaje como origen de México.

³⁷ *Ibid.*, p. 234.

LOS PRIMEROS LIBROS DE TEXTO PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

La enseñanza de la historia, cuyo examen es el más pertinente para los propósitos de este análisis, se extendería del tercer año al sexto de primaria, en una materia llamada Historia y Civismo. Por ser producto de varios autores los cuatro títulos destinados a otros tantos grados escolares, hubo entre ellos algunas discrepancias ideológicas que brotaron en la crónica de la conquista; en efecto, dos de los libros —el de tercero y, más aún, el de quinto— revelaban dificultades para aceptar que este episodio fuera el origen de la nación, como tendrían que haberlo hecho si se hubieran ceñido en ese punto a las sugerencias de Torres Bodet; la incapacidad para acatarlas demuestra el arraigo popular de sentimientos antiespañoles. Las demás etapas del desarrollo nacional no se prestaban a divergencias marcadas. Lejos de eso, en la reseña de los siglos XIX y XX todos los manuales tendían a disimular los conflictos entre facciones durante las grandes luchas internas, con miras a nutrir la ilusión de una historia dotada de absoluta coherencia por vínculos que ligaban, en continuo, la Guerra de Independencia, la Reforma y la Revolución, hasta desembocar en el triunfo de ideales conciliatorios.

Como si el desarrollo histórico hubiese llegado a su fin y no hicieran falta ya transformaciones, el sesgo conservador teñía la representación de la polí-

tica mexicana, en la que un elogio formal de la democracia y la libertad servía de base para justificar el sistema de gobierno “revolucionario institucional”, caracterizado como nacionalista, constructivo y protector. No se mencionaban siquiera los partidos de oposición —que apenas existían en ese tiempo, es de justicia recordar— ni otras organizaciones que pudieran competir con el orden establecido. Era ambigua la descripción de las fuerzas armadas en el siglo XIX, en tanto la Iglesia católica recibía elogios por su misión alfabetizadora en la colonia y reproches por su papel político en periodos posteriores; a este respecto, el más crítico de los libros era el de cuarto año, que condenaba al clero por su oposición al movimiento independentista, su alianza con la intervención francesa y su colaboración con la dictadura de Porfirio Díaz (IV: 52, 105, 120, 151).³⁸ Nadie tenía majestad, en el escenario político dibujado, más que el Señor Presidente de la República, figura paterna encargada de mantener la paz dentro de México y allende sus fronteras. El cuadro de las relaciones internacionales era, por cierto, muy ambivalente, porque una ape- tencia de universalidad se entrelazaba con miedo al mundo externo, en particular al imperialismo de Estados Unidos (V: 165-176), ejercido mediante el co-

³⁸ El número romano es el del grado escolar al que corresponde el libro citado, los números que siguen son los de las páginas.

mercio internacional (VI: 185-186). Contra ese peligro, se recomendaba una política exterior apegada a los principios de no intervención y respeto por la autodeterminación de los pueblos (V: 202, 209-210; VI: 211-212, 241).

Este esquema político encajaba con la estrategia para el desarrollo que proponían sutilmente los manuales cuando cantaban las virtudes de la economía mixta. Si bien la nación era propietaria original de todo el territorio y sus recursos (VI: 230), la industria privada podía coexistir con las empresas paraestatales en un sistema —que estableció Benito Juárez mismo (IV: 128)— donde el Estado apoyaba al sector privado y a la vez operaba como mediador entre patrones y obreros con el propósito de remediar desequilibrios (IV: 183), además de combatir la fuga de capitales (IV: 191) y redistribuir los recursos en cumplimiento de objetivos históricos de la nación (VI: 224-225, 240).

Para que fuera eso creíble, los primeros libros “únicos” subestimaban los problemas de México y exhortaban a la colaboración entre clases para asegurar el renombre nacional. La sociedad que describían se apoyaba en la idealización de una familia “tradicional” y jerarquizada, cuyos miembros tenían papeles muy diferenciados (la mujer el de ama de casa) (III: 62), y en la propuesta de una escuela no menos rígida (donde el estudiante se limitaba a obedecer a la maestra) (III: 69), en armonía con una concepción

autoritaria del poder político. El rasgo medular del orden descrito era la interdependencia, que volvía compatibles los intereses colectivos con los privados (VI: 209) y establecía una igualdad abstracta entre todos los individuos, supuestamente reforzada con la aplicación uniforme e impersonal de la ley (VI: 238). No se condenaban los privilegios alcanzados por mérito propio ni se ocultaban los antagonismos entre clases, pero se propagaba la noción de que en México los residuos de injusticia se corregirían gradualmente con mecanismos para el ascenso individual. Sin duda había tensión entre dos fines primordiales de los libros, la apología del cambio por medios violentos (en consonancia con la ideología de la Revolución) y la defensa de la tranquilidad social: la contradicción se resolvía a base de exhibir el uso válido de la fuerza como fenómeno del pasado, en tanto se exhortaba a mantener la paz en el presente.

No es de extrañar que los manuales propusieran valores y normas como la gratitud, la cortesía, la moderación, el respeto por las personas mayores y la hospitalidad, enclavados en las civilizaciones prehistóricas pero coincidentes con los de la doctrina católica. En el ámbito de la conducta cívica, las formas de acción política aceptables eran las que no rebasaban los canales institucionales, por ejemplo, las del sindicalismo oficial, que dependía del Estado para sobrevivir. Votar, pagar impuestos, venerar a los héroes, alentar la unidad nacional y respetar al gobierno que

cumplía los dictados de la Revolución (IV: 183; VI: 239-240) y sus leyes siempre justas (III: 111; IV: 105; V: 205) figuraban entre las obligaciones del ciudadano, cuyo acatamiento equivalía al pago de una deuda histórica. En la misma lógica, la subversión era antipatriótica y antinatural. Las amenazas externas, simbolizadas por la Guerra de 1847 y la pérdida subsecuente de territorio en provecho de Estados Unidos (IV: 98), daban una razón más —la fundamental— para defender la unidad de todos los mexicanos.

EL DEBATE “EDUCATIVO” DE 1961

A primera vista parecería ilógico que libros tan conservadores se hayan vuelto blanco de las críticas de la derecha mexicana, pero esto se debió a la circunstancia misma de su publicación, quizá más que al mensaje difundido. Valga citar, para ilustrarlo, que no pocas escuelas privadas repudiaron los manuales por la frugalidad de la edición, con lo cual expresaron resistencia contra la uniformidad social, más que la ideológica. El procedimiento para escribirlos y repartirlos irritó a los líderes de la protesta, quienes la extendieron fácilmente en cuanto apelaron a emociones primarias, fórmula que les ganó la simpatía de estratos bajos receptivos al llamado a restaurar “viejos valores” mexicanos. Aunque no por razones idénti-

cas, también las clases medias recelosas del Estado eran buena clientela que movilizar.

Las protestas más ruidosas se oyeron en las ciudades más desarrolladas: México, Puebla, Guadalajara y, sobre todo, Monterrey. Las encabezaron el PAN, con arcaico interés por la educación; el Movimiento Familiar Cristiano y, en mayor grado, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF),³⁹ en esa época representante informal de la Iglesia católica; el clero mismo, cuyos miembros más ambiciosos libraron en 1961 —por momentos de manera directa— una batalla encarnizada contra el artículo 3º, con algunas incitaciones a la violencia; grupos de empresarios, en

³⁹ La UNPF es una asociación civil —bajo el amparo del artículo 9º de la Constitución— con una larga historia de desafíos a la política educativa del gobierno. Por definición, sus miembros son militantes católicos que toleran mal otras religiones. Se fundó en 1917, para interponer un amparo contra el mandato constitucional que extendía la educación laica a las escuelas privadas, y se desarrolló luego en todo el país gracias a su organización por células en todos los ámbitos territoriales a partir del municipio. La actividad de la UNPF se revitalizó en reacción contra la reforma educativa de Calles en 1926, momento a partir del cual esa organización adoptó por bandera el presunto derecho de los padres a elegir el tipo de educación que más les agrade para sus hijos. Entre febrero de 1959 y enero de 1962, la UNPF pasó de una estrategia legalista a otra de ataques en la prensa y manifestaciones tumultuosas, sobre todo en Monterrey. Véase Robert A. Monson, "Political Stability in Mexico: The Changing Role of Traditional Rightists", *The Journal of Politics*, XXV (3), August 1973, pp. 602-603.

especial los de Monterrey, a los que se sumaron otros gremios; la Unión Nacional Sinarquista, remanente probable de la guerra cristera y caricatura local de organización fascista; y editores privados mexicanos de libros escolares que perseguían objetivos comerciales e ideológicos.

La participación directa de la Iglesia fue con pronunciamientos formales, cuyo efecto se amplificó por una incomparable capacidad de convocatoria. Conscientes de su fuerza, los obispos lanzaron una ofensiva, justificada en nombre de la nación, para recuperar derechos que el gobierno había “robado” a la sociedad. Pero las autoridades eclesiásticas moderaron su retórica cuando López Mateos subió de tono la suya. Siguió una declaración “pastoral” en mayo de 1963, obra maestra de duplicidad (porque tenía la apariencia de una oferta de paz, pero dejaba entrever que no estaba resuelto el conflicto), en la que el Episcopado estipuló que familia, Iglesia y Estado (en ese orden) deberían reconciliar sus derechos y deberes respecto a la educación.⁴⁰ A su vez, los empresarios, que atribuían propensiones izquierdistas a López Mateos por su política exterior “antiimperialista” y su presunto interés en acrecentar las actividades económicas del Estado, vieron en la controversia por la instrucción una oportunidad para aumentar su poder, disfrazados de voceros de la democracia, a base de

⁴⁰ *Contacto*, núm. 6, 1963. Citado por Loeza, *op. cit.*, p. 392.

alimentar la campaña de hostilidad contra la esfera pública.

En resumen, los detractores de los primeros libros de texto gratuitos respondieron a motivos y propósitos variados, pero compartían el afán de consolidarse frente al Estado. Otro estandarte común, el único en brindar alguna congruencia a la protesta, era una obsesión anticomunista exacerbada en el clima de guerra fría luego del triunfo de la Revolución cubana. No es de extrañar que la derecha enarbolase las banderas de un nacionalismo que recetaba el orden, la familia y la religión para la defensa de México, equiparada a la lucha contra el comunismo. Pese a divisiones internas que los altos jerarcas supieron reprimir, la Iglesia actuó como bloque cuando habló explícitamente de una "conspiración comunista" dirigida desde los salones de clase, que le pareció confirmada por "analogías" entre la distribución de materiales gratuitos en México y las políticas educativas de Cuba y la Unión Soviética. En esto hubo coincidencia con los empresarios, principalmente los de Monterrey, cuya oposición a los libros escolares era pretexto para defender los intereses locales contra el mando federal. Sin embargo, por influyente que fuera, la ideología anticomunista no bastó para mantener unidos a los críticos de la reforma educativa, porque no tenía la consistencia de un programa político genuino. De ahí que ciertos grupos, enaltecidos duran-

te la fase más intensa de la crisis, vieran menguar su fuerza cuando terminó el debate.

Contribuyó a eso la estrategia defensiva del gobierno, que subrayó la naturaleza popular y democratizadora de los manuales, lanzó una guerra verbal contra sus enemigos, a quienes tachó de “reaccionarios”, y movilizó en favor de la reforma educativa al SNTE, así como a organizaciones de padres de familia vinculadas con la SEP. Simultáneamente, las autoridades negociaron con sus adversarios ideológicos hasta lograr acuerdos tácitos para permitir el uso de libros alternativos en las escuelas privadas. Cabe la posibilidad de que otra defensa de López Mateos consistiera en mejorar las relaciones con Estados Unidos, puesto que la visita a México del presidente John F. Kennedy, en junio de 1962, fortaleció a su colega mexicano y le facilitó llevar a feliz término el sexenio y escoger, para sucederle, a Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), tan famoso por su anticomunismo que despojó de su razón de ser a las huestes de la derecha católica.⁴¹

LOS LIBROS DE TEXTO “SUBVERSIVOS” DE 1975

Harían falta múltiples razones para poner fin a un periodo de doce años libres de conflicto en materia edu-

⁴¹ El argumento es de Loaeza, *op. cit.*, pp. 374-378, 396-398.

cativa. Por una parte, llevar a cabo una reforma escolar fue indicio de que el dominio presidencial se mantenía intacto en los años setenta; por otra, cabe pensar que su propio diagnóstico de una grave crisis nacional haya decidido a Echeverría a substituir los libros de texto originales por una versión nueva, y es irresistible suponer que en ella se insinuaran planes gubernamentales para remediar los males detectados. Un cotejo de las medidas anunciadas con las que se implantaron ayuda a explorar el papel de la imaginación en la política, por cuya vía se manifiestan las contribuciones de la educación pública a la estabilidad del régimen.

En su discurso de toma de posesión, Echeverría anticipó una estrategia económica basada en la redistribución de recursos, paralela a una reforma política y a la reorganización profunda de la diplomacia para contribuir a "democratizar" el medio internacional,⁴² empresa plausible en esa época, pues el agravamiento de los problemas internos de México fue simultáneo al relajamiento de tensiones mundiales, imputable en parte a que el planeta tendía a volverse "multipolar" en lo económico.⁴³ Además, el éxito de la OPEP al de-

⁴² Citado en Carlos Arriola, "Los grupos empresariales frente al Estado (1973-1975)", *Foro Internacional*, XVI (4), abril-junio de 1976, pp. 450-451.

⁴³ Yoram Shapira, "La política exterior de México bajo el régimen de Echeverría: retrospectiva", *Foro Internacional*, XIX (1), julio-septiembre de 1978, pp. 65-67.

fender el precio del petróleo inspiraba confianza a los productores de materias primas y a las “potencias medias”. Ya que existían elementos favorables a enmiendas, dentro y fuera de México, una reforma de la educación serviría para fomentar el desarrollo económico ampliando las perspectivas de los futuros trabajadores. Más importante aún, el hecho mismo de producir libros de texto “perfeccionados” aseveraba afanes renovadores, según un razonamiento comparable con el de López Mateos quince años antes y análogo al de Salinas veinte después. En septiembre de 1972 el secretario de Educación, Víctor Bravo Ahuja, anunció que los libros de texto originales iban a substituirse por una versión mejorada, conforme a un magno proyecto para impulsar la instrucción pública.⁴⁴ Éste cerraba una ambigüedad de base, porque iba a llevarlo a cabo el gobierno federal, con toda la fuerza del Ejecutivo que todavía no menguaba, en nombre de la descentralización y la democratización. Más allá de esta paradoja, se refrendaba el deseo de propiciar un “cambio de mentalidad” para acelerar la integración nacional bajo la égida del Estado. Con ese propósito, según Bravo Ahuja, los textos gratuitos “actualizados” fecundarían disposiciones científicas y democráticas.

⁴⁴ El discurso con este anuncio, que leyó Bravo Ahuja en el Senado, se reproduce con el título “Educación para el cambio”, *Revista SEP*, número especial, febrero de 1975, pp. 3-10.

El solemne anuncio despierta curiosidad por el grado de innovación que se consiguió en verdad. Los libros de la segunda serie ciertamente son más ambiciosos que los de la primera y de mayor calidad académica. Responden a un plan educativo coherente y no hay entre ellos variaciones de opinión, porque, a diferencia de los originales, los seis títulos que patrocinó Echeverría fueron producto de un equipo único de investigadores. Se utilizarían a partir de primero de primaria en la materia de Ciencias Sociales, mezcla de la historia patria con la universal, la geografía y el civismo. Estos manuales ofrecen información al día, presentan temas complejos y formulan conceptos —el de “subdesarrollo”, por ejemplo— sin precedentes en la primera versión; por otra parte, mantienen inalteradas definiciones básicas, como las de “cultura” y “modernidad”, y reiteran las nociones cardinales de interdependencia y unidad nacional, de modo que la serie de los años setenta es una amalgama de rectificaciones y continuidades.

La crónica de la historia nacional comienza con un elogio del firmamento prehispánico por los logros de numerosas culturas enriquecidas al entrar en contacto unas con otras, aunque las divisiones y guerras entre ellas, patentes en el imperio azteca, lleven a concluir que nuestro país no era todavía una nación (VI: 188). Con la misma objetividad se describe la conquista, sin negar la violencia ni la crueldad de esta etapa capital, pero con énfasis en la reconstrucción

subsecuente, en la que participaron indios y españoles; se reitera la tesis de actitudes opuestas entre los misioneros y los militares, y predomina un mensaje de orgullo por el mestizaje. Los manuales reafirman luego que en el periodo colonial se gestó una cultura distintiva y tomó forma lo que iba a convertirse en entidad nacional (VI: 188), pero no se consolidó plenamente debido a la exclusión de indígenas y mestizos. La injusticia preparó el terreno para la Guerra de Independencia, en la que influyeron las ideas de las revoluciones estadounidense y francesa, en ese orden (IV: 98-100). La segunda serie señala con más claridad que la anterior diferencias de intereses entre los participantes en la lucha, pero al encarar la espinosa pregunta de quién la ganó se refugia de nuevo en la idea del patriotismo triunfante detrás de la “negociación” entre Iturbide y Guerrero (IV: 112).

No obstante, el legado de pugnas entre facciones que heredó la joven nación la debilitó y la hizo presa fácil de potencias extranjeras, como decían también los primeros libros de texto. Sin ocultar los abusos inherentes a los ataques de Francia y Estados Unidos, la versión de los años setenta se distingue por su optimismo, porque propone que incluso el acontecimiento más traumático de todos, la Guerra de 1847, tuvo el efecto positivo de vigorizar la conciencia nacional (IV: 145). Empero, la dependencia respecto a capitales y técnica extranjeros se agravó en el porfiriato, el cual merece una reiteración de la acostum-

brada condena por sus vínculos excesivos con el exterior, antitéticos al nacionalismo. El alto costo social de ese primer esfuerzo modernizador explica la Revolución, apuntan los nuevos libros, a tono con los previos, y destacan que ese movimiento combatió la dependencia externa como requisito para mejorar las condiciones del pueblo (VI: 189).

Las divergencias entre facciones se ilustran, una vez más, con el antagonismo entre Villa y Zapata, por un lado, y Madero, por el otro, y la sensación de victoria, pese a la muerte de tantos luchadores, se transmite con el clásico elogio de la Constitución de 1917, tan adelantada a su tiempo que llevó largos años poner en práctica sus disposiciones en pro de los derechos de todos los mexicanos. Los libros de la segunda serie nuevamente dan crédito a Obregón y Calles por consolidar el orden institucional (IV: 208-209). Sin especificar cuándo terminó la Revolución, en forma discreta adjudican a los gobiernos emanados de la contienda armada el mérito de elevar las condiciones de vida en el país, aunque el triunfalismo de la primera versión haya dejado su lugar a la prudencia que dicta una dosis razonable de autocrítica oficial.

Así como no cambia la reseña de la historia patria en sus líneas generales, sigue presente el interés por apuntalar el orden político vigente. Los manuales de Echeverría tienen el buen gusto de no ostentar que este gobernante cumplió sus promesas de amnistía a los presos políticos y reforma de la ley electoral para

favorecer a los partidos de oposición; prefieren reiterar preceptos esenciales de la ideología estatal respecto a la política, justificados por patrióticos, con la novedad de que añaden la eficiencia y el conocimiento a las fuentes legitimadoras del poder establecido. Éste se define, en los libros para los alumnos más jóvenes, como “dar instrucciones”, no como ejecutar mandatos. En cambio, los de quinto y sexto grados hacen una apología de las instituciones democráticas, congruente con declaraciones de fe en la sabiduría del pueblo y con gestos sutiles para moderar el culto a las personalidades. Estos manuales por primera vez nombran los partidos de oposición, sin dar más detalles, y de nuevo elogian a la Iglesia católica por proteger a las castas bajas durante la colonia, pero siguen reprochándole, quizá de modo menos visceral, su papel poco virtuoso en el siglo XIX. La condena de las fuerzas armadas es más virulenta que antes en la crónica de la historia mexicana, y adicionalmente se repudian las dictaduras militares latinoamericanas que se adueñaron de los estados en los años setenta.

Parece más original el intento por caracterizar con alguna precisión los grandes regímenes políticos. El fascismo se asocia con el holocausto, objeto de merecida repulsa, y se extiende su definición para cubrir las maquinarias represivas de Stalin y Pinochet. No se critica el capitalismo, toda vez que la pobreza de los trabajadores en algunas etapas del desarrollo de

este sistema se atribuye, más que a su naturaleza, a la ambición de algunos empresarios. Se alaba el esfuerzo redistributivo del socialismo, sin embellecerlo en forma alguna. Pero el compromiso inequívoco es con la democracia y la defensa del orden legal: la segunda serie no difiere en esto de la primera, aunque sí en la observación de que las leyes son perfectibles y su éxito depende de una aplicación correcta. La legitimidad del gobierno mexicano (por inferencia democrático), derivada de que lo forman "especialistas", sigue dependiendo de identificarlo con las buenas causas de la historia patria: un retrato de Echeverría junto al de Juárez evoca permanencia institucional, con todo y que la exaltación de la figura del Ejecutivo es menos fuerte que antaño. Sigue presente, a su vez, más discreta que antes, la imagen de un Estado nacionalista y benefactor. En el universo de las ideas políticas, las novedades llamativas se descubren en las sugerencias para negociar con el exterior.

Independientemente de sus resultados, la diplomacia de Echeverría fue objeto de composturas para conseguir objetivos económicos y de legitimación. Si bien es controvertible la correspondencia entre la política interna y la exterior, un análisis cronológico sustenta que los fracasos de varias reformas locales estimularon el "activismo" diplomático, porque el presidente esperaba distraer a la opinión pública o pensaba que habría poca oposición a su defensa del

Tercer Mundo,⁴⁵ aparte de posibles consideraciones de prestigio personal. El giro de la política exterior, que la dotó de su lenguaje agresivo característico, fue una sorpresa que no dejaron entrever las primeras iniciativas del mandatario en ese plano. El detonador de la metamorfosis tal vez haya sido la sobretasa de 10% que impuso Estados Unidos a todas sus importaciones, sin conceder a México la excepción que le pidió. La fulgurante política exterior de Echeverría quiso diversificar el comercio, posteriormente adquirió un tono más político, referido primero a América Latina, luego con una connotación tercermundista que culminó en la propuesta de una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (CDDEE), donde se proclamaba la facultad de toda nación para controlar sus recursos naturales y dotarse del sistema político que prefiriera. Esto contradecía la orientación cautelosa y defensiva de la vieja diplomacia mexicana. En realidad hubo tensión entre el nuevo activismo y los principios tradicionales, que afloró con especial nitidez en el trato con Chile, España e Israel. Como reflejo de ese conflicto, en los libros de texto que auspició Echeverría se exageran disonancias entre ideales de fraternidad internacional y recelo frente a las naciones poderosas por sus abusos, que se tipifican como expresión de “colonialismo” y “semicolonialis-

⁴⁵ Rosario Green, “México: la política exterior del nuevo régimen”, *Foro Internacional*, XVIII (1), julio-septiembre de 1977, pp. 2-3.

mo". Para combatir estos flagelos, los manuales recomiendan cooperación, no ya solamente con los vecinos latinoamericanos, sino con todos los países del Tercer Mundo, equiparados a los no alineados. Nada se aproxima más al radicalismo que esta invitación a democratizar el orbe, muy fogosa en el título para sexto grado, en contraste con el poco interés por alentar transformaciones de magnitud comparable en la política interna de México.

El retrato de la economía denota el mismo sesgo conservador. Echeverría acariciaba planes para reformarla, según sus declaraciones, pero también en este terreno fracasaron los supuestos afanes de cambio. Desde su primer informe de gobierno el mandatario criticó indirectamente a sus predecesores y dejó entrever deseos de inspirarse en Cárdenas⁴⁶ para revivir el nacionalismo popular de la Revolución, con los objetivos de redistribuir el ingreso y asegurar la independencia de la economía. Para conseguirlos, Echeverría propuso que el Estado participara más en actividades productivas, interviniera en apoyo de grupos marginados y elevara el gasto público con prioridad para los programas sociales. El gobierno adoptó, en efecto, políticas expansionistas, pero, después de retirar su iniciativa de reforma fiscal de 1972 por la férrea oposición de los empresarios, recurrió a

⁴⁶ Juan M. Martínez Nava, *Conflicto Estado-empresarios en los gobiernos de Cárdenas, López Mateos y Echeverría*, México, Nueva Imagen, 1984, pp. 161-163.

préstamos (de bancos privados en proporción cada vez mayor) que hicieron crecer la deuda externa a un ritmo sin precedente. El Ejecutivo coqueteó, a la vez, con la idea de fomentar las exportaciones, cuando en diciembre de 1970 anunció una simplificación de trámites burocráticos para facilitar el funcionamiento en México de compañías extranjeras interesadas en vender sus productos por el mundo, pero una auténtica estrategia exportadora habría requerido la cooperación de las empresas mexicanas, nada dispuestas a brindarla.

Quizá por obra de un reconocimiento callado de estas dificultades, los libros de los años setenta se limitan a refrendar añejas tesis oficiales sobre la economía, con un poco más de ahínco en la necesidad de enmendar sus flaquezas; confirman la idoneidad de un aparato productivo mixto y reiteran el sentido patriótico del trabajo individual, a la par que justifican las disparidades salariales en función del conocimiento y sin dar cabida a la posibilidad de explotación, porque la desigualdad se encubre, por ejemplo, con el dogma de la “interdependencia” de los medios rural y urbano. No obstante la sombría narración de la vida en las ciudades, pensada para desalentar las migraciones, la industrialización es el objetivo último de la economía y el fundamento del poder internacional. La segunda serie hace un matiz cuando recomienda que el crecimiento de la industria se acompañe de acomodados sociales y políticos favorables a la dis-

tribución de la riqueza, requisito indispensable de la modernidad (VI: 75, 120). Por otra parte, es significativo que el diagnóstico de la pobreza en México busque sus razones en el dominio colonial, a costa de subestimar causas internas recientes. Los lastres que por primera vez reconocen los libros de texto abarcan la reforma agraria inacabada, la dependencia de capitales y técnica extranjeros, el crecimiento demográfico, la corrupción y la injusticia implícita en la concentración del ingreso. Lejos de culpar al sistema de estas fallas, para superarlas se recomiendan reformas graduales, con plena confianza en las políticas públicas, a la vez que se infunde esperanza en el rescate individual.

Curiosamente, este conjuro de paciencia que apoya el mantenimiento del orden político y las jerarquías sociales, indicador clave de continuidad entre las versiones de los años sesenta y setenta, no impide que la nueva descripción de la familia modelo comunique flexibilidad, porque ha dejado de ser estricta la división de funciones entre sus miembros. La mujer perfecta sigue siendo ama de casa, pero un buen esposo por lo menos dedica ahora algo de tiempo a ayudar a los hijos con las tareas escolares e incluso colabora en quehaceres domésticos, porque el imperativo de la época es el apoyo mutuo. En forma paralela, la escuela que representan los manuales de Echeverría permite a los alumnos dinamismo y participación en clase. Sin perjuicio de que ciertas distin-

ciones sean legítimas, estos libros confirman el rechazo a los privilegios de nacimiento y censuran la desigualdad extrema en cualquier contexto. Empero, al referirse a México endulzan las diferencias sociales recién reconocidas, por un probable temor a propiciar rencores. Aparece el concepto de “clases”, y hay una evocación de Marx y sus ideas sobre la lucha entre ellas, pero jamás se invita a declararla. Si la primera serie mencionaba con frecuencia al proletariado, la segunda hace hincapié en las clases medias, como si fueran antídoto contra los conflictos. Con más insistencia en el aspecto económico que en el sentimental, se reitera la noción medular de interdependencia social, que establece una igualdad abstracta entre los individuos. Esta creencia es la base de la repetida exhortación a la unidad nacional, piedra angular del nacionalismo del Estado. En esto las dos primeras series son idénticas, aunque la segunda pregone con más ardor una aspiración internacionalista.

En el código patriótico sobresale la comparación habitual entre la nación —término ahora más usual que el de “patria”— y la familia, con énfasis en que predominan los elementos que unen a los mexicanos sobre los que los separan. Está mejor visto que nunca conciliar ese nacionalismo con una aspiración de universalidad, en el entendido de que el progreso de la especie humana es fruto de la experiencia de pueblos diversos, pero equivalentes (III: 21, V: 14). Se habla incluso de una “gran familia humana”, al extrapolar

el nacionalismo mexicano al mundo, lo que extiende la noción de "interdependencia" a las relaciones internacionales. Esto no altera la consabida lista de valores morales prescritos: fuerza y ascetismo, caracterizados como virtudes aztecas (III: 77, 113; V: 60), en combinación con honradez, generosidad, sensibilidad y espíritu de servicio (VI: 195) en un sentido muy cristiano. Es novedosa la convocatoria a desarrollar disposiciones prácticas para resolver problemas cotidianos, acorde con la ética del trabajo redentor. El catecismo cívico subraya que los ideales de la Revolución están vivos en leyes tan robustas que ha desaparecido la necesidad de librar más luchas en México, porque existen canales de acción institucionales: la violencia pudo ser legítima en el pasado, pero ha perdido su razón de ser en nuestros días, que es exactamente el mismo postulado de los libros de texto originales. Se recomiendan orgullo por la cultura nacional, satisfacción por los dones de la historia, apego a las tradiciones y gratitud para con los héroes, el ejercicio del voto y el alegre pago de impuestos.

En suma, la propensión conservadora de la segunda serie de manuales se perfila en la apología reiterada de las jerarquías legítimas, la propiedad privada y el poder basado en el conocimiento. Se atempera ese conservadurismo con un ofrecimiento de reformas internas sin el fuego de la retórica tercermundista en la política exterior. Debido a que la autocrítica se antoja moderada (es ya un "progreso" que

la haya), la pintura de la vida mexicana sigue estando edulcorada, así exponga con claridad sin precedente sus fealdades, de modo que las descripciones en los libros no son reseñas fieles de hechos observables, sino construcciones de ensueños en un lenguaje del deber ser. Para medir el grado de idealización, valga cotejar las pretensiones de los manuales con los logros tangibles del sexenio.

La evaluación se dificulta porque Echeverría fue un personaje controvertido. Tuvo el mérito de dirigir un sistema político de autoritarismo benigno, en comparación con las dictaduras militares en el resto de América Latina. Pero los detractores del presidente le reprocharon demagogia, incongruencias y ambición personal desmedida, e hicieron notar que, a fuerza de prometer una “nueva sociedad” sin precizarla, dio pie a que se le acusara de llevar a México al “comunismo”. El Ejecutivo se convirtió en mediador entre feudos de poder,⁴⁷ sin que progresaran usos democráticos. Por ende, la invocación de la democracia en los libros de texto no encuentra correspondencias empíricas. La política exterior, aunque haya tenido logros tangibles como la defensa del mar patrimonial, no aseguró la anhelada “independencia”, por equivocaciones burocráticas, impulsividad del presidente o estrechez de recursos para negociar eficaz-

⁴⁷ Manuel Camacho, “El poder: Estado o ‘feudos’ políticos”, *Foro Internacional*, XIV (3), enero-marzo de 1974, pp. 341-342.

mente en los foros internacionales. Un proyecto pretencioso, como la CDDEE, se aprobó en la Asamblea General de la ONU sin el apoyo de las diez naciones industriales más importantes, lo que restó al acuerdo toda eficacia desde su origen. Estas limitaciones contrastan con la confianza de los libros de texto en alentar el desarrollo mexicano mediante la diversificación de la política exterior. Tampoco la estrategia económica alcanzó los propósitos de fomentar crecimiento equilibrado, según los cánones del desarrollo compartido. No aumentó la producción, se frustró la reforma fiscal, disminuyó el ingreso por turismo, creció el déficit comercial y huyeron los capitales a raíz de fricciones entre el gobierno y los empresarios, todo lo cual culminó en la devaluación de 1976. Persistió y se acentuó la marcada asimetría entre México y Estados Unidos: el comercio entre los dos siguió siendo vital para nuestro país, y la mayor parte de la nueva deuda externa mexicana se contrató con bancos de la potencia. Síntoma de estas condiciones, el fracaso (a resultas de la presión estadounidense) de las leyes sobre inversión extranjera, transferencia de tecnología y patentes y marcas puso en claro que la intervención estatal en la economía era muy inferior a su mito. Al estallar la crisis, México tuvo que someterse a la disciplina de las instituciones financieras internacionales según los lineamientos de Estados Unidos, en agudo contraste con el afán de autonomía que inflama la segunda versión de libros de texto.

En estos manuales, la combinación de ideas novedosas y antiguas revela un ansia contradictoria por transformar la mentalidad de los escolares sin comprometer el orden establecido. La capacidad de Echeverría para distribuir la segunda serie, destinada a “inmortalizar” un nacionalismo renovado que afirmase cambios de política “irreversibles”, atestigua el poder presidencial en apogeo, visible también en el hecho de que los libros reflejen con tanta fidelidad las preferencias del mandatario —o lo que éste deseaba que el público identificara como tales— en su empeño por distanciarse de algunos antecesores, aun y cuando los responsables directos de la nueva versión gozaron de plena libertad para llevar a cabo su labor.⁴⁸ Por su calidad intelectual, los manuales de los años setenta fueron idóneos para inducir pensamiento crítico en los escolares. Sin embargo, la agudeza del análisis histórico no perturba el esquema del México moderno.

Pese a las cacareadas intenciones de reparar las reglas de la economía, esto no se consiguió en la práctica y ni siquiera en el paisaje imaginario que trazan los libros, donde se reitera el decálogo de la economía mixta a falta de empuje innovador. Atribuir vicios nacionales a causas externas oculta sus otras raíces y hace más notorio el conservadurismo de los

⁴⁸ Testimonio de Josefina Zoraida Vázquez, responsable de los libros de Ciencias Sociales.

libros respecto al ámbito interno. Para sembrar una orientación más democrática, se flexibilizan los modelos de familia y escuela, pero la prédica de la democracia en la política no es de entusiasmo desbordante. La manera de concebir el poder público no parece del todo democrática, y a pesar de que la justificación del gobierno mexicano se haga depender en parte del conocimiento técnico, no se descarta la historia como fuente de legitimidad, en testimonio del influjo de mitologías heredadas de la Revolución.

Por todo eso perdura la ideología que predica el respeto por el Estado como signo de amor patrio. El nacionalismo oficial, gracias a la sabiduría de combinar su conservadurismo de base con llamados a la reforma en pro de la justicia, mantiene eficacia para despojar de banderas ideológicas a los adversarios del Estado y situarlo por encima de las categorías ideológicas tradicionales (izquierda y derecha), con habilidades intactas para obsequiar ilusiones a cada ciudadano y la oferta de un sitio en su proyecto inclusivo. Esta virtud del credo priista, aunada a la de embellecer la realidad en compensación psicológica por el fracaso de políticas concretas, coadyuvó a que Echeverría siguiera confiando más en la imaginación que en el desarrollo económico para vivificar la integración nacional, que de suyo germina en las conciencias.

EL DEBATE “EDUCATIVO” DE 1975

La controversia de 1975 no guarda proporción con las innovaciones en los libros de texto, sino que su lógica responde a las circunstancias políticas del momento. Cierta paralelismo entre esta pugna y la de 1960, puesto que los disidentes se apegaron a su fórmula de ejercer presión y organizar manifestaciones, sugiere que en el curso de un decenio no cambiaron mucho los rasgos de la vida nacional ni la forma de articulación entre gobierno y sociedad. En cuanto se dio a conocer la segunda serie de libros, la criticaron los mismos grupos que repudiaron la anterior, y varios de sus reproches no eran frescos. Sin embargo, en esta ocasión los detractores de los manuales, en vez de impugnar su existencia como institución, se concentraron en vituperar sus contenidos. Por otra parte, los grupos empresariales no fueron tan activos en el debate de 1975 como en el previo, pues otorgaban la mayor atención a otros conflictos con Echeverría.

Si bien el Ejecutivo en un principio intentó preservar equilibrios entre las organizaciones empresariales y una relación estable con todas ellas,⁴⁹ esa mediación entre feudos produjo conflicto sin crear mecanismos para resolverlo, y la crisis fue más grave porque el peso de los empresarios había aumentado hasta el punto de permitirles cuestionar acciones es-

⁴⁹ Camacho, *art. cit.*, pp. 344-346.

tatales. Hubo tensión desde el comienzo del sexenio, porque el gobierno no consultó a los patrones respecto a la fallida reforma fiscal y decretó aumentos salariales. Las relaciones llegaron a su punto más bajo con el asesinato, en Monterrey, del líder industrial Eugenio Garza Sada, del que se culpó al Estado indirectamente; después, el sector privado tuvo gestos conciliatorios, pero la tensión repuntó en el último año del sexenio, al redoblar Echeverría su "activismo". Los productores se quejaban de altos impuestos, obstáculos burocráticos, exclusión de ciertas actividades y expropiación de tierras; para contener la intervención "indebida" del Estado en la economía, afinaron sus tácticas de fuga de capitales, renuencia a invertir y declaraciones amenazantes, a las que añadieron paros, utilización de cuerpos de seguridad privados, campañas de rumores y esfuerzos publicitarios sin precedente. Éstos culminaron en una Declaración de Principios del Consejo Coordinador Empresarial, que aspiraba a ser un proyecto nacional alternativo⁵⁰ pero no se ganó el apoyo de otros grupos conservadores ni mucho menos el de las masas.

El PAN, a pesar de que logró captar parte del voto de protesta en las elecciones de 1973, estaba debilitado por su dificultad para lograr consenso interno y dotarse de un liderazgo eficaz,⁵¹ en vista de la pugna

⁵⁰ Arriola, *art. cit.*, pp. 473-476.

⁵¹ Rafael Segovia, "Tendencias políticas en México", *Foro Internacional*, XVI (4), abril-junio de 1976, pp. 424-425.

entre la facción oportunista de José Ángel Conchello y la corriente más doctrinaria de Efraín González Morfín,⁵² que hizo imposible presentar un candidato para suceder a Echeverría en la presidencia. Al no tener recursos para encarar asuntos políticos trascendentes, este partido se refugió en su vetusta defensa de la moral y las buenas costumbres, y no es de extrañar que en un principio mostrara interés por la controversia “educativa” de 1975, pero su debilidad le impidió participar en ella con preeminencia.

Esas condiciones favorecieron que el papel principal en la campaña contra los nuevos manuales escolares recayera en la Iglesia, ávida de recuperar la influencia perdida en un terreno donde la competencia con el Estado tenía hondas raíces, y el acuerdo tácito entre los rivales daba ya muestras de desgaste. No obstante, debido a las restricciones legales a su participación en la política, el clero católico no podía permitirse choques frontales con la autoridad pública, así que prefirió intervenir en la polémica indirectamente las más de las veces. Su intermediario privilegiado fue la UNPF, que en los años sesenta cumplió funciones similares y, aunque tuviera bases para actuar con cierta autonomía, se mantuvo leal a los edictos católicos más conservadores. Pese a que esta organización suele concentrar su trabajo en comunidades

⁵² Carlos Arriola, “El Partido Acción Nacional (origen y circunstancia)”, *Foro Internacional*, XVI (2), octubre-diciembre de 1975, pp. 241-245.

locales, en 1975 publicó dos veces, en periódicos de circulación nacional, declaraciones⁵³ que condensan sus creencias a propósito de la nación ideal y cómo consolidarla en el salón de clases.

El *memorandum* del 3 de enero de 1975 negó que las intenciones de la UNPF fueran políticas o religiosas, pero al hablar de "derechos exclusivos de los padres" —petición demagógica en un país donde el promedio de educación formal entre los adultos era entonces de tres años— exhibió su filiación católica. Estipuló que la oposición a los libros de texto, en particular a la segunda versión, tenía bases legales y filosóficas (no especificadas). Los manifiestos publicados un mes después insistieron en los "sesgos" de los libros, sobre todo el de Ciencias Sociales para sexto grado, considerado el "más peligroso", y el de Ciencias Naturales para el mismo año. Se rechazaba la injerencia, en la SEP, de un grupo que hacía "proselitismo con el dinero del pueblo" y se pedía un diálogo entre los mexicanos, en vez de sumisión al grupo en el poder.

Mucho desagradaba que los libros de Ciencias Naturales por primera vez dedicaran unas páginas a la reproducción humana, redactadas, por cierto, con un pudor extremo que pasaba de describir la espermatogénesis y la ovulación a reseñar el desarrollo del

⁵³ El *memorandum* de enero y los manifiestos de febrero se publicaron en todos los periódicos de circulación nacional, y posteriormente los reprodujeron varias revistas.

feto en colores pastel, sin decir absolutamente nada sobre el momento estelar que augura el milagro.⁵⁴ La UNPF se confesó favorable a la educación sexual, siempre y cuando se ofreciera en forma individual y de manera distinta a niños y niñas para respetar la “sumisión natural” de las segundas; más aún, debería ser la familia la que la impartiera primero, para salvar a las mentes infantiles de la deformación “materialista y freudiana” de los maestros. Se daba por hecho que, si el Estado imponía sus propias normas éticas por medio de la educación sexual, ésta iba a “debilitar las normas religiosas y morales del pueblo mexicano”. A la vez, se repudiaban alusiones a la teoría de la evolución, ejemplificada en los manuales con el caso del caballo, por considerar que equivalían a negar la existencia de Dios y probaban adhesión al “materialismo”.

En cuanto a las ideas políticas, se condenaban los libros, sin citarlos, por abrazar el “materialismo histórico”, defender concepciones marxistas desacreditadas y juzgar a los estados “comunistas” con benevolencia que derivaba en exhortación a la lucha de clases para destruir la propiedad privada. Como alternativa, la UNPF recomendaba que los libros seña-

⁵⁴ Decoraba estas páginas el inocente dibujo de un niño y una niña desnudos, la segunda con la representación figurada de sus órganos reproductores internos. El volante de un grupo de derecha anónimo, distribuido en templos católicos, no objetó la desnudez, sino que los niños fueran “pelados”, es decir morenos.

laran, en vez de modelos puros de capitalismo y socialismo, una tercera vía con "raíces hispánicas y cristianas", adecuada a México. No hay evidencia, al respecto, de que los libros alienten la subversión o idealicen el socialismo; en cambio, sí la hay de que prevén una "tercera vía", cuando advierten que la Constitución de 1917, al propugnar la economía mixta, moderó el radicalismo de la Revolución con el pensamiento liberal del siglo .XIX. También las acusaciones de "falta de patriotismo" en los textos carecen de base, o en todo caso se podría sostener que el nacionalismo de los libros es diferente al de la UNPF. Los juicios sin fundamento se prestan a varias hipótesis: que los detractores de los manuales no los leyeron del todo, que los usaron como pretexto para divulgar su propia ideología (contrapuesta a la oficial) o que las diferencias con el gobierno eran tan profundas que hacían imposible el diálogo.

Los objetivos mal disimulados de la crítica incluían el de desprestigiar al Estado y cuestionar de raíz su papel en la construcción nacional, con el argumento de que sus controles sobre la educación eran antidemocráticos. En forma correlativa, se exaltaba la sabiduría innata del pueblo, reflejo presunto de un orden moral preestablecido que el Estado debería obedecer, sin intentar en vano modificarlo. La familia, "independiente del Estado", sería la célula de esa nación metafísica, edificada sobre tradiciones y valores arraigados. No es explícita esta propues-

ta alternativa de la UNPF y su instigadora oculta; puede inferirse que consistía en defender un orden social rígido, basado en la defensa a ultranza de la propiedad privada. Cabe imaginar que la utopía de un sistema con “raíces hispánicas y cristianas” guardara parentesco, para fines prácticos, con el autoritarismo español bajo la guía del clero católico. El estilo mismo de la UNPF, ajeno a la argumentación racional, encierra connotaciones despóticas que no se disipan con la demanda de modificar el artículo 3° en nombre del pluralismo, ni con el pedido de que en la redacción de los manuales participen iglesias, empresarios, sindicatos y partidos, solicitud menos vinculada con la democracia que con el corporativismo propio de regímenes como el del PRI. La impresión de que un segmento autoritario de la opinión pública buscaba vengarse del Estado autoritario parece confirmarse con la fobia a la igualdad que dejan entrever las palabras de la UNPF cuando niega enfáticamente que la unidad nacional sea sinónimo de uniformidad, porque “considerar a los individuos absolutamente libres equivale a creerlos absolutamente iguales”, que es “moralmente inaceptable”. Ese elitismo social que delata la vocación de la derecha católica, sumado a su intransigencia con la izquierda, no correspondía al sentimiento democrático en la segunda mitad del siglo XX.

Es plausible que elementos del clero hayan querido ocultar su presencia detrás del lenguaje a veces tor-

tuoso, pero inequívoco, de la UNPF. Sin embargo, una vez que las tres declaraciones de esta organización produjeron los efectos deseados, estuvo listo el terreno para que la Iglesia católica como tal presentara directamente su opinión en las Resoluciones de la Conferencia del Episcopado, aparecidas en la prensa el 10 de febrero de 1975. Aunque la Iglesia no sea un bloque monolítico, porque dentro de ella coexisten corrientes de opinión antagónicas, esta institución es una de las más autoritarias en el mundo, a juzgar por su destreza para imponer disciplina y crear una apariencia de homogeneidad, y son las opiniones de las más altas jerarquías —por lo común las más conservadoras— las que habitualmente prevalecen en los testimonios definitivos. Cuando formalizó su participación en el debate, la Iglesia quiso transmitir una actitud moderadora al exponer ideas en apariencia menos radicales que las de la UNPF, pero armónicas con ellas, por consiguiente útiles para reforzarlas.

Las Resoluciones asientan que una persona tiene derecho a que le auxilien la familia, la sociedad y la escuela para obtener una educación integral: no es casualidad el orden de los factores. Más adelante, en tono aparentemente conciliador, el Episcopado acepta la educación sexual, a condición de que sea "positiva, gradual y prudente", descripción que tal vez no corresponda a la tentativa de los libros gratuitos. Pero es plena la coincidencia de los obispos con la UNPF cuando dicen que los manuales, en las secciones de

enseñanza social, contienen declaraciones y expresan ideologías “inaceptables para la conciencia cristiana y aun para la moral humana”. Más temerosos del comunismo que de la educación sexual, los preladados concluyen su nota invitando a los padres de familia a que presenten sugerencias para mejorar los libros por un conducto institucional, el Consejo Nacional Técnico de la Educación, galantería que no deja de calificar esos materiales de imperfectos y ofensivos para la población.

Dos semanas después, el 27 de febrero, se publica una nueva declaración del Episcopado en los periódicos, más audaz que las Resoluciones, pero cuidadosa todavía de evitar conflictos francos con el Estado. Los obispos recalcan que su motivo para participar en el debate es meramente espiritual y que la Iglesia aprobaría sólo una reforma escolar encaminada a la salvación del hombre. Piden que la instrucción básica infunda respeto por las ideas ajenas, indican que no pueden apoyar “un sistema educativo que por su estructura misma destruye los valores que defiende la Iglesia” y exigen una educación “abierta a Dios”, como lo requiere la fe de “la mayoría de las familias” en México. Remata la declaración el anuncio de que la Iglesia revitalizará sus propios medios “educativos”, el catecismo y la evangelización, lo cual parece un ofrecimiento de competir más enérgicamente con el Estado por las almas de los mexicanos. Sin embargo, el final del segundo pronuncia-

miento es conciliatorio, porque reitera el llamado a presentar opiniones por vías institucionales. La cautela podría interpretarse como producto de temor, pues la campaña que inició la UNPF empezaba a tener episodios violentos —quemados de libros y vandalismo contra escuelas públicas— en la segunda y la tercera semanas de febrero. El temor ante el celo de los militantes católicos más fervientes podría explicar que los obispos se disociaran expresamente de esos actos, pero no se desvanece la sospecha de que algunos miembros del clero hayan alentado a quienes los cometieron.

En defensa de la reforma, las dos declaraciones del secretario de Educación destacaron el apego de los nuevos libros de texto al marco legal y defendieron la labor educativa del Estado por la amplitud de su visión. Una de ellas, la del 7 de enero de 1975, fue una respuesta explícita a la UNPF, la otra, del 12 de febrero, criticó abiertamente a los obispos por el hecho de que sus exposiciones coincidieran con una campaña de "rumores contra las instituciones y terrorismo". Los comunicados de otros funcionarios de la SEP cuestionaron la representatividad de la UNPF. También se organizaron conferencias de prensa, en las que los autores de los manuales expusieron la lógica de su labor. Simultáneamente, al igual que en la controversia previa, las autoridades movilizaron al SNTE, así como a organizaciones afines de padres de familia, en una apología de los libros que consistió en de-

nigrar a sus críticos. Esta campaña se concentró en defender los textos como institución, más que el contenido de la segunda serie, en consonancia con la idea de que su justificación era de orden histórico y legal, y de que existía simbiosis entre el proyecto de nación y las políticas educativas encarnadas en los manuales, que no eran imposición de una élite gobernante, porque ésta se limitaba a interpretar la voluntad colectiva. El círculo virtuoso denotaba el triunfo de buenas causas, pero las tropas del mal seguían amenazantes. En el debate “educativo”, imaginado como expresión de antiguos conflictos ideológicos, el gobierno identificaba esas fuerzas como agentes de intereses ocultos: por eso le parecía prioritario descalificar al ejército de adversarios vivos y muertos de la nación. De ahí que los libros se evaporasen de la polémica a la que dieron pretexto, toda vez que derivaban menos importancia de lo que decían que de su simbolismo y su potencia para estimular la fantasía de los contendientes, quienes se contemplaban a sí mismos como herederos de batallas históricas, encargados de revivir mitos formidables. Por eso en la controversia de 1975 los linderos temporales se rompen con facilidad, las identidades políticas se definen a la luz del pasado y predominan alegatos no racionales.

En un intento por establecer quién ganó el debate, la primera observación es que la posibilidad de publicar una nueva serie de libros y movilizar grupos para defenderla fue en sí misma demostración de vi-

talidad del régimen y de autoridad personal del presidente, quien plasmó en ellos su ideario, sin detrimento de que el contenido de los textos estuviera sujeto a la influencia de numerosas consultas profesionales durante la redacción. Las críticas de la derecha se volvieron ventajosas para el sistema, en cuanto éste pudo citar como prueba de democracia el diálogo con sus detractores, que en sentido estricto no fue tal, porque las partes en pugna no eran receptivas a las ideas del contrincante. Triunfó el Estado, en última instancia, porque pudo resistir presiones e imponer una segunda versión de libros escolares que se repartieron masivamente. Sin embargo, ésta fue una de varias victorias pírricas, a juzgar por la venganza contra Echeverría de un sector privado que aprendió a transformar su fortaleza económica en poder político mediante el retiro de capitales. Para desgracia del mandatario, su discurso nacionalista con tintes tercermundistas no agradó a la izquierda, pero sí irritó a la derecha, lo que dañó la economía.

Los manuales de los años setenta ilustran numerosos dilemas de un Estado que anhelaba seguir el curso de la historia y a la vez definir el rumbo futuro; que aspiraba por igual a interpretar la voluntad general y a moldear el alma mexicana; que deseaba responder a demandas de la opinión pública, pero sin perder su autonomía. La raíz de estas contradicciones podría hallarse en los confines imprecisos entre el Estado y la sociedad, en un país donde el primero creó la segun-

da al asumir la construcción nacional (la tesis alternativa de la Iglesia, según la cual la nación tiene existencia propia y la mantiene por influencia del catolicismo, sería muy difícil de probar empíricamente). Durante el segundo debate “educativo”, también los críticos conservadores emplearon un lenguaje patriótico en nombre del pueblo, poco creíble por su impulso elitista, en el que se oyen ecos de la tradición autoritaria española, pero el ingrediente básico sigue siendo el anticomunismo. Como la parodia de doctrina empresarial no gozaba de respaldo popular, hubo necesidad de que miembros del clero proporcionaran orientación a los detractores de los libros, a manera de repetir discretamente la alianza de 1961. Por burlas del destino, tanto la oposición de derecha como el Estado pusieron en evidencia un autoritarismo profundo, y la primera —fiel, quizá, a remanentes de su inspiración fascista— abogó por un corporativismo en el fondo similar al que construyó el Estado, con sumo éxito, desde los años treinta. No es de extrañar entonces que en 1975 siguieran siendo difusos los límites entre Estado y sociedad.

LOS LIBROS DE TEXTO “RESTAURADORES” DE 1992

En su momento, los críticos de Salinas de Gortari propusieron que la opinión respecto a su desempeño

que más le importaba era la de los extranjeros, no la de sus conciudadanos, porque deseaba pasar a la historia como el presidente mexicano que se desligó del nacionalismo comprometido con la defensa de la identidad nacional, basada en resistencia selectiva al hechizo de Estados Unidos, para entablar una alianza abierta con el vecino que solía verse con recelo.⁵⁵ Ese viraje de la política exterior fue subsecuente a un programa económico de corte neoliberal, que ordenó atraer la inversión extranjera por todos los medios, disminuir drásticamente las empresas paraestatales y dismantelar la protección comercial. Se sumó a estas innovaciones una reforma agraria contrapuesta a la del cardenismo, con la finalidad de otorgar a los ejidatarios la propiedad individual de sus tierras e incluso la posibilidad de venderlas. Simultáneamente, el gobierno llevó a cabo reformas políticas, aunque menos ambiciosas, para permitir que candidatos de oposición ganaran gubernaturas estatales, a condición de que fueran de derecha, y sin menoscabo de que Salinas decidiera la suerte de otros gobernadores en la más acendrada tradición del presidencialismo mexicano.

Dado que formalizar la alianza con Estados Unidos era incompatible con las tesis que solían guiar la diplomacia mexicana, no sorprende que la retórica oficial se despojara gradualmente del tono antiyan-

⁵⁵ Meyer, *art. cit.*

qui de otros tiempos, como si la política exterior estuviera dispuesta a un trueque de “principios” por ventajas económicas, que se puso de manifiesto cuando México, luego de enfriar sus afanes de mediación en Centroamérica, criticó el régimen del general Manuel Antonio Noriega en Panamá y ofreció cooperar con Estados Unidos en su pequeña guerra contra la invasión iraquí de Kuwait. No fueron éstas las primeras faltas al mandamiento de no intervención, pero se distinguían de las anteriores por el hecho de cometerse con el fin expreso de complacer a la potencia, cuya gratitud tomó formas tan concretas como la de apoyar la renegociación de la deuda externa mexicana. No fue fácil el viraje, debido a la inercia de la antigua ideología que, en los primeros meses del sexenio, llevó a Salinas a manifestar que su estrategia diplomática sería “multilateralista”, con especial atención a los vecinos latinoamericanos, y a mediados de 1989 le dictó la aseveración explícita de que “México no pertenece ni quiere asimilarse a ninguna zona económica o bloque político alguno”.⁵⁶ Aun después de optar por el acercamiento declarado a la potencia, decisión que Salinas habría tomado tras un viaje por Europa durante el cual pasó en vano el sombrero, era tan difícil de llenar el vacío por la de-

⁵⁶ Declaraciones de Salinas en el VII Seminario de la Cuenca del Pacífico, que tuvo lugar en Manzanillo, Colima, el 26 de junio de 1989. Reportado en *Excelsior*, 27 de junio de 1989, primera plana.

saparición del enemigo que el discurso de la política exterior siguió prometiendo diversificar las relaciones internacionales del país y resguardar su soberanía.

Empero, el estancamiento económico y la crisis de legitimidad del Estado, a raíz de acusaciones de fraude electoral en 1988, pesaron más y llevaron a buscar soluciones en el exterior, más aún porque el legado de De la Madrid —quien hizo a México ingresar al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986 y firmó con Estados Unidos un “acuerdo marco” de procedimientos y principios en materia de comercio— allanaba el camino de negociaciones más audaces. Eran propicias las condiciones internacionales, pues el derrumbe del socialismo empujó a los países europeos desarrollados a concentrarse en el este del continente, a la vez que aligeró las preocupaciones estratégicas de Estados Unidos⁵⁷ para que pudiera prestar atención renovada a su zona de influencia “natural”, América Latina. Además, la estrecha amistad entre Salinas y su colega George Bush animó las negociaciones del TLC (que llegarían a buen término con el respaldo ulterior de Clinton), anunciadas públicamente en febrero de 1991, después de que una filtración de la prensa estadounidense informó a los mexicanos de lo que estaba tramándose. Este giro

⁵⁷ Clint E. Smith, “México y Estados Unidos: hacia una alianza económica”, en Gustavo Vega (comp.), *México-Estados Unidos-Canadá. 1991-1992*, México, El Colegio de México, 1993.

radical de la estrategia de México bien merecía una reforma educativa para proclamarlo e inmortalizarlo.

Por ironías de la política, en México han producido divisiones los libros de texto gratuitos que se inventaron para apuntalar la identidad nacional a base de propiciar acuerdos. Como si faltaran paradojas, la intensidad de las controversias, con el pretexto de las dos reformas que culminaron en la publicación de nuevos manuales, creó el mito de que cada serie renegaba de la que substituía e innovaba radicalmente la interpretación del pasado nacional. Pero si el lector se concentra en las grandes líneas explicativas, le sorprenderá la continuidad entre todas las versiones, excepto por vaivenes de los juicios sobre la conquista española. Eso no quiere decir que no existan variaciones ideológicas. Las hay muy notables, testimonio fiel y deliberado de los gustos particulares de quienes patrocinaron cada reforma, pero están concentradas en las secciones que tratan de la economía de México y de sus relaciones con el exterior. Son particularmente reveladoras las referencias a Estados Unidos, que deben situarse en el contexto de las demás enseñanzas de los libros para evaluar su alcance.⁵⁸

⁵⁸ Tendré el mal gusto de citar otro artículo mío, con un análisis más detallado de la tercera serie de manuales gratuitos: Bernardo Mabire, "La visión de México y Estados Unidos en los libros de texto gratuitos de 1992 para la educación primaria", en Gustavo Vega (comp.), *México-Estados Unidos-Canadá 1991-1992*, pp. 461-486.

Los títulos de Historia de México para cuarto y sexto grados que produjo el gobierno de Salinas se imprimieron, por primera vez, en papel de buena calidad, seguramente para disociar la educación pública de la pobreza⁵⁹ y sugerir la pertenencia de México al primer mundo. Son libros escritos en un español paupérrimo y demasiado sintéticos, aunque dotados de una atractiva selección de ilustraciones. Fue tanta la premura para lanzarlos que no se publicó el que estaba previsto para quinto grado, cuyo autor no lo concluyó oportunamente; el de cuarto era un simple resumen del de sexto, que se emplearía también en quinto de manera temporal para subsanar la carencia.⁶⁰ Lo que más resalta en ambos es una voluntad de restauración, implícita en el hecho de que aparece

⁵⁹ Podrá parecer temeraria la sugerencia de un vínculo entre educación pública y pobreza, pero se trata, por desgracia, de un fenómeno empírico. Tan es así que la clase media se define como tal por su capacidad para costear a sus hijos una escuela privada, con la esperanza —no siempre bien fundada— de que reciban ahí una mejor formación, además de alternar con estudiantes de su mismo estrato. Más allá del simbolismo social, es concebible que en los establecimientos públicos el nivel académico se deprima por estigmas de la pobreza, tales como la desnutrición y la mala salud de numerosos alumnos. En nada alivia esta situación el hecho de que la carrera normalista no goce de gran prestigio social ni asegure un nivel de vida decoroso a los maestros.

⁶⁰ Las páginas citadas en lo sucesivo corresponden al libro para sexto año, que merece toda la atención por la causa expuesta.

en su cubierta la misma ilustración —la patria representada por una mujer morena— que figuraba en los manuales de los años sesenta. No se limita a este símbolo el deseo de regresar a la “normalidad”, sino que la tercera versión restablece la historia mexicana como disciplina individual, a diferencia de los textos de Ciencias Sociales, que combinaban esa materia con otras afines. Más que un propósito pedagógico, se adivina el objetivo de exorcizar los recuerdos de Echeverría, pero cabe preguntar qué se deseaba restaurar y cuánto se pudo. No es obvia la respuesta, por la constancia de las narraciones históricas y del programa ético derivado, con la importante excepción relativa a la fundación misma del país.

En la serie de 1992, resalta el énfasis en los aspectos destructivos de la conquista, que “interrumpió el desarrollo de las culturas en Mesoamérica” (28) para abrir un periodo de explotación brutal de los recursos locales (34). A la vez, hay satisfacción tan patente en señalar que “el calendario maya era más preciso que el europeo” (19) y tanto entusiasmo al describir el esplendor de la ciudad azteca sobre el agua, que el centro de gravedad del orgullo nacionalista oficial se desplaza a la era prehispánica. Tal vez los políticos que avalaron los libros lo hayan hecho por identificarse con los pueblos antiguos, donde existían nítidas divisiones entre gobernantes y gobernados (10). Otra explicación, más creíble por más simple, apuntaría a las preferencias personales del

encargado del texto de 1992, especialista en historia prehispánica.⁶¹ No se cae en el indigenismo extremo, porque se reitera que los mexicanos aparecieron "como fruto de la mezcla de las culturas mesoamericanas y las culturas europeas" (153). Aun así, otros párrafos hablan de pluralidad y diversidad, no de fusión o unidad; celebran que gracias a la supervivencia de población indígena "la cultura y la sensibilidad del mundo prehispánico siguieron vivas" (28); se regodean en evocar la resistencia irreductible de los chichimecas y, en vez de aprobar como antaño la construcción de iglesias católicas en el sitio de los templos sepultados, destacan que los indios seguían adorando "las imágenes de sus dioses [ocultas] tras los altares cristianos" (42), como para insinuar la existencia de universos culturales que se desarrollaron en forma paralela, sin mezclarse. Además, los mestizos no se equiparan ya a los mexicanos, sino que se les define como un grupo entre muchos, muy cercano al de los indios por los trabajos desempeñados (54). Finalmente, se subraya más que nunca la "fuerte desigualdad" que legó el dominio español (67).

El resto de la crónica histórica es similar, en esencia, a la que presentaban los títulos descartados. Como de costumbre, se admite que en la colonia apareció un primer nacionalismo entre las élites criollas, que no se extendió en razón de la estructura social

⁶¹ Se trata de Enrique Florescano.

opresiva, a la cual se atribuye el estallido de la Guerra de Independencia, en cuya reseña apenas se marca la contradicción entre las demandas de las masas y los intereses de los estratos privilegiados, para terminar con el consabido eufemismo de que todo el país salió triunfante de esa lucha. No hay innovación en elogiar la idoneidad de las constituciones de 1824 y 1857 ni en justificar las Leyes de Reforma, tampoco en referir que los jefes de la Revolución “querían distintas cosas, tanto que podemos decir que hubo muchas revoluciones” (113), porque las dos series previas proponían lo mismo.

Por ende, tampoco se desordena el panteón de los héroes, con Hidalgo, Morelos y Juárez a la cabeza, sitios de honor para Madero, Zapata y Villa, y alguna lisonja a quienes gobernaron en los decenios de 1960 y 1970. Correlativamente, se mantiene la lista tradicional de villanos, entre quienes se condena a Cortés, por su crueldad, con una virulencia superior a la del libro más antiespañol de los años sesenta. También el repudio a Santa Anna es más duro, porque ya no tiene las atenuantes reconocidas en la segunda versión: que el caudillo gozaba de popularidad y sus debilidades eran las de la época. Sigue en marcha, por otra parte, la rehabilitación de Maximiliano, que iniciaron, para premiar su liberalismo, los manuales de Echeverría. En cambio, no hay certeza de que los libros de 1992 emprendan la reivindicación de Porfirio Díaz. Es verdad que a lo largo de ocho pá-

ginas, que son muchas para el raquíptico manual de sexto grado, se vuelve a darle crédito por combatir a los invasores europeos y restablecer la paz en el país, pero reaparecen alusiones inequívocas al enorme costo social de sus políticas, de modo que el balance de su régimen sigue siendo negativo.

No es de extrañar que se mantengan firmes los valores éticos emanados de un relato histórico básicamente inalterado, pues la piedra angular del catecismo cívico sigue siendo la defensa de la unidad nacional —sin rencor por las diferencias sociales— que pide respetar al gobierno y las leyes. Los manuales formulan pocas reglas explícitas de conducta, por no invadir el territorio de los folletos de Civismo que estaban planeados, pero sí conservan todos los sabores del programa ético asociado con el nacionalismo que ha transmitido la educación pública desde los años sesenta. Ritualmente, los libros de Salinas vuelven a celebrar el ímpetu de la conciencia nacional, producto de “anhelos y fracasos compartidos”, de “la educación y la cultura”, de “intensas luchas sociales” y de “acciones ejemplares de muchos individuos que forjaron nuestra historia” (154). Se alaba a Carranza por hacer “del nacionalismo el valor más importante” en su campaña contra caudillos regionales (115) y se expone, como es ya ordinario, que la Revolución estalló cuando las tensiones acumuladas no hallaron más salida que la violencia; pero, “a partir de 1940, el clima de México no fue de cambios sociales, sino de

unidad nacional” (136), porque era “muy importante asegurar que no volvieran las pugnas del pasado [...]. Nuestra historia mostraba el valor de la paz interna y de la continuidad” (141). Este mensaje es idéntico al de treinta años atrás.

Sin embargo, la notable semejanza de los manuales de 1992 con sus predecesores, en cuanto a los postulados de un nacionalismo que custodia el orden establecido, no les impide “perfeccionar” las fórmulas para el desarrollo económico, en una curiosa alquimia que recupera políticas deseables de otra etapa, pero depuradas de equivocaciones y herejías. En tanto los libros originales propugnaban la economía “mixta”, cuyos fines patrióticos justificaban la intervención del Estado en actividades productivas, y los de 1974 refrendaban la eficacia de esta receta para conseguir la industrialización en condiciones de independencia económica, los de 1992 cuentan como parte de la historia la distribución de tierras o el respaldo gubernamental para organizar sindicatos en cumplimiento de disposiciones constitucionales. Aluden a la expropiación petrolera no ya como acto de afirmación de la soberanía, sino como medida que buscaba beneficios prácticos, con precedente en América Latina (133-134). El análisis de la historia económica mexicana plantea luego que “se estimuló el crecimiento de las industrias y de las ciudades” en el sexenio de Alemán, aunque esto “no acortaba las desigualdades” ni impidió la corrupción (139). A par-

tir de ahí, el rosario de penurias denuncia a un solo culpable, el gasto público, que precipitó la crisis a finales de los años cincuenta (140). Echeverría lo aumentó, pero "el remedio agravó la enfermedad" (145), y reincidió en el error López Portillo, propenso a "dar ayuda a la población en forma de subsidios" (146). Ante el desorden, despierta nostalgia el desarrollo estabilizador, que tuvo éxito a principios de los años sesenta al "reducir los gastos del gobierno y detener los aumentos en los salarios" (140). Por eso no sorprenden los elogios a De la Madrid, quien "decidió participar menos en la economía: ahorrar más y gastar menos" (148). Además, para resolver los inconvenientes de no contar con "productos de calidad [para] vender a otros países" (147), se abandonó "el modelo de crecimiento hacia adentro, protegido por altas barreras aduanales que fomentan el contrabando y la ineficiencia" (151). La apertura económica, calificada como "cambio fundamental en el México del siglo XX" (151), habría de servir para alcanzar los objetivos prioritarios de Salinas, al evitar que el país quedara aislado en "un mundo que tiende a integrar las economías y a acercar las fronteras" (156). Por eso México está "participando más activamente en el mundo, en sus mercados, en sus avances tecnológicos, en atraer capitales que impulsan la economía" (159).

A la luz de estas innovaciones en el esquema para el desarrollo económico, valga preguntar si hay

muda comparable en el bosquejo para la organización social de México. No es fácil precisarlo, porque los títulos de 1992 no dibujan un cuadro de la sociedad tan detallado como el de las series precedentes. La atención exagerada que conceden a las clases medias es uno de los raros indicios para adivinar algún pensamiento relativo a la sociedad contemporánea. En la lección dedicada a los aztecas se habla de “grupos intermedios” (26), luego se afirma que la consumación de la independencia fortaleció principalmente a las clases medias (75), que más de un siglo después, en el decenio de 1960, fueron las máximas usufructuarias del auge económico (142), pese a lo cual de sus filas salieron los líderes de la protesta que estalló en 1968 (42). El libro de sexto año define estas clases como “fruto de la prosperidad de las sociedades” (142) y enumera los muchos grupos laborales que las componen; podría ser más grande la lista que el verdadero peso de quienes figuran en ella.

No son más claras las referencias a la política, por el anhelo de brindar prioridad absoluta a la modernización de la economía. En contraste con sus predecesores, los manuales que publicó Salinas se abstienen de definir los sistemas de gobierno básicos y ni siquiera describen con alguna claridad las instituciones políticas mexicanas. Recomiendan avanzar hacia una democracia “que garantice la estabilidad” (159), sin precisar lo que la constituye, y resaltan que la Constitución de 1917 otorgó “mayor fuerza al po-

der Ejecutivo [...] apoyándose en la experiencia histórica" (118), observación con antecedentes en la primera serie de libros gratuitos, mas no en la segunda. El tomo de 1992 para sexto grado apenas enumera las funciones históricas del partido oficial y nombra al PAN, fundado en reacción contra el cardenismo (135), no así los otros partidos de oposición. Por su parte, la Iglesia católica y el ejército⁶² siguen excluidos de la política, como para expiar su papel en otros tiempos. Si las versiones antiguas mencionaban a la Virgen de Guadalupe en el estandarte de Hidalgo, la de 1992, con afán de romper un tabú, le dedica llamativas ilustraciones a color y hace hincapié en que

⁶² Una versión preliminar de esta serie de libros escolares sugería al ejército como responsable primordial de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Los altos mandos militares reaccionaron con aparente lentitud y fueron muy cautelosos, toda vez que se abstuvieron de emitir declaraciones ruidosas en las primeras semanas del debate respecto a los nuevos manuales. En cambio, no faltaron periodistas que aludieran al malestar de las fuerzas armadas e hicieran su apología con el doble argumento de que éstas siempre se han apegado a su versión de los hechos, según la cual dispararon para repeler una agresión (Juan Ruiz Healy, "A Fondo", *Novedades*, 27 de agosto de 1992, p. 8), y de que se limitaron a cumplir una orden civil, es decir la del presidente Díaz Ordaz (Carlos Ramírez, "Indicador Político", *El Financiero*, 28 de agosto de 1992, p. 41). Fue muy eficaz la negociación que presumiblemente llevaron a cabo los militares con el gobierno, porque la versión definitiva de los libros que substituyó el tiraje preliminar suavizó su descripción de aquel acontecimiento para no lastimar al sensible ejército.

algún sacerdote “convirtió la devoción guadalupana en un culto patriótico” (58). Pero no hay benevolencia para la Iglesia como institución. Han desaparecido incluso las viejas distinciones entre conquistadores crueles y evangelizadores bondadosos, porque ahora se alude a frailes maquiavélicos que “estudiaron con detalle la religión y costumbres de los indios para combatirlos mejor” (42). No se oculta la obsesión del clero por salvaguardar sus privilegios en el siglo XIX (73, 77, 84, 94) y se da a entender que la intransigencia de los obispos desató la guerra cristera (130). Se pinta un retrato similar de ambición desmedida, egoísmo y oportunismo de las fuerzas armadas (77, 78, 110, 122, 127).

Congruentes con el objetivo de renovar la economía, los manuales publicados en el sexenio de Salinas expresan más interés en transformar las relaciones del país con el mundo que en corregir los vínculos entre los mexicanos. No es inusual la treta, pero la representación del medio internacional se transfigura y contrasta con la de los libros previos. Los más antiguos, a fuerza de proyectar su tesis nacionalista de interdependencia a la escena mundial, abogaban por la cooperación con otros países, pero a la vez dejaban entrever resentimiento contra naciones poderosas que alguna vez hicieron víctima de sus ambiciones a México. La segunda serie acentuó esa ambivalencia, al refrendar con el mismo vigor la aspiración internacionalista y el rechazo del colonialismo, responsabi-

lizado de la pobreza en las regiones atrasadas. Entre lo poco que dicen los folletos de 1992 sobre el planeta, no quedan sino resabios de las ideas anticolonialistas, simples ecos de rencor por la dominación española únicamente. El recelo frente al exterior ha desaparecido casi por completo para dar paso a la esperanza de superar los problemas nacionales mediante relaciones económicas estrechas con otros países, en particular con uno que por su importancia borra a todos los demás del escenario imaginado. En efecto, se apunta que, a pesar de muy graves conflictos históricos, Estados Unidos puede ser un socio confiable de México, más aún porque hay antecedentes de cooperación mutuamente ventajosa.

Es favorable la primera referencia al vecino, es decir a "las trece colonias inglesas, parte de lo que hoy son Estados Unidos" (63), pues evoca el paralelismo de condiciones coloniales. Más adelante, se sugiere —igual que en las versiones anteriores— que la guerra de independencia estadounidense dio impulso a la de México (68), sin reparo en destacar que los liberales mexicanos abrazaban el ejemplo de "algunos países europeos y Estados Unidos" (77). Por eso fue más doloroso el conflicto que siguió. Lejos de subestimar la Guerra de 1847, el tomo de 1992 para sexto grado por única vez utiliza palabras emotivas cuando dictamina que la mayor desgracia de México en el siglo XIX "fue la humillación militar y la pérdida del territorio nacional a consecuencia de la guerra con

Estados Unidos” (79), que no coadyuvó a ensanchar la conciencia nacional, como decretaban piadosamente los textos de los años setenta, sino que fue un desastre total, imputado sin vacilación al expansionismo yanqui: “Polk declaró la guerra y ordenó la invasión de México” (82). Pero al examinar las relaciones mexicano-estadunidenses durante el porfiriato, no se cuestionan las ventajas de construir vías férreas para facilitar el comercio con el país vecino, más aún porque muchas actividades económicas en el norte de México “eran extensiones de empresas y proyectos estadunidenses”, y numerosos mexicanos cruzaban la frontera “en busca de trabajo y oportunidades” (103). Sin aludir al rencor popular contra las empresas gringas, se reconoce que la represión de la huelga de Cananea estuvo a cargo del ejército mexicano con el apoyo de *rangers* prestados (107).

La crónica de la Revolución no subestima la injerencia de Estados Unidos, sino que recuerda el pacto del embajador Henry Lane Wilson con Huerta para asesinar a Madero, por ejemplo, y despliega su mayor audacia cuando insinúa, en un tono frío de realismo político, que el reconocimiento diplomático del gobierno estadunidense determinó el triunfo de Carranza sobre Villa y Zapata, a quienes “les faltó unión y entendimiento de la situación internacional” (115). El manual de sexto grado de 1992 cita el conflicto con Estados Unidos a raíz de la expropiación petrolera, pero insiste en que Cárdenas “contó con la

comprensión del gobierno estadounidense" (134) para llegar a un acuerdo con las compañías perjudicadas, a las que responsabiliza exclusivamente de las fricciones, juicio válido según la evidencia disponible, nunca antes emitido en los libros de texto oficiales. El clima cordial de las relaciones bilaterales a partir de la Segunda Guerra Mundial se atribuye a que "México fue un buen proveedor de trabajadores y productos para la economía de guerra estadounidense" (137), lo cual estimuló su propia industrialización. Al paso del tiempo se reforzaron los vínculos entre los países, porque "aparecieron nuevos [sic] empresarios mexicanos con socios extranjeros" desde el sexenio de Alemán (138), y porque en el siglo XX fue continua la emigración de mexicanos a Estados Unidos (121, 158), según una lógica independiente de las relaciones diplomáticas.

Pero a diferencia de los dictados de la economía, los de la política vulneran la cordialidad entre las dos naciones, tal como se ilustra con los efectos de la diplomacia mexicana cuando se ha dejado llevar por nostalgias del radicalismo. No se reprocha a López Mateos que mantuviera relaciones "con la Cuba revolucionaria, como gesto de independencia ante Estados Unidos" (141), porque esto no tuvo costos detectables. En cambio, sí habría sido oneroso para el México de De la Madrid apoyar la lucha sandinista y reconocer el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, al que combatían los

estadunidenses “como parte del comunismo internacional. El desacuerdo en esta materia redujo las posibilidades de México para negociar sus problemas económicos con Estados Unidos” (149). Felizmente, el gobierno de Salinas corrigió esa anomalía, luego “tomó la iniciativa de formar un gran bloque económico de América del Norte, formado [sic] por Canadá, Estados Unidos y México, comparable al gran bloque de la Comunidad Económica Europea [sic]” (151).

A no dudar hay diferencias entre este grito de colaboración norteamericana y el mensaje de uno de los primeros libros de texto gratuitos, que en los años sesenta caracterizaba a Estados Unidos como principal potencia imperialista e intervencionista (V: 165-176). Sin embargo, las propuestas realmente novedosas de la serie de 1992, algunas de ellas tan sutiles que probablemente no estén al alcance de la mayoría de los escolares, aparecen en frases muy breves que se diluyen en un conjunto de rancias ideas. Además, al medir los alcances de la serie de 1992, cabe recordar que tenía carácter provisional (circuló durante un par de años solamente), reflejaba la premura con que se escribió y quizá no haya debido su breve existencia a un auténtico proyecto educativo ni a designios ideológicos articulados, sino a razones prosaicas como la verosímil ambición personal de Zedillo (en ese tiempo secretario de Educación) y, sobre todo, la apetencia de Salinas de renegar de Echeverría y reivindicar a López Mateos, con miras a justificar los vuelcos de

sus propias políticas económica y exterior, que seguramente interesaban al mandatario mucho más que la suerte de los libros de texto gratuitos.

Aun así, los manuales de la tercera serie merecen atención, porque en dos planos indican el clima político: el de su contenido mismo y el de las reacciones que provocaron. En lo que se refiere al primero, los libros delinearían empeños de la clase gobernante en conferir nuevas connotaciones al nacionalismo oficial para acoplarlo a una reforma que alteró el papel del Estado en la economía y la diplomacia. No puede ser casualidad el paralelismo entre los cambios tangibles en la vida pública y las innovaciones verdaderas de los libros, concentradas en las frases poco numerosas, pero inequívocas, que disponen normas para el funcionamiento económico del país y sus relaciones con el mundo, en especial con Estados Unidos. Tampoco es de sorprender la tensión entre elementos añejos y recientes del patriotismo en los manuales. Más aún, el dilema respecto a si la ideología estatal mexicana sigue siendo "nacionalista", pese a que su versión reformada descarga al Estado de la responsabilidad de integrar la nación para confiar esa labor al contacto del país con la economía internacional (equivalente a fomentar la vinculación con Estados Unidos), remite al enigma teórico de cuánto puede manipularse el contenido del nacionalismo sin que estalle la envoltura de su concepto.

La imagen del país vecino en los libros de 1992 ilustra bien la disonancia de cánones ideológicos antiguos y añadidos, en vista de la audacia implícita en soñar matrimonio con quien solía ser el enemigo mayúsculo de México según los decretos del civismo. Los manuales superan el conflicto al subrayar que la experiencia más traumática en las relaciones entre ambos estados tuvo lugar hace siglo y medio, y desde entonces, gradualmente, se impusieron condiciones favorables a una alianza. La selección de acontecimientos para nutrir ese optimismo no implica, por cierto, reinterpretar la historia nacional, que no haría falta siquiera, porque se desea trastocar la visión del futuro, no la del pasado. Sin embargo, el giro de actitud frente a Estados Unidos no deja de ser incómodo para varias generaciones socializadas en la creencia de que la personalidad de México debería contraponerse al temperamento anglosajón. Es paradójico, además, que los libros quieran sacrificar la originalidad en su reseña de una historia que, no obstante los ánimos de restarle todo sentido heroico, deja entrever raíces culturales profundas y una experiencia colectiva bastante rica para mantener vivo el instinto de autonomía. Al desaparecer el enemigo externo del imaginario oficial, es válido preguntar si las fuerzas impersonales de la economía “globalizada” podrán suplir el empuje constructivo que el Estado mexicano tuvo alguna vez, o debería haber tenido, o habría querido tener para integrar la nación.

EL DEBATE "EDUCATIVO" DE 1992

El segundo plano en el que hay revelaciones es el del debate con el pretexto de la reforma educativa, porque ahí se advierten de nuevo los vínculos entre Estado y sociedad, y es posible juzgar la evolución política —o la involución— comparando reacciones contra una medida gubernamental con las que produjo otra similar en épocas previas. Por haber asegurado la consecución de los fines educativos del Estado desde 1960, los libros de texto gratuitos tienen una prominencia que los vuelve objeto de querrela cada vez que una reforma altera su contenido. La polémica permite medir la fibra del sistema político, porque la pone a prueba, así como alteraciones —o continuidad— en las alianzas del Estado con varios grupos y en las estrategias de aquél para negociar con éstos. En 1992, durante las primeras semanas del alboroto por los libros escolares recién editados, llama la atención que los críticos tradicionales —a saber, los núcleos conservadores que organizaron campañas de repudio a las series de los años sesenta y setenta— casi no se pronuncien respecto a la nueva versión, y lo poco que dicen tiende a ser elogioso, por obra de un nuevo entramado de relaciones entre el poder público y segmentos de la sociedad.⁶³

⁶³ Quienes hayan tenido el valor de llegar hasta aquí podrían haberse vuelto fanáticos de mis artículos y me perdonarán que cite uno más, el último: Bernardo Mabire, "El debate con el pre-

En su breve declaración única,⁶⁴ la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), poco dispuesta a dañar la relación cordial con el gobierno, manifiesta beneplácito por la restauración de la historia patria como materia individual y celebra que los libros de 1992 sean más “mesurados” y se abstengan de esparcir “ideas extrañas [léase comunistas] como antaño”, es decir los interpreta como antítesis de los que lanzó Echeverría, y cabe suponer que en verdad haya sido eso el objetivo de Salinas. No importa la constancia en la interpretación de la historia entre las series, porque el ambiente político y las redes de alianzas del momento son lo que fija la pauta del debate. Pero los elogios no son irrestrictos, sino que la Coparmex pone en guardia contra el peligro de que “nuevamente se caiga en una interpretación oficialista” de la historia, comentario que por principio niega legitimidad a la voluntad estatal de dar forma a la nación y forjar la cultura mexicana, como para marcar el límite de la alianza entre las élites económica y política, que se distinguen por sus funciones más que por el perfil sociológico de sus miembros, en realidad propensos a transitar de una a otra.

texto de la reforma educativa de 1992 y lo que revela de México”, *Foro Internacional*, XXXVI (1-2), enero-junio de 1996, pp. 400-439.

⁶⁴ Amalia Frías Santillán, “Avance positivo en los nuevos libros de texto: Coparmex”, *Unomásuno*, 1º de septiembre de 1992, p. 8.

Por su parte, ajeno a la actitud tradicional de las escuelas privadas más conservadoras, el presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares elogia la presentación de los libros nuevos y a duras penas improvisa alguna crítica del contenido,⁶⁵ con mucha moderación y más superficialidad, por causas análogas y para fines similares a los de los empresarios.

Hace otro tanto la Iglesia católica, en plena luna de miel con el presidente que restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano y reconoció la personalidad jurídica de las iglesias. En testimonio de agradecimiento, los altos dignatarios guardan el más púdico silencio y, cuando les piden su opinión sobre los nuevos libros de texto, sostienen que no los han leído. Sólo el obispo de Tuxtla Gutiérrez da una nota discordante que reanima la agresividad de debates anteriores,⁶⁶ quién sabe si por distracción o instinto, o para enunciar una opinión contestataria en el seno de la Iglesia, pero el hecho es que en 1992 el alto clero no organiza campaña de gran alcance contra los programas escolares remendados. El contraste con los años sesenta y setenta es más llamativo si se con-

⁶⁵ Norma Angélica Cuéllar, "Obligados los profesores a una mayor capacitación", *El Heraldo*, 6 de agosto de 1992, p. 4.

⁶⁶ Es el obispo de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Aguirre Franco. Véase Wilbert Torre, "Propondrá la Iglesia cambios al libro de texto por incompleto y mutilado", *El Universal*, 3 de septiembre de 1992, p. 19.

sidera que los títulos de la tercera serie no modificaron las tesis tradicionales de la historia oficial respecto al papel poco edificante de la Iglesia católica en México; eso no disgusta ya a los preladados, por la prioridad de los intereses políticos del momento sobre las consideraciones ideológicas.

Las sorpresas continúan al examinar la posición de la UNPF, cuyo dirigente exclama que los manuales nuevos trazan una “panorámica armoniosa” de la historia y “son mejores que los que teníamos antes”,⁶⁷ juicio sin fundamento empírico, similar al de la Coparmex y que encierra odio contra Echeverría casi más que amor por Salinas; el líder de la UNPF festeja que traten el guadalupanismo, pero “faltó cierta claridad al hacerlo”; se infiere de esto la imposibilidad de complacer totalmente a la derecha con bandera religiosa. El entrevistado añade que, si bien los libros no son definitivos, a partir de ellos “podemos empezar a construir la verdadera historia de México”, galante oferta al gobierno de colaboración sobre bases de estricta igualdad: aceptar el liderazgo del Estado en materia educativa sigue siendo impensable.

Cuando la discusión pasa al ámbito de los legisladores, que es novedad e indicio de democratización incipiente, el PAN transita del silencio a la crítica moderada, pero no vacila en otorgar apoyo abierto a la

⁶⁷ Antonio Ortega, “Fin a la tendencia de control político en los libros de texto”, *Excelsior*, 8 de agosto de 1992, p. 15.

reforma educativa en los momentos más tensos de la polémica. Esto es síntoma de un tiempo en que el PAN, por tradición partido de oposición leal, entabló con el PRI una alianza franca en reacción contra la fuerza inusitada que demostró el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones de 1988, como si enfrentar este peligro, que era interés compartido con el gobierno, justificara correr el riesgo de inmolarsse como órgano disidente. No es que el PAN abandone sus demandas tradicionales de libertad de enseñanza. Más bien hay tensión entre el apego a preceptos doctrinarios que solían dotar a ese partido de identidad y el impulso pragmático de fraguar alianzas tácticas por conveniencia inmediata. De ahí que a veces la retórica panista suba de tono y recupere temas clásicos, como la defensa de los derechos "naturales" de los padres de familia. Sin embargo, la alianza entre el PAN y el PRI repunta cada vez que da signos de vida el enemigo común (la izquierda), hasta alcanzar su apogeo cuando un panista como Diego Fernández de Cevallos avala la "nueva" versión oficial de la historia mexicana como proyecto de su propio partido.⁶⁸

En vista de que la derecha abandonó el papel de enemigo de los libros gratuitos para convertirse en su defensor, hasta cierto punto es lógico que ahora los

⁶⁸ Roberto Zamarripa, "Analizarán Comisiones de Educación del Congreso los libros de historia", *La Jornada*, 3 de septiembre de 1992, p. 3.

abomine la izquierda, mas no como institución. Encabeza las críticas el PRD, orgulloso aún por el recuerdo de su buen desempeño electoral cuatro años antes. Hay quejas en cuanto a procedimiento, por la prisa para escribir los manuales y la falta de consultas al magisterio, pero los reproches capitales se refieren al supuesto contenido ideológico de la nueva serie, que según el PRD “traiciona” el espíritu del proyecto educativo original del Estado y procura “adecuar la historia a las intenciones del régimen”. Se objetan, en particular, el tratamiento de la Guerra de 1847 y, más aún, la “reivindicación” de Porfirio Díaz, que serviría para esbozar similitudes con Salinas y justificarlo a su vez.⁶⁹ La acusación de Porfirio Muñoz Ledo (en esa época legislador perredista) de que las herejías

⁶⁹ Jorge Camargo Zurita, “Manipula políticamente a los niños el texto de historia: PRD”, *El Universal*, 12 de agosto de 1992, p. 25; Óscar Sánchez Márquez, “Distorsionan la realidad histórica los nuevos libros de texto gratuitos”, *Ovaciones*, 14 de agosto de 1992, p. 6; Jorge Octavio Ochoa, “Cuestiona el PRD el contenido de los libros de texto”, *Unomásuno*, 19 de agosto de 1992, p. 5; “Censuran los diputados del PRD el enfoque histórico de los libros de texto”, *Novedades*, 19 de agosto de 1992, p. 7; Esteban Espinosa Montejano, “Rechazan los perredistas el nuevo libro de texto gratuito de historia”, *El Heraldito*, 19 de agosto de 1992, p. 2; “Crítica perredista a los nuevos libros de historia”, *Diario de México*, 19 de agosto de 1992, p. 5; Arturo Zárate Vite, “Fallas y manipulación de la historia en los nuevos libros de texto: PRD”, *El Universal*, 19 de agosto de 1992, p. 25; Ángel Granados Velasco, “Los libros de historia fueron impresos en talleres privados”, *El Día*, 19 de agosto de 1992, p. 6.

habrían sido resultado de una solicitud puntual del gobierno de Estados Unidos (a cambio de su apoyo al TLC)⁷⁰ corona las increpaciones de un PRD empeñado en rescatar la variante izquierdista del nacionalismo mexicano que solía enarbolar el sistema priista. Ese partido también exige —y lo secundan otros— investigar gastos federales, pero su impulso primario es el de explotar símbolos para darse brillo, con poco interés visible por la suerte de la educación pública.

La tarea que adopta en la polémica el Partido Popular Socialista (PPS), en vías de extinción, es la de secundar las críticas del PRD. Su disgusto por la presunta influencia de la pedagogía estadounidense en la preparación de los libros y por la presión de embajadores extranjeros que "denunció" Muñoz Ledo⁷¹ refrenda los atávicos sentimientos antiyanquis de la izquierda mexicana. Es significativo el enojo del PPS por la "devaluación" de algunas figuras históricas, tales como los Niños Héroe, símbolo de resistencia contra la amenaza externa, que "no aparecen" en los títulos de 1992. En realidad éstos sí los mencionan sin identificarlos por sus nombres, como la versión

⁷⁰ Manuel Ponce, "Boicotear los libros de texto, propone Muñoz Ledo a maestros y a paterfamilias", *El Universal*, 1° de septiembre de 1992, p. 22; "Llama Muñoz Ledo a los maestros a boicotear los libros de historia", *Diario de México*, 1° de septiembre de 1992, p. 5.

⁷¹ Manuel Ponce, "Se busca enterrar el pasado con el nuevo libro de texto: Jorge Tovar", *El Universal*, 28 de agosto de 1992, p. 21.

anterior, pero poco importa la substancia de los libros en cuanto se han vuelto pretexto de controversia.

En el magisterio se origina una segunda corriente de críticas “izquierdistas” muy variadas, que ilustran la heterogeneidad del gremio y las divisiones internas del SNTE. Su mentora, Elba Esther Gordillo, por sus giros de actitud parece navegar sobre corrientes opuestas para crear una apariencia de dominio. Esa maniobra favorece la colaboración con las autoridades sin que la dirigencia del SNTE pierda su porte de autonomía. Cada vez que aumenta el malestar de ciertos grupos de maestros, la líder pasa de los elogios a reservas que delatan la paradoja de un sindicalismo en teoría controlado, pero capaz de plantear en permanencia la amenaza de subvertirse. Los miembros relativamente moderados se conforman con lamentar que no les pidieran su opinión ni les ofrecieran adiestramiento en los “nuevos” programas.⁷² En cambio, las corrientes radicales del magisterio cuestionan contenidos específicos de los libros, por ejemplo, la caracterización demasiado benigna para su gusto del porfiriato y la “denigración” de Zapata y

⁷² Martín Moreno, “Desconoce el SNTE los libros de texto gratuitos y le preocupa”, *El Universal*, 18 de julio de 1992, p. 4; Gloria Oliva Miranda, “Insuficiente el tiempo establecido para la actualización pedagógica: maestros”, *El Heraldito*, 10 de agosto de 1992, p. 9; Miguel Ángel Ramírez, “Marginó la SEP al SNTE en la preparación de los libros de historia”, *El Nacional*, 3 de septiembre de 1992, p. 13.

Villa.⁷³ Si a ninguna facción le preocupan mucho los manuales gratuitos, todas propugnan sus intereses particulares para afianzarse dentro del SNTE y desplegar influencia en la política nacional. Cualquier medio es válido para conseguir este fin, y se prefiere apelar a símbolos de una mitología de izquierda desgastada. Cabría esperar algo mejor de los profesores universitarios, pero sus opiniones sobre la reforma de 1992 —en general negativas— suelen carecer de calidad intelectual y muestran desconocimiento de los libros de texto.⁷⁴

Por último, quienes aspiran a ser divas del medio pensante se alejan de sus colegas investigadores menos por el carácter o los dilemas vitales que por el grado de ambición, a juzgar por un debate entre escritores que transita de lo jocoso a lo visceral y por momentos da la impresión de ser un pleito particular, muy sintomático de la ambivalencia del mundo cultural mexicano frente al Estado, porque el anhelo de recibir su patrocinio es por lo menos tan intenso como la compulsión de criticarlo. Hubo quien caracterizó la controversia "educativa" de 1992 como prolongación de la contienda entre los equipos de las

⁷³ Gabriela Flores, "Muchos maestros desconocen el proyecto educativo", *El Universal*, 19 de agosto de 1992, p. 11; Rosa Elvira Vargas, "Usarán los maestros otras fuentes, además del nuevo texto de historia", *La Jornada*, 25 de agosto de 1992, p. 10.

⁷⁴ Víctor Manuel Bautista López, "Desnacionalizante omitir y tergiversar la historia", *El Día*, 3 de septiembre de 1992, p. 12.

revistas *Nexos* y *Vuelta*,⁷⁵ que en principio representaban dos corrientes de actitud de los intelectuales frente al poder público, aunque la diferencia entre las dos fuera inferior a lo que ambas deseaban. Las recriminaciones mutuas ciertamente sugieren el antagonismo de camarillas en pugna por ejercer influencia y obtener reconocimiento del gobierno que critican. No es claro si entre las estrellas de la intelectualidad predomina una preocupación por el prestigio o la mera ambición de enriquecimiento material (en el fondo suelen ir aparejadas), pero se termina por creer que es la segunda, a juzgar por la insistencia en el tema del presupuesto para escribir los libros. Las pocas referencias directas a ellos envuelven ataques personales, y la combinación de frivolidad y sarcasmo en las arengas de los pensadores enemigos confirma desprecio por los materiales escolares durante el debate al que sirven de pretexto.

Peor aún, también la defensa de los manuales que propone un alto funcionario público tiende a dejarlos de lado,⁷⁶ y ocurre otro tanto con la apología que hace de ellos uno de sus autores, quien en la entrevista para un diario no justifica la esencia de los escri-

⁷⁵ Jaime Avilés, "El negocio de la historia y la historia del negocio", *El Financiero*, 13 de agosto de 1992, p. 51.

⁷⁶ Pascual García Alba Iduñate, "Precisiones sobre los nuevos libros de texto", *La Jornada*, 21 de agosto de 1992, p. 18; Pascual García Alba Iduñate, "Respuesta a Miguel Ángel Granados Chapa", *Unomásuno*, 21 de agosto de 1992, p. 36.

tos, sino la resolución de volver a impartir las clases de historia patria como asignatura individual.⁷⁷

Entonces, la polémica de 1992 a duras penas se refiere a los libros de texto propiamente dichos, pero da lugar, como es habitual, a que afloren conflictos latentes en el paisaje mexicano, que se expresan y resuelven de modos poco democráticos; por ende, refleja la política nacional, de cuyo análisis se desprende que en ese año seguían intactas las instituciones y recetas autoritarias a las que debió su larga vida el sistema priista, inconcebible si no se hubiera vuelto cómplice de él la sociedad —mal llamada "civil", porque su conducta no lo ha sido— que vivía en simbiosis con sus gobernantes.

Por otra parte, la controversia a propósito de la tercera serie fue pretexto para que el Ejecutivo la retirase de circulación con la misma premura con que se produjo, una vez cumplida su finalidad de divulgar la ideología de Salinas y disociarla de la de Echeverría. Pasó completamente inadvertido el lanzamiento de otros manuales, tan inocuos que nadie se ofendió. A fuerza de que el gobierno mismo y sus detractores abusaran de ellos, los libros de texto gratuitos parecían perder su magia en un país donde el Estado renegaba de sus labores constructivas, pero sin abandonarlas del todo, porque no había quien lo supliera.

⁷⁷ Patricia Vega, "El estudio de la historia patria, primer aporte del nuevo libro: Florescano", *La Jornada*, 24 de agosto de 1992, p. 23..

EPÍLOGO CON MÁS NOSTALGIA QUE ESPERANZA

En el periodo que se extiende del sexenio de Echeverría a la fecha, las políticas culturales del Estado mexicano han sido tan insuficientes e irregulares que se podría cuestionar su existencia misma, más aún a falta de un ambicioso proyecto que las articule, pero sus logros modestos no deben subestimarse, porque son preferibles al vacío absoluto y no han tenido competencia digna del nombre. Para compensar sus limitaciones, la faena de alimentar la conciencia nacional recayó en la política para la educación primaria, que ha gozado de estabilidad a lo largo de cuarenta años por encima de las dos renovaciones que alteraron parcialmente el mensaje de los libros de texto, sin abjurar de las premisas de un credo patriótico invariable en sus grandes líneas, cuyo ocaso coincidiría con el del siglo XX. El estudio de las reformas escolares y de las reacciones que produjeron desemboca en una visión de la política mexicana, donde se confirma la pugna entre el nacionalismo del Estado (sobre todo cuando hacía depender su legitimidad principalmente de la historia) y el de la derecha católica, que por ironías de la suerte no eran del todo incompatibles; resalta, a la vez, la persistencia de modalidades de negociación, entre el gobierno e interlocutores aficionados a ejercer presiones subterráneas, que denotaban la inexistencia de democracia y el auge

correlativo del autoritarismo bien entrados los años noventa.

Es discutible que la derrota del PRI ante el PAN (o, mejor dicho, ante el caudillo Vicente Fox) en las elecciones presidenciales del año 2000 señale la victoria de una nueva cultura democrática, de la que hoy no se ven indicadores, salvo el ejercicio aislado de un voto de castigo contra el antiguo partido dominante, cuyo declive y desmovilización fueron obra, en parte, del presidente Zedillo para ingresar a la historia como artífice de la democracia electoral. Si el triunfo de una derecha desinhibida sobre una derecha con sanos remordimientos promete la continuidad de las políticas económicas que instauró De la Madrid, pero con apego más dogmático a las leyes del mercado, se antoja especular sobre las posibles ofertas culturales de un mandatario con mentalidad abiertamente empresarial. Convendría rechazar las que revelaran influencia del clero católico, propenso a coqueteos con Fox (pese a que la doctrina de la Iglesia condena el afán de lucro), porque la modernidad es laica. Una pista del futuro estaría en los programas de la televisión privada, único remedo de alternativa que ha sabido ofrecer, desde hace tiempo, la derecha patronal que repudiaba el liderazgo del Estado en materia de educación y cultura. Es un hecho que hubo connivencia entre el gobierno y la televisión privada —como para probar que no existían límites precisos entre la élite política y la económica, pues coincidían sus

intereses últimos— después del breve interludio de fricciones en el sexenio de Echeverría, porque el poder público optó —sin anunciarlo— por un pacto con Televisa, transformada en consorcio invencible a base de colocar sus acciones entre todos los grupos industriales del país. Mediante el acuerdo tácito, que a veces dejaba de serlo, sin perjuicio del cual los programas mostraron invariablemente el sello de una compañía privada, el locutor Jacobo Zabludovsky se volvió en la práctica secretario de la información, y las verdaderas autoridades educativas fueron los animadores de insulsos programas difusores de canciones que no merecerán, dentro de un siglo, más atención que la de los sociólogos.

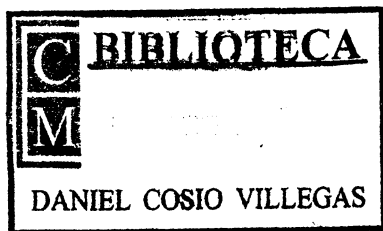
Por eso atiza curiosidad lo que imaginó el autocrático jefe de la compañía, Emilio Azcárraga Milmo: un México bonito de personas blancas, prósperas y generalmente felices, tal como lo inventan telenovelas como aquella en la que Angélica María, admirada actriz de tez y ojos claros, desempeña el papel de una indígena. Estas series, no los libros de Octavio Paz, son el producto cultural que exporta México masivamente y cambian hábitos de vida dondequiera que se exhiban: en la antigua Unión Soviética, durante su transmisión estallan las tuberías viejas por el agua que se acumula al disminuir el trabajo doméstico, y también cae la tasa de criminalidad. Toda proporción guardada, el éxito mundial de las telenovelas mexicanas responde a su parecido con las películas

de Hollywood, en razón de una simplicidad que las vuelve accesibles a todo espectador. Si en el futuro las ficciones de la televisión privada ganaran más ascendiente como modelo para nuestro país, podríamos sentir nostalgia por las políticas culturales del Estado mexicano en el último tercio del siglo XX: no fueron gran cosa, tal vez, pero eran lo único que había.



*Políticas culturales y educativas del Estado
mexicano de 1970 a 1997*

se terminó de imprimir en febrero de 2003
en los talleres de Encuadernación Técnica Editorial, S.A.
Calzada de San Lorenzo 279-45, 09880 México, D.F.
Composición tipográfica y formación: Literal, S. de R.L. Mi.
Se imprimieron 1 000 ejemplares más sobrantes para reposición.
La edición estuvo al cuidado de la Dirección de Publicaciones
de El Colegio de México.



Éste es el trabajo de un politólogo sobre algunas políticas culturales del Estado mexicano en los últimos treinta años del siglo xx, que vieron el ocaso del sistema priista. Luego de examinar sus antecedentes, el autor las somete a escrutinio, siempre con la preocupación de situarlas en su entorno, relacionarlas con medidas públicas en otros ámbitos y dilucidar sus intenciones y efectos. El análisis expone más debilidades que fortalezas y concluye que las políticas culturales del priismo en decadencia quedaron por debajo de sus promesas y de las necesidades nacionales. Sin embargo, suplió estas carencias la política relativa a la instrucción primaria, fuente de legitimidad de un sistema político inusualmente longevo, en contubernio perverso con la sociedad en la que estaba arraigado. Y a pesar de todo queda alguna nostalgia, frente a la desolación del presente...

ISBN 9-681-21094-8



9 789681 21094



Centro de Estudios Internacionales
EL COLEGIO DE MÉXICO